



CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

CONTRAINSURGENCIA A LA MEXICANA

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO FRENTE A LA AMENAZA DE GRUPOS ARMADOS. LA LIGA COMUNISTA

23 DE SEPTIEMBRE Y EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
MAESTRO EN CIENCIA POLÍTICA**

PRESENTA:

CARLOS IVÁN GUEVARA ROMERO

DIRECTORA: DRA. MÓNICA DEL CARMEN SERRANO CARRETO

LECTORES: DR. SERGIO AGUAYO QUEZADA Y DR. RAÚL BENÍTEZ MANAUT

MÉXICO, D.F., DICIEMBRE 2013

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi directora de tesis, la Dra. Mónica del Carmen Serrano Carreto, por la dedicación y el esfuerzo puesto en este trabajo. Sin duda, esta investigación no hubiera sido posible sin sus comentarios atinados, su conocimiento y su paciencia revisión tras revisión. Mi gratitud eterna por ser la mejor guía en este camino.

Al Dr. Sergio Aguayo Quezada y al Dr. Raúl Benítez Manaut por la atenta lectura de mi investigación. Sus comentarios fueron de gran utilidad.

Al Colegio de México y a todos los profesores-investigadores que tuve la oportunidad de conocer a lo largo de la maestría. Los conocimientos que atinadamente nos transmitieron son de un valor incalculable.

A mis padres, Patricia por ser una fuente interminable de apoyo y cariño, y Samuel por inculcarme la importancia de superarme día con día. A mis hermanos, Alejandra y Sebastián, por su cariño incondicional. A mi sobrina, Lucía, que llegó hace poco más de un año para traer luz y alegría a nuestras vidas.

A Berenice, por estar a mi lado y sacudir todo a mi alrededor. Por las pláticas eternas y por el tiempo que compartimos realizando nuestras investigaciones. Por ser mi equipo.

A los que antes fueron compañeros, pero hoy, con gusto, llamo amigos. Alberto, Andrés, Juan Manuel, Iram y Ana. Cuando se trató de estudiar, estudiamos; cuando se trató de divertirse, nos divertimos. Estoy seguro que todavía nos quedan muchas historias por escribir.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO.....	4
LA RESPUESTA FRENTE A LA AMENAZA INSURGENTE.....	16
CAMBIO DE PARADIGMA. DEL CONCEPTO DE GUERRA A LAS NUEVAS NOCIONES PARA ENTENDER EL CONFLICTO INTERNO	18
<i>Las nuevas guerras.....</i>	20
<i>Las guerras civiles.....</i>	26
INSURGENCIA	28
<i>El papel de la población y su relación con la insurgencia.....</i>	35
CONTRAINSURGENCIA	38
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LOS ESTUDIOS SOBRE CONTRAINSURGENCIA.....	43
POSIBLES RESULTADOS EN TÉRMINOS DE INSURGENCIAS	49
CONCLUSIÓN	57
LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE. GUERRA EN LAS CALLES.....	58
MODALIDAD DE LA INSURGENCIA.....	60
<i>Origen</i>	60
<i>Plataforma política e ideología.....</i>	62
<i>Estructura organizacional.....</i>	65
<i>Estrategia político militar.....</i>	67
<i>Etapas de la Liga</i>	70
EL RÉGIMEN Y LA SEGURIDAD INTERNA	79
EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD INTERNA	85
LA RESPUESTA CONTRAINSURGENTE DEL GOBIERNO	91
<i>Doctrina nacional.....</i>	91
<i>Respuesta militar y guerra de baja intensidad.....</i>	93
<i>Contra insurgencia urbana</i>	97
<i>La Brigada Blanca</i>	98
CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO	101
EZLN. LA GUERRA CONTRA EL OLVIDO	104
CONDICIONES ANTECEDENTES	106
<i>La reforma agraria y problemáticas afines.....</i>	107
<i>Las condiciones socioeconómicas y los programas gubernamentales.....</i>	111
<i>El conflicto étnico y el papel de la Iglesia.....</i>	115
<i>Proliferación de organizaciones campesinas, radicalización y campaña de represión</i>	118
LA MODALIDAD DE LA INSURGENCIA ZAPATISTA	121
<i>Origen</i>	121
<i>Plataforma política e ideología.....</i>	126
<i>Estructura organizacional.....</i>	128
<i>Estrategia político-militar y etapas del EZLN a partir del alzamiento.....</i>	131
EL RÉGIMEN MEXICANO EN TRANSICIÓN	138

RELACIONES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS AL FINALIZAR LA GUERRA FRÍA	145
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO	149
<i>Contrainsurgencia en suelo chiapaneco</i>	150
<i>Operativo para aprehender a la comandancia zapatista</i>	153
<i>Feudalización del conflicto en Chiapas</i>	154
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES	157
BIBLIOGRAFÍA	175

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

En el presente trabajo me propongo analizar las estrategias de contrainsurgencia que el gobierno mexicano implementó para atender conflictos relacionados con la existencia o surgimiento de movimientos armados. Esto con la finalidad de esclarecer las causas y circunstancias que dan forma y sentido a las mismas. De esta manera, la pregunta de investigación que guía en principio el proyecto es la siguiente: ¿cómo responde un gobierno ante la amenaza de un movimiento insurgente? Asimismo, una vez que identificamos el tipo de respuesta, podemos avanzar al plano explicativo estableciendo ejes de análisis que, a la vez que den cuenta de los factores que la permiten, esclarecen la lógica detrás de diferentes estrategias.

El estudio parte de la premisa de que las respuestas de los gobiernos ante el surgimiento de movimientos armados varían en la práctica, e indaga sobre los factores que determinan que un gobierno responda de una forma u otra. Una vez establecidas las determinantes que moldean el accionar de un gobierno, se tendrán los elementos necesarios para reflexionar en torno a sus consecuencias. Una de las preguntas centrales que guía este análisis tiene que ver con la manera en la que la respuesta de los gobiernos al desafío de la insurgencia pudo exacerbar o a mitigar el problema.

Como objetivo principal, propongo identificar algunas de las causas que permiten explicar la variación, que se ha observado, en las respuestas del gobierno federal mexicano al enfrentar amenazas a la seguridad interna relacionadas con movimientos insurgentes. Para esto, se analizarán las estrategias que adoptó el gobierno en dos momentos de la historia de México para contrarrestar la amenaza que supuso el

surgimiento de guerrillas rurales y urbanas, tanto en la década de los setenta, cuanto en la década de los noventa. El estudio busca también esbozar, en términos generales, la influencia de ambos momentos del sistema político mexicano, el del autoritarismo férreo y el de apertura democrática e internacionalización, en las respuestas del régimen al desafío armado.

Durante la segunda mitad del siglo XX, diversos grupos armados desafiaron la autoridad del régimen mexicano. De acuerdo con Sergio Aguayo, a principios de los sesenta el sistema político mexicano se fracturó. Mientras una parte de la sociedad se diversificó, urbanizó y aumentó su nivel educativo, el resto de la población no alcanzó a gozar de los beneficios que el “milagro mexicano” trajo consigo. Estos procesos, aunados a la naturaleza autoritaria del régimen, potenciaron la radicalización de sectores de la juventud mexicana que, ante la ausencia de canales adecuados de participación, decidieron adoptar la lucha armada.¹ Para la década de los setenta, esta radicalización dio origen a una tradición guerrillera a lo largo del país que impulsó el surgimiento de grupos armados agitados y organizados en torno a diversas reivindicaciones sociales. Amparados también en ideologías, en ocasiones cercanas al socialismo y al comunismo, estos movimientos buscaron presionar y desestabilizar a autoridades y gobiernos locales con el propósito de lograr mejores condiciones para sus miembros y los sectores de la población que decían representar. Si se toma en cuenta la dimensión geográfica de éstas amenazas, el desafío de la guerrilla de los setenta nos permite observar áreas de acción tanto en el territorio rural, cuanto en zonas urbanas del país.

¹ Sergio Aguayo, “El impacto de la guerrilla en la vida Mexicana. Algunas hipótesis”, en: Verónica Oikión y Marta Eugenia García (ed). *Movimientos armados en México, Siglo XX*, Vol.1, Zamora, Mich. El Colegio de Michoacán, CIESAS, 2008, p. 91.

Aunque en la década de los ochenta prevaleció un periodo de relativa calma, con diversos grupos sobrevivientes operando en la clandestinidad, para mediados de la década de los noventa se registró el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros con nuevas consignas y en un contexto notoriamente diferente al de sus predecesores. La protesta armada y popular, representada entonces por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), desafió de nueva cuenta a las autoridades mexicanas. Sin embargo, la respuesta no fue en modo alguno uniforme. Al reaccionar a estas amenazas el gobierno federal recurrió a operaciones militares y procesos de paramilitarización. Las fórmulas políticas incluyeron la negociación, campañas de desprestigio de los movimientos, disputa y erosión de las bases de apoyo e incluso, la apertura de espacios a la participación política.

Las respuestas fueron diversas y, por lo mismo, ofrecen distintas dimensiones de análisis. Lo que la experiencia deja ver es que dichas respuestas se desplegaron en un espectro que osciló entre la represión y la negociación, pero que incluyó una serie de opciones y matices intermedios. En algunos casos, la estrategia seguida pudo haber ayudado a la contención del conflicto, en otros, la elección contrainsurgente exacerbó el desafío.

Además de reconocer la importancia histórica de este fenómeno, la investigación busca contribuir a los esfuerzos encaminados a sistematizar las características de la experiencia mexicana. Por lo tanto, el estudio identificará los factores que, durante la evolución de los conflictos, influyeron en la estrategia de contrainsurgencia adoptada por las autoridades mexicanas. Con base en ciertos parámetros de éxito y de fracaso, el estudio buscará dar cuenta del impacto de las respuestas de contrainsurgencia en la

exacerbación o contención de la amenaza de los movimientos insurgentes. El argumento que subyace a este trabajo sugiere que la combinación calibrada de represión, concesión y negociación caracterizó la experiencia mexicana.

Como ya se señaló, México experimentó en distintos momentos de su historia el surgimiento y desarrollo de movimientos armados (rurales y urbanos). Entre los casos más notorios encontramos a la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento Acción Revolucionario, la Unión del Pueblo, el Partido de los Pobres y, en épocas recientes, el Ejército Popular Revolucionario, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La variedad de estos movimientos ofrece un terreno fértil para estudiar y comparar las estrategias de contrainsurgencia que se desplegaron para enfrentarlos. La experiencia mexicana permite además analizar el peso del marco político institucional tanto en el momento del surgimiento de la revuelta armada, cuanto al momento de su desmovilización. Además, la variedad que encierran estas experiencias, permite estimar, también, la posible influencia de factores externos en el desarrollo de los conflictos.

Sin embargo, es importante señalar que el hecho de que varias organizaciones hayan pertenecido a la misma “ola guerrillera” no implica que la respuesta del gobierno para atenderlas haya sido misma. Por esta razón, en lugar de proponer un estudio de amplio espectro que abarque, en términos generales, al cúmulo de grupos armados que han proliferado en el país a partir de los setenta, propongo un estudio comparativo acotado. Dicho estudio buscará contrastar la respuesta gubernamental a dos insurgencias y en dos momentos de la historia. El propósito es profundizar en el análisis y obtener conclusiones a partir de la comparación de dichas experiencias.

Establezco la comparación de dos casos. Para la década de los setenta elegí como caso de estudio la organización conocida como Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Para la década de los noventa decidí concentrarme en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Si bien el análisis se centrará en estos dos de casos, en ocasiones recurriré, aunque de manera tangencial, a otras experiencias guerrilleras con el afán de brindar mayor solidez a los argumentos o ilustrar determinados puntos.

Los criterios que me llevaron a elegir estos casos tienen que ver con el tamaño de las organizaciones y con su relevancia aparente. Dicha relevancia puede establecerse a partir de su influencia y área de operación. La Liga Comunista, con un aproximado de 392 militantes formales, fue la más grande de su tiempo. Además, su área de operación abarcó diversas entidades federativas como el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco (estado en el que surge formalmente), Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Diversos especialistas coinciden en que la Liga fue uno de los grupos que mayor predisposición a la violencia mostró en América Latina.² Por su parte, el Ejército Zapatista contaba, al momento de su alzamiento, con cerca de 1500 militantes bien armados y con el apoyo de otros miles mal armados y mal entrenados. Si bien su área de operación militar se limitó al estado de Chiapas, su influencia tuvo un alcance nacional e incluso, como veremos más adelante, traspasó las barreras nacionales para encontrar eco en otras experiencias internacionales. La relevancia del EZLN fue de gran importancia en asuntos políticos relacionados con el

² Sergio Aguayo recuperó cifras del Coronel Acosta Chaparro que indican que, en efecto, la Liga era la organización armada más grande en el país con 392 militantes. A ella le seguían el Partido de los Pobres con 347, el Frente Estudiantil Revolucionario con 154, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo con 146, las Fuerzas de Liberación Nacional con 129, el Comando Armado Lacandones con 94, el Movimiento de Acción Revolucionaria con 91, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria con 70 y la Unión Campesina Independiente con 59. Véase Sergio Aguayo Quezada, *La Charola*, México DF, Grijalbo, 2001.

trabajo de redes en la sociedad civil y la movilización de reivindicaciones de los pueblos indígenas en el país.³

La presentación y definición de los casos que se compararán, nos permitirá identificar los ejes de análisis que pueden ser de utilidad para esclarecer las respuestas contrainsurgentes del gobierno. De esta forma, la estrategia se estudiará en función de tres variables explicativas: 1) la naturaleza de la amenaza (modalidad del movimiento insurgente), 2) elementos relevantes del contexto nacional y 3) el contexto internacional. Por lo tanto, la hipótesis central de esta investigación apunta al carácter multifactorial de la política de contrainsurgencia, o en otras palabras, la estrategia que adoptó el gobierno mexicano frente a este tipo de amenazas estuvo determinada, en buena medida, por la interacción de estas variables. Dicha interacción, en distintos periodos de la historia, dio lugar a configuraciones específicas que representan el objeto de estudio de este trabajo.

¿Cómo definimos las variables? Primero, la noción de “movimiento insurgente” nos resulta útil como punto de partida y es necesaria para identificar la modalidad de la organización armada en cuestión. Dicha noción nos permitirá aislar las características específicas de las organizaciones que son objeto de estudio de esta investigación. En ella encontramos los siguientes componentes: a) el tipo de organización y estructura, en la cual se podrá identificar si su ámbito de acción tiene que ver con zonas urbanas o rurales, su tipo de organización y liderazgo, la composición de sus combatientes, plataforma política (causa) y sus bases de apoyo; b) dinámicas dentro de la organización, es decir, las relaciones entre líderes y combatientes, así como la relación del grupo con el medio ambiente en el que se desenvuelve y con las redes establecidas con otros grupos; c) las

³ Jorge Luis Sierra Guzmán, *El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México*, México DF, Plaza y Valdés, 2003.

estrategias políticas o militares que impulsaron su proyecto, mismas que pueden variar entre la agitación popular, la distribución de propaganda, la conspiración y opciones de corte militar como la guerrilla, estrategia urbana o guerra popular prolongada; d) el tipo de movilización de sus bases de apoyo popular, ya sea por mecanismos de persuasión, coerción, reacción al abuso, apoyo internacional o motivaciones apolíticas; e) aspectos relacionados con la movilización de recursos, despliegue de operaciones, obtención de armas y formas de financiamiento.

Una segunda variable se refiere a las circunstancias que han marcado al contexto nacional. Esta variable me permitirá identificar las particularidades del régimen que pudieron condicionar la respuesta gubernamental y observar también la variación entre respuestas. Tomo a consideración los siguientes factores: a) presencia de actores políticos relevantes y su reacción frente a la amenaza insurgente. Los actores que considero relevantes incluyen al Presidente de la república (acciones y posicionamientos en torno a la solución de dichos conflictos), las Fuerzas Armadas, organizaciones policiacas y servicios de inteligencia, dependencias de gobierno no relacionadas directamente con el tema de la seguridad, paramilitares (naturaleza y accionar de los mismos) y organizaciones no gubernamentales; b) las características de las respuestas del régimen a partir de su vocación autoritaria o incluyente; c) las condiciones o eventos de diversa índole que pudieron influir en la variación del accionar gubernamental al momento de enfrentar a grupos armados.

La tercera variable corresponde al contexto internacional. Esta variable me permitirá documentar el peso del ámbito externo en las respuestas contrainsurgentes del gobierno mexicano. La influencia externa incluye una gama de opciones que va desde la

asistencia militar, el apoyo financiero, transferencia de armamento, inteligencia y doctrina militar, hasta el despliegue de presiones políticas y monitoreo de organismos internacionales. El argumento que sostiene la inclusión de esta variable tiene dos visos. Por un lado, los movimientos armados suelen buscar, de manera deliberada, atraer la mirada de la comunidad internacional con la finalidad de obtener apoyo y reconocimiento, es decir, dotar de legitimidad a su causa y organización. Por otro lado, la evidencia muestra que la atención que la comunidad internacional presta a determinado conflicto, puede frenar o potenciar las acciones que los gobiernos emprenden para enfrentar amenazas de este tipo.

La cuarta y última es la variable dependiente. Esta se definirá en función del tipo de estrategia empleada por el gobierno mexicano. Dicha estrategia puede implicar acciones de enfrentamiento directo (represión), paramilitarización, guerra de baja intensidad, reducción de las bases de apoyo, campañas de desprestigio y negociación. A partir de los estudios de Frank Kitson sobre la guerra de baja intensidad y las operaciones de pacificación,⁴ podemos anticipar los siguientes tipos de respuesta: a) acciones que impliquen el enfrentamiento directo con las fuerzas armadas del estado; b) aquellas que busquen apuntalar y desarrollar comandos militares nativos en la zona del conflicto para operaciones paramilitares y de tropas irregulares; c) las que intenten establecer una relación de cooperación entre las unidades militares y la población con la finalidad de dismantelar cuadros inferiores de apoyo a la insurgencia; d) acciones que permitan prevenir que la población apoye las causas insurgentes, entre las que podemos identificar la prestación de servicios básicos, la implementación de programas especiales o la

⁴ Frank Kitson, *Low intensity operations: subversion, insurgency and peace keeping*, London, Faber, 1971, p. 53.

concesión de prebendas para los simpatizantes potenciales de la insurgencia; e) operaciones psicológicas y de inteligencia para obtener y sistematizar información relevante.

La investigación se apoya en una metodología que combina los enfoques de corte analítico y de desarrollo. Con base en el enfoque analítico se recolectará y sistematizará la información proveniente de reportes especializados y publicaciones académicas. El enfoque de desarrollo permitirá identificar y desarrollar explicaciones sobre los procesos de cambio y continuidad que inciden en el fenómeno de la contrainsurgencia. Así, la investigación se apoyó en fuentes primarias y secundarias de información. Libros, artículos de revistas especializadas, archivos e incluso periódicos fueron de utilidad para fortalecer el caso. Las técnicas para recuperar información incluyeron el análisis documental, el estudio comparativo de casos (México, su tradición insurgente y la respuesta del gobierno en dos momentos históricos) y entrevistas con informantes calificados ya sea por participación directa en el fenómeno o por estudio y análisis del mismo.

La estructura del trabajo que propongo incluye la presentación de cuatro capítulos en los que desarrollo la información recabada durante la investigación. En el capítulo primero, expongo las aproximaciones teóricas y conceptuales que se han realizado sobre el tema de estudio, las insurgencias y la contrainsurgencia. El capítulo inicia con un repaso sobre las concepciones clásicas de guerra entre Estados y los motivos por los que estas han virado hacia el estudio de los conflictos de orden interno. En este punto, las nociones de “nuevas guerras” y “guerras civiles” son de utilidad para poner de manifiesto los debates que han surgido con respecto a los conflictos militares al interior de las

naciones. Además de brindar definiciones y aproximaciones conceptuales, la utilidad analítica de este par de nociones radica en identificar las causas y naturaleza de este tipo de conflictos, así como las diversas dimensiones desde las que pueden ser estudiados. La lógica detrás de este planteamiento, que va de lo general a lo particular, es llegar al análisis de las insurgencias, no como un fenómeno aislado, sino como elemento fundamental de los conflictos al interior de los Estados y con dinámicas propias. Una vez que definimos las insurgencias, el siguiente paso es tratar el tema de interés de esta investigación, la contrainsurgencia. Desarrollo la noción de contrainsurgencia en toda su extensión, ofrezco las definiciones que los especialistas han propuesto y establezco las doctrinas más importantes que han guiado su aplicación en diversas experiencias. Concluyo este apartado señalando el carácter multicausal que tiene la respuesta contrainsurgente y propongo algunos resultados en los que esta puede derivar a partir de la evidencia obtenida. Después de leer este apartado, será claro para el lector que la aplicación de determinada estrategia de contrainsurgencia puede tener finales inesperados. Por un lado, la amenaza a la que se enfrenta podría mitigarse o eliminarse, por otro lado, el conflicto podría exacerbarse o llevarse a su conclusión al largo plazo.

En el capítulo segundo inicio con la presentación de la experiencia mexicana. En este episodio del trabajo me concentro en desarrollar el origen y naturaleza del primer caso propuesto: la Liga Comunista 23 de Septiembre. En un primer apartado, observaremos la modalidad de grupo armado en que se constituyó esta organización. Así, identificaremos su composición, las características principales de su estructura organizativa, el carácter de sus combatientes, su plataforma política, sus estrategias

político-militares y los mecanismos mediante los cuales reclutan militantes y obtienen financiamiento para impulsar sus actividades. Posteriormente, y de acuerdo a la segunda variable propuesta, propongo una serie de cualidades del régimen mexicano que considero fundamentales para entender la respuesta que tuvo el gobierno para enfrentar a esta organización. En este sentido, la evidencia que ofrezco apunta a que el carácter autoritario del gobierno mexicano facilitó la opción represiva para este tipo de movimientos. Asimismo, identifiqué factores del ámbito internacional que nos ayudarán a entender la incidencia de lo externo en la doctrina de seguridad mexicana y en el combate a grupos subversivos. Este episodio concluye con la presentación de la estrategia política y militar-policíaca que las autoridades pusieron en marcha para eliminar la amenaza que representó la Liga Comunista para el orden y la estabilidad del régimen.

En el capítulo tercero establezco una revisión similar a la propuesta en el capítulo anterior, pero en esta ocasión, el objeto de análisis será el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este capítulo inicia con una discusión sobre las causas a nivel local que potenciaron el surgimiento del EZLN. En este apartado podremos identificar cuestiones de índole política, social, económica, religiosa y étnica que se conjugaron para potenciar la proliferación de organizaciones campesinas y radicalizar el tono de la protesta en el estado de Chiapas. De igual forma, el capítulo continúa con la presentación de la modalidad de grupo armado que representa el EZLN. Características específicas como su composición rural, el sistema de soporte que las comunidades indígenas representan para la guerrilla y la manera en la que esta obtiene insumos materiales (armas, alimento y apoyo económico) destacan en este apartado. Posteriormente, identificamos algunos eventos del contexto nacional e internacional que,

de acuerdo a mi propuesta, condicionaron la respuesta del gobierno para enfrentar al EZLN. La evidencia que presento sugiere que un contexto nacional que se encuentra en franca transición por las vías de la democracias electoral y una esfera internacional atenta a las acciones que se desarrollaron en México a partir del levantamiento zapatista, condicionaron la respuesta gubernamental. En este caso, este condicionamiento se entiende por el hecho de que la opción represiva podría resultar altamente costosa para el gobierno, situación que abre la puerta a los procesos de negociación con la insurgencia. Por último, presento la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano. En ella observamos con claridad sus componentes políticos y militares y nos da la base para analizar la forma en la que se llevó la solución del conflicto al largo plazo.

En el capítulo cuarto, retomo las experiencias que ambos casos nos ofrecen para ponerlas en contraste y establecer conclusiones sobre la forma en la que las autoridades mexicanas han enfrentado la amenaza de movimientos armados en la última época. La utilidad de proponer ejes de análisis nos sirve para poder identificar el impacto que cada uno de ellos tiene sobre la estrategia contrainsurgente del gobierno.

LA RESPUESTA FRENTE A LA AMENAZA INSURGENTE

El surgimiento de insurgencias es un fenómeno recurrente en la historia de diversas naciones, tanto desarrolladas cuanto en vías de desarrollo. Las insurgencias, sea que se encuentren impulsadas por la reivindicación de causas relacionadas con la desigualdad, las identidades raciales, étnicas, religiosas, ideológicas o por una inconformidad con el orden establecido, muestran la cara violenta de la lucha por el poder político. Es por esto que los gobiernos nacionales se han visto en la necesidad de formular estrategias de seguridad que permitan pacificar las zonas de conflicto, asegurar a la población civil, mantener en marcha la dinámica de la vida pública y, en última instancia, recuperar su legitimidad ante los grupos inconformes. En la medida en que estas amenazas se convierten en un factor que atenta contra el orden y la autoridad del Estado, los gobiernos se ven obligados a considerar acciones para mitigarlas. Estas acciones implican la movilización de recursos humanos, materiales, económicos, y, en algunas ocasiones, incluso el apoyo por parte de gobiernos extranjeros.

El desarrollo de estrategias de contrainsurgencia, como reacción a dichos fenómenos, no es sólo un tema de interés y debate entre autoridades gubernamentales, sino entre teóricos y analistas de la seguridad interna, seguridad internacional y asuntos estratégicos de defensa. Como resultado de la experiencia colonial, países como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos realizaron esfuerzos importantes para contribuir al desarrollo de una doctrina o cuerpo conceptual sobre la contrainsurgencia. En efecto, el surgimiento de “grupos rebeldes” en las colonias que dominaban en África (Argelia),

Asia (Malasia) e incluso Europa si se toma en cuenta el conflicto contra el ERI (Ejército Republicano Irlandés) en Irlanda del Norte, obligaron a estos países a estudiar y reflexionar sobre el tema.

Los orígenes de la doctrina sobre contrainsurgencia pueden rastrearse a finales del s. XIX cuando se publicó por primera vez la obra *Small wars: their principles and practice* de Edward Callwell. Dicha obra sentó las bases de la doctrina moderna en el Reino Unido al centrar su análisis en el concepto de “guerras pequeñas” para entender este tipo de conflictos. Según Callwell, las guerras pequeñas se definen como expediciones contra salvajes y grupos semi-civilizados, emprendidas por soldados disciplinados. Las guerras pequeñas comprenden campañas para suprimir rebeliones y guerrillas en todo el mundo, y sus operaciones variarán de acuerdo a sus objetivos y las condiciones bajo las cuales se desplieguen.⁵ Aún y cuando el texto de Callwell fue escrito bajo el contexto del colonialismo inglés las categorías de análisis que propone para estudiar las campañas del ejército británico pueden contribuir a la discusión actual sobre la contrainsurgencia, a saber: “campañas de conquista y anexión; campañas de pacificación para suprimir insurrecciones o restaurar el orden; y campañas de castigo como represalia a ofensas particulares”.⁶

Lo anterior sugiere que el estudio de las insurgencias nos lleva a identificar diferentes formas de conflicto dentro de los estados. Dado que estos conflictos varían en términos de su naturaleza y procedimientos, requieren para su análisis de enfoques teóricos y conceptuales *ad hoc* que permitan identificar los elementos fundamentales que

⁵ Charles Edward Callwell, *Small Wars: their principles and practice*, New York, Cosimo Classics, 2010, p. 21.

⁶ David Betz, “Counterinsurgency: victorian style”, en *Survival: Global Politics and Strategy*, 54:4, 2012, p. 163.

les dan forma. Además, David Betz destaca la necesidad de abordar el estudio de este fenómeno en el contexto de procesos políticos más amplios como transiciones políticas, movimientos sociales, crisis económicas y conflictos internacionales. Precisamente, este estudio tiene el afán de insertar el análisis de la contrainsurgencia en procesos políticos más generales. Así, me propongo explorar los dos casos propuestos en líneas anteriores en el marco más amplio de la discusión sobre la guerra, las “nuevas guerras”, las guerras civiles y las insurgencias.

CAMBIO DE PARADIGMA. DEL CONCEPTO DE GUERRA A LAS NUEVAS NOCIONES PARA ENTENDER EL CONFLICTO INTERNO

La noción de guerra es un asunto recurrente en diferentes estudios relacionados con la violencia, la construcción del Estado y las relaciones internacionales. Históricamente, la concepción clásica de Clausewitz, la cual establece que la guerra “es la continuación de la política por otros medios”, es la que ha dado forma a la mayoría de los estudios sobre el tema. Bajo esta idea, el término se emplea para definir conflictos armados entre Estados soberanos y, por lo tanto, se aplica a formas altamente organizadas y centralizadas de violencia pública por parte de actores estatales. En estos conflictos, tanto la movilización cuanto la legitimación de la violencia se basan en la formulación de objetivos políticos como el nacionalismo, la religión y la identidad étnica.⁷ Otra definición la proporciona el Uppsala Conflict Data Project (UCDP), el cual entiende la guerra como una incompatibilidad que concierne al gobierno en determinado territorio, donde se presenta el uso de la fuerza armada entre dos partes, de las cuales, al menos uno, es el gobierno de

⁷ Sabine Kurtenbach, “State-Building, War and Violence: Evidence from Latin America”, en *German Institute of Global and Area Studies Working Papers*, No. 181, Noviembre 2001, pp. 4-5.

un Estado. En términos numéricos, esta definición incluye un estimado de al menos 1.000 muertes al año, relacionadas al conflicto, para considerarse una guerra.⁸

Aunque el número de guerras en las últimas dos décadas disminuyó, la violencia armada sigue siendo un problema importante en el mundo. En algunas regiones, el Estado parece haber perdido su predominio como regulador de la violencia armada organizada y ha cedido el paso a grupos armados con intereses y dinámicas propias. Como sugieren Ralph H. Espach y Patricio Asfura-Heim,⁹ algunas regiones a lo largo del mundo han presenciado el surgimiento de grupos de “vigilantes” o de “autodefensa” que han asumido la tarea de combatir el crimen y restaurar el orden en sus comunidades. El nacimiento de estos grupos responde a una dinámica en la que el Estado ha perdido la capacidad de asegurar la protección de los ciudadanos en territorios específicos. Así, estas fuerzas irregulares de combate al crimen, a la par de grupos armados y crimen organizado, han mermado el monopolio de la fuerza pública del Estado e, incluso, han adquirido amplios márgenes de legitimidad en los poblados que defienden. Incluso, los autores sugieren que la creación de estos grupos puede representar un arma de doble filo. Por un lado, el Estado se puede beneficiar de su despliegue y accionar. Este es el caso de la fuerza de voluntarios que el gobierno del estado de Punjab (India) logró amalgamar para combatir la insurgencia Sikh entre las décadas de 1980 y 1990. Esta iniciativa movilizó alrededor de 1,100 comités en distintas villas incluyendo a casi 40,000 voluntarios. Por otro lado, estas fuerzas pueden representar un problema mayúsculo para el Estado. Tal es el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, en principio, sirvieron para defender a los habitantes de las comunidades afectadas por las

⁸ Ibid, p. 7.

⁹ Véase Patricio Asfura-Heim y Ralph Espach, “The rise of Mexico’s self-defense forces”, en *Foreign Affairs*, Jul-Aug 2013, vol. 92, Fascículo 4.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, con el tiempo se transformaron en una red paramilitar que se involucró en masacres, tráfico de drogas y corrupción en los más altos niveles.¹⁰

Esta situación nos da la pauta para pensar en la necesidad de conceptos que, de forma más particular, contribuyan al análisis de los conflictos en el interior de las naciones. En este sentido, observamos dos grandes vertientes de discusión en torno a este fenómeno: la que concierne a las supuestas “nuevas guerras” y la que atiende a las “guerras civiles”.

Las nuevas guerras

En primera instancia, el concepto de “nuevas guerras” se inserta en un debate teórico en contra de las concepciones clásicas que, en términos de Mary Kaldor, presentan una visión estereotípica de la guerra y reducen la noción de la misma a “conflictos entre dos entidades fundamentalmente simétricas, generalmente Estados o proto Estados con intereses legítimos”;¹¹ la autora se refiere a estas posturas clásicas como “viejas guerras”.

Kaldor señala que la naturaleza de los conflictos en nuestros tiempos se vio afectada por tres grandes desarrollos : 1) el incremento en los niveles de destrucción de todas las formas de tecnología militar; mismo que hoy día vuelve improbable los conflictos simétricos en términos de Clausewitz, 2) la expansión de las comunicaciones globales y su efecto sobre la mayor visibilidad de las guerras así como el sentido de solidaridad entre personas ajenas a las mismas; y 3) la transformación del Estado como

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mary Kaldor, “Elaborating the ‘New War’ Thesis,” en Isabelle Duyvesteyn and Jan Angstrom (eds.) *Rethinking the Nature of War*, New York, 2005, p. 210.

consecuencia de la globalización, es decir, si el Estado cambia, cambian con él las formas de relacionarse con la violencia organizada.¹²

Estos razonamientos han llevado a diversos autores a desarrollar argumentos para superar, lo que consideran, una limitada concepción de las “viejas guerras”. En este sentido, Errol Henderson, aunque crítico de la postura de las “nuevas guerras”,¹³ ofrece una perspectiva útil para hacer una revisión de los planteamientos más interesantes en torno a este tema. En primera instancia, Henderson identifica los elementos empíricos comunes a las diversas expresiones de la noción de “nuevas guerras”, que a su juicio, son: 1) el lugar de los conflictos en el mundo ha cambiado de Europa a las regiones postcoloniales; 2) el conflicto ha cambiado de confrontaciones entre Estados a disputas dentro de los Estados; 3) las nuevas guerras son diferentes en propósito, práctica y tipo de participantes, en comparación con las guerras antiguas –como son las inter, extra e intra estatales; 4) las relaciones que se dan en el interior de estas guerras son diferentes a aquellas que predominaban en las antiguas y, en consecuencia, estas nuevas guerras requieren de estrategias distintas para reducir la probabilidad de que ocurran.¹⁴

En el marco de estas premisas, encontramos los conceptos de “guerras post modernas”, “guerras de tercer tipo”, “guerras del pueblo” y “nuevas guerras”. Según Chris Gray, el conflicto en Vietnam es la primera manifestación de las “guerras post modernas”. Se les llama postmodernas por dos razones: 1) la lógica y la cultura de la

¹² Ibid, p. 211.

¹³ El autor critica el hecho de que los teóricos de las “nuevas guerras” proponen que estas representan cambios fundamentales en los procesos de conflicto. La crítica, en términos generales, plantea el hecho de que este concepto (nuevas guerras), no es más que una amalgama de otros que ya existen y que las identifican mejor, las guerras interestatales, extraestatales e intraestatales, que están basadas en el estatus político de los protagonistas. El argumento se dirige a que esas guerras sean adecuadamente incluidas bajo categorías ya existentes, pues en realidad no son nuevas guerras.

¹⁴ Errol A. Henderson y J. David Singer, "New Wars' and Rumors of 'New Wars'", en *International Interactions*, Vol. 28, 2 (2002), p.166.

guerra moderna cambió significativamente durante la Segunda Guerra Mundial (SGM) y 2) ya que la información en la postmodernidad es presumiblemente importante en las artes, literatura, economía y filosofía, y también es, de manera marcada, un factor de vital importancia en el ámbito militar, el apelativo parece apropiado.¹⁵

Por otra parte, Edward Rice establece que las “guerras de tercer tipo” son guerras intraestatales que se dan en las regiones postcoloniales, en el mundo posterior a la SGM. Se encuentran limitadas predominantemente a los espacios rurales de los Estados del mundo en desarrollo como Afganistán, China, Vietnam, Malasia, Filipinas, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Una de las características más importantes de este tipo de conflictos es que las iniciativas radicales impulsadas por la insurgencia son propiciadas por un ambiente rural que proporciona el apoyo para la guerrilla insurgente.¹⁶ En el mismo sentido de las propuestas de Rice y Gray, Kalevi Holsti desarrolla el concepto de “guerras del pueblo”. Este tipo de guerras se distinguen, tanto por la manera específica en que se desenvuelven y la naturaleza de sus participantes, cuanto por los propósitos que persiguen. En general, estas guerras se ejemplifican como “guerras de guerrillas peleadas por grupos comunitarios militarizados en contra de fuerzas gubernamentales u otros grupos militarizados dentro del Estado”.¹⁷ Además, estas guerras presentan la particularidad de que en ellas suelen borrarse las diferencias entre los individuos que combaten y los que no lo hacen; por lo tanto, la sociedad se vuelve blanco de ataque.

¹⁵ Chris Gray, *Post-Modern War: The New Politics of Conflicts*, London and New York, Routledge, 1997, citado en Errol Henderson, *ibid*, p. 168.

¹⁶ Edward Rice, *Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries*, Berkeley, CA, University of California Press, 1988, citado en Errol Henderson, *ibid*, p. 168.

¹⁷ Kalevi Holsti, *The State, War, and the State of War*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, citado en Errol Henderson, *ibid*, p. 169.

El último concepto dentro de esta corriente de análisis es, precisamente, el de las “nuevas guerras” de Mary Kaldor; este se puede contrastar con el concepto de “viejas guerras” con base en tres variables: sus objetivos, los métodos de enfrentamiento que emplean y las formas en las que financian sus operaciones. El análisis teórico de este tipo de conflictos, a partir de estos tres componentes, se desarrolla así: 1) los objetivos “pueden definirse en términos de políticas de identidad, es decir, el reclamo para controlar al Estado o partes del mismo en el nombre de un grupo exclusivo identificado en términos de etnias, religión o tribus”;¹⁸ 2) los métodos implican violencia dirigida contra civiles, no como efecto colateral, sino como estrategia deliberada, las tácticas de guerrilla y las estrategias de contrainsurgencia son primordiales; además, los insurgentes se valen de instrumentos como los genocidios, masacres, limpieza étnica y violaciones para “sembrar el terror en la población”;¹⁹ 3) el financiamiento de los grupos beligerantes se da a través de actividades criminales, apoyo por parte de la diáspora e impuestos a la ayuda humanitaria.²⁰ En general, estas guerras suelen gestarse en el marco de Estados en proceso de desintegración marcados por las crisis económicas, la caída de los ingresos, el crecimiento de la corrupción y la reducción de la integración nacional. En palabras de Kaldor, “la ideología separatista, los ataques contra civiles y el creciente uso de fuentes ilegales de financiamiento aceleran el proceso de debilitamiento del Estado y, al mismo tiempo, fortalecen políticamente las posiciones de facciones políticas.”²¹

No obstante el cuantioso trabajo que se ha realizado en torno a la tesis de las “nuevas guerras”, las críticas han sido particularmente severas. De acuerdo con Kalyvas,

¹⁸ Mary Kaldor, op. cit., p. 212.

¹⁹ Ibid, p. 214 s.

²⁰ Ibid, p. 216.

²¹ Ibid, p. 216.

la tendencia a establecer diferencias fundamentales entre “viejas” y “nuevas” guerras ha sido resultado del uso acrítico de categorías y denominaciones fundamentadas en una caracterización errónea. En su opinión, este sesgo analítico se debe a que la información acerca de las guerras recientes es incompleta y sesgada; además, la investigación histórica de las guerras anteriores tiende a ser descuidada.²²

Las nociones sobre las “nuevas guerras” suponen que estas son típicamente criminales, despolitizadas, privadas y depredadoras. Por el contrario, las “guerras viejas” son consideradas como ideológicas, políticas, colectivas y nobles. En este aspecto, Kalyvas profundiza en la crítica al señalar que tanto “nuevas guerras” cuanto “viejas guerras”, en efecto, son diferentes, pero que resulta impreciso sólo concentrarse en sus diferencias y no en los elementos comunes que presentan.

Primero, el autor señala que el uso recurrente de categorías conceptuales coherentes a lo largo del espectro ideológico izquierda-derecha, distorsiona la visión de los observadores y los lleva a subestimar la complejidad y desorganización de las guerras civiles. Esta situación parece conducir a una significativa exageración del contenido ideológico de las “viejas guerras”.²³ Diversos estudios etnográficos han concluido que, en el calor de los enfrentamientos, las personas suelen estar motivadas por las presiones de grupo y los procesos mismos de participación y compromiso, tales como a) cuidar a sus camaradas, b) respetar a sus líderes, c) mantener su propia reputación con ambos y d) la presión para contribuir al éxito del grupo.²⁴ En términos de Mats Berdal, el hecho de no dar cuenta de la totalidad de motivos que inspiran comportamientos violentos, la

²² Stathis Kalyvas, “Nuevas y Viejas guerras civiles: ¿una distinción válida?”, en: Freddy Cante y Luisa Ortiz (comp) *Acción política no violenta, una opción para Colombia*, Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario, 2005, pp. 51-52.

²³ *Ibid*, p. 64.

²⁴ *Ibid*, p. 63.

coexistencia de esos motivos en diferentes niveles durante el conflicto y la manera en que interactúan a lo largo del tiempo para producir una dinámica propia de cada conflicto, obstaculiza el análisis adecuado de las mismas.²⁵

Segundo, los teóricos de las “nuevas guerras” asumen que estas son luchas entre actores políticos carentes de apoyo popular, contrario a la creencia de que en las “viejas guerras”, actores armados presiden un apoyo popular considerable. El asunto que estos teóricos no toman en cuenta es que en las viejas guerras el apoyo popular fue forjado, ganado o perdido durante el desarrollo de los conflictos, frecuentemente por medio de coerción y violencia, y en la misma dirección de las líneas de pertenencia a grupos familiares y locales. Esta situación sugiere que el respaldo no era puramente consensual, inmutable e ideológico.²⁶ Tercero, el autor señala el error que supone concluir que la violencia en las “viejas guerras” es limitada, disciplinada o entendible, o suponer que la violencia en las “nuevas guerras” carece de sentido y es siempre gratuita e incontrolada.²⁷

Por otra parte, Mats Berdal contribuye a la reflexión sobre la noción de las “nuevas guerras” con una crítica al uso del concepto de globalización. Para el autor, la globalización no se puede utilizar como una categoría analítica. Berdal reconoce que el término no es más que una metáfora para ilustrar una serie de procesos que generan mayor interdependencia entre los Estados y entre las sociedades. Aunque estos procesos son susceptibles de medición y evaluación, los datos, nociones o inferencias que se puedan obtener por medio de ellos, son sujetos a debate y posturas limitadas.²⁸ Además de esta crítica, Berdal es claro al señalar que la noción de las “nuevas guerras” tiende a

²⁵ Mats Berdal, “How New Are New Wars? Global Economic Change and the Study of Civil War”, en *Global Governance*, Vol. 9, No. 4, 2003, p. 490.

²⁶ Stathis Kalyvas, op. cit., p. 70.

²⁷ Ibid, p. 75.

²⁸ Mats Berdal, op. cit., p. 480.

simplificar y, en algunos casos, exagerar la importancia del proceso económico mundial, conocido como globalización, en el financiamiento y sostenimiento de las guerras civiles. También, representa un problema claro la ausencia de una perspectiva histórica que brinde la posibilidad de comparar con otras experiencias bélicas y permita analizar las implicaciones de cierto conflicto bajo circunstancias específicas.²⁹

Las guerras civiles

La segunda noción de interés para este estudio es la de las “guerras civiles”. De una manera similar a como ocurre con el concepto de “nuevas guerras”, las guerras civiles suelen considerarse como el producto de la disminución de las guerras entre Estados, la reducción de las guerras civiles consideradas como “ideológicas” (o de clase) y el aumento de conflictos considerados como étnicos.³⁰

De acuerdo con Kalyvas, la guerra civil se entiende como un conflicto violento cuyo objetivo último es, o bien el establecimiento de un monopolio de la violencia legítima sobre el territorio nacional previo a la guerra, o legitimar un proceso de segmentación.³¹ Una definición con mayor profundidad analítica la proporcionan Small y Finger. Para los autores, las guerras civiles son cualquier conflicto armado que involucra: a) la acción militar en el interior de una metrópoli, b) la participación activa del gobierno nacional, y c) la resistencia efectiva de ambos lados (violencia por parte del Estado sostenida y correspondida).³² Resalto el carácter interno del conflicto ya que nos

²⁹ Ibid, p. 490.

³⁰ Stathis Kalyvas, “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, en *Análisis Político*, Universidad Nacional de Colombia, 2001, No. 42, p. 3.

³¹ Ibid, p. 9.

³² Nicholas Sambanis, “What is war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition”, en *The Journal of Conflict Resolution*, vol. 48, no. 6, 2004, p. 816.

permitirá avanzar en el entendimiento del surgimiento de insurgencias, así como de las presiones que impulsan a enfrentarlas.

Un aspecto relevante en el estudio de las guerras civiles es el de la soberanía. Dentro de este tipo de conflictos, la soberanía se altera de forma sustancial ya que lo que se disputa es el monopolio de la violencia legítima por la vía del desafío armado interno. Por ende, la soberanía no sólo se encontrará en disputa, sino que será susceptible a dividirse. Por lo general, hay dos actores que compiten, insurgentes y gobernantes que usan tácticas diferentes según sus recursos. Dentro de esta disputa queda inmersa la sociedad civil, misma que con frecuencia representa un objetivo primario y deliberado para los combatientes. Así, la guerra civil adquiere un carácter “triangular” que puede involucrar no sólo a dos (o más) actores, sino también a los civiles. Regularmente, la guerra civil implica un reducido número de combates directos entre combatientes y muchas acciones en las que los civiles juegan un papel fundamental.³³

Kalyvas recupera de la crítica a las “nuevas guerras” un argumento fundamental relacionado con el apoyo popular en estos conflictos. De una manera típica se asume que el apoyo popular es exógeno a la guerra y, que a su vez, estará predeterminado por diferencias étnicas o de clase. Sin embargo, el apoyo popular también es endógeno a la guerra. De hecho, las preferencias e identidades tenderán a redefinirse en el curso de la misma en respuesta a la dinámica de la guerra y de la violencia.³⁴

En suma, estos teóricos coinciden en que la naturaleza y las formas del conflicto bélico cambiaron a partir de la Segunda Guerra Mundial; destacan el carácter asimétrico de los actores que intervienen en la guerra y priorizan el análisis de los procesos en el

³³ Stathis Kalyvas, “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, p. 10.

³⁴ Ibid, p. 10.

interior de los Estados, no entre Estados. Los procesos en el interior implican el uso de distintas estrategias de insurgencia y contrainsurgencia que envuelven a la población civil en el conflicto y que requieren de maneras alternativas de financiamiento. A continuación, presento una perspectiva teórica que intenta dar cuenta de las distintas nociones que se tienen sobre la insurgencia, así como de la respuesta que el Estado despliega para mitigarla, es decir, la contrainsurgencia.

INSURGENCIA

Una vez que se aprecia el cambio de paradigma entre la postura dominante sobre la guerra y las nuevas concepciones sobre la violencia organizada, podemos comenzar a dilucidar los elementos que intervienen en los procesos de conflicto en el interior de los Estados ocasionados por el surgimiento de grupos armados. El primer tema a tratar es el asunto de la insurgencia, mismo que resulta útil para identificar la modalidad de la amenaza que se enfrenta y su naturaleza.

Uno de los principales problemas con que topa el estudio de los conflictos relacionados con insurgencias es la claridad conceptual. El uso adecuado de terminología se vuelve un asunto crucial debido a la proliferación de conceptos asociados a esta forma de conflicto. Desobediencia civil, insurgencia, guerra de guerrillas, subversión, terrorismo, guerra revolucionaria e insurrección, son ejemplos de términos relacionados con nuestro objeto de estudio. Ya que no es el objetivo de este trabajo entrar en una discusión sobre las definiciones de estos o de sus características propias y diferencias, procedo a presentar los conceptos de subversión e insurgencia, que de acuerdo con Frank Kitson, son los más adecuados para definir lo que se analiza.

Por un lado, subversión se refiere a las medidas encaminadas al uso de la fuerza armada por parte de un sector de la población en determinado país para derrocar a los gobernantes en ese momento o para obligarlos a hacer cosas que no tienen intención de hacer. La subversión puede entonces implicar el uso de presiones políticas y económicas, huelgas, marchas de protesta, propaganda e, incluso, el uso de violencia a baja escala con el propósito de coaccionar a los miembros recalcitrantes de la población para que brinden su apoyo; por otro, el concepto de insurgencia refiere al uso de la fuerza armada por un sector de la población en contra del gobierno por los motivos mencionados anteriormente.³⁵

El punto de partida dentro de las concepciones clásicas sobre insurgencia lo establece Mao Tse Tung. La insurgencia se concibe aquí en función de la estrategia que buscará derrocar al gobierno establecido mediante la integración de un ejército revolucionario regular, organizado en guerrillas, a lo largo de una campaña prolongada en el tiempo. Esta última característica es la que da origen a la noción de “Guerra prolongada”, durante la cual la población de un país es metódicamente adoctrinada y organizada para apoyar la causa.³⁶

En contraste con la perspectiva maoísta, el General Georgios Grivas (líder destacado de la organización clandestina EOKA) adoptó un enfoque totalmente distinto en la campaña contra los británicos en Chipre. El general entendió desde un inicio que no lograría la meta de expulsar a los británicos del país convirtiendo a las guerrillas en tropas regulares (de acuerdo a los preceptos de Mao). Por consiguiente, reorientó los objetivos de su organización para obtener una victoria moral a través de un proceso de desgaste y

³⁵ Frank Kitson, op. cit., p.3.

³⁶ Ibid, p. 5.

acoso del gobierno orientado a exasperar a las fuerzas enemigas.³⁷ En este sentido, la campaña de Grivas se diseñó para atraer la atención de la opinión pública internacional al conflicto en Chipre y para movilizar la diplomacia internacional.

Robert Asprey aporta a las concepciones clásicas de insurgencia su definición de guerra de guerrillas. Para el autor, la guerra de guerrillas es, tradicionalmente, un arma de protesta empleada para corregir los malos tratos, reales o imaginarios, de la población, ya sea a manos de invasores extranjeros o del propio gobierno; esta puede ser usada de manera independiente o como complemento a operaciones militares ortodoxas.³⁸ Una definición más concisa es la que proporciona el Coronel del Ejército colombiano Luis Alberto Villamarín, quien considera a la guerra de guerrillas como aquella táctica que hostiga al enemigo (Estado) en su propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos. Gracias a su movilidad, a su fácil dispersión en pequeños grupos y a su habilidad para desaparecer entre la población civil, la guerra de guerrillas puede convertirse en un desafío considerable para las autoridades establecidas.

Aunada al concepto de guerra de guerrillas encontramos la noción de “foquismo” desarrollada por el “Che” Guevara durante la revolución cubana. Dicha teoría se desprende del pensamiento de Mao Tse Tung y se resume en la famosa frase de que las fuerzas guerrilleras se deben mover entre el pueblo como “el pez en el agua”. El eje central de la teoría del “Che” es el “foco”, que alude directamente al papel de la guerrilla como catalizador político. El principio fundamental es que no siempre se debe esperar a que se den las condiciones para la revolución, ya que el “foco insurreccional” es capaz de crearlas. El mismo concepto de “foco insurreccional” fusiona dos elementos político-

³⁷ Ibid, p. 5.

³⁸ Ibid, p. 14.

militares: “foco“ o la existencia de la propia fuerza guerrillera y la “insurrección“, es decir, la concepción del pueblo como factor que se alzar  contra el gobierno por la existencia de la guerrilla.³⁹

La experiencia guerrillera latinoamericana ofrece ejemplos que dan cuenta de la notoria influencia del foquismo sobre otras luchas armadas en la regi n. En primer lugar, podemos mencionar a los tupamaros en Uruguay. Esta organizaci n armada asumi  la idea de “foco“ desarrollada por los te ricos castristas tras el triunfo de la Revoluci n Cubana. Se trataba, en t rminos generales, de una peque a organizaci n clandestina que inici  la lucha para crear conciencia en los sectores revolucionarios y en el pueblo.⁴⁰ El foquismo tupamaro ten a sus or genes en las propuestas de los te ricos castristas, sin duda. Sin embargo, mantuvo diferencias sustanciales con ellas. Primero, porque rechazaba su forma habitual de combate, la guerrilla rural. Los tupamaros identificaron que la estrategia de guerrilla rural era inviable en Uruguay ya que se encontraban en un pa s que aglutinaba alrededor de la mitad de su poblaci n en una sola ciudad, la capital. La lucha deb a ser, por tanto, urbana.⁴¹ Adem s, los tupamaros plantearon su “foco“ desde un punto de vista cualitativo, es decir, su influencia no era la puramente militar, sino que radicaba en la capacidad para conmover las mentalidades revolucionarias. En su teor a, la lucha armada era un apoyo a la lucha principal, la pol tica. Como asegura Rey Trist n, la lucha armada era un recurso propagand stico para movilizar al resto de la

³⁹ Ra l Ben tez Manaut, *“La teor a militar y la guerra civil en El Salvador“*, UCA Editores, San Salvador, 1989, p. 163.

⁴⁰ Eduardo Rey Trist n, “Propuestas revolucionarias en la izquierda uruguaya de los a os 60“, en *Revista de Historia de Am rica*, No. 132, 2003, p. 88.

⁴¹ *Ibid*, p. 88.

izquierda, por lo tanto, el foco tupamaro, base de toda su estrategia revolucionaria, era ideológico y propagandístico.⁴²

Por otra parte, observamos el ejemplo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile. El MIR fue creado a mediados de los sesenta por estudiantes universitarios y diversos militantes de izquierda. La estrategia político-militar de la organización se nutrió, en parte, por la incapacidad de la izquierda moderada de constituirse como un verdadero motor del cambio en Chile. Además, el gobierno de Eduardo Frei no había atinado a resolver los principales problemas que aquejaban a la nación.⁴³ Así, el MIR inició actividades bajo los preceptos del foquismo castrista y emprendió una serie de acciones que involucraron la agitación estudiantil, los actos reivindicativos de apoyo a las demandas obreras y campesinas, y los asaltos bancarios para financiar su lucha.⁴⁴

Con el golpe de estado de 1973, los miristas encontraron la oportunidad histórica de poner en práctica la lucha armada. La dictadura militar recién instaurada tenía entre sus principales prioridades terminar con la organización. Fue entonces cuando inició la campaña de persecución. En 1974, Miguel Enríquez, líder y máximo teórico mirista, murió en combate y con él una buena parte del ímpetu del movimiento. Para 1976 el MIR se encontraba reducido a su mínima expresión.⁴⁵

Para retomar la noción de insurgencia, hilo conductor de este apartado, identificamos que la doctrina contemporánea nos ofrece dos definiciones clásicas. Por un

⁴² Ibid, p. 90.

⁴³ Francisco Alejandro García Naranjo, “La lucha guerrillera y los tiempos de esperanza en Chile“, en *Tzintzun Revista de Estudios Históricos*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, formato electrónico http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn16/guerrilas_en_chile.pdf, p.103.

⁴⁴ Ibid, p. 104.

⁴⁵ Ibid, p. 106.

lado se encuentra la de David Galula que propone entenderla como la “lucha prolongada conducida metódicamente, paso a paso, con el propósito de alcanzar objetivos intermedios, con el fin último de derrumbar un orden existente”⁴⁶. Está también la definición propuesta por Bard O’Neill quien establece que la insurgencia se refiere a “una lucha entre grupos no dominantes y autoridades en la que el grupo no dominante utiliza conscientemente recursos (expertos en organización, propaganda y protestas) y violencia para destruir, reformular o sostener las bases de legitimidad de uno o más aspectos de la política”.⁴⁷ En años recientes, Petraeus y Mattis han definido a la insurgencia como un “movimiento organizado que apunta a derrumbar un gobierno constituido mediante la subversión y el conflicto armado”,⁴⁸ haciendo hincapié en la idea de que el poder político es el asunto central en una insurgencia.

Régis Debray, en la obra *Revolution in the revolution*, es contundente al afirmar que “para destruir un ejército, es necesario otro ejército, lo cual implica entrenamiento, disciplina y armas; no solamente valentía y fraternidad”⁴⁹. A partir del reconocimiento explícito de la necesidad de recurrir a la vía armada, el autor identifica una serie de tácticas con lógicas propias. Estas incluyen el uso de las armas para la autodefensa y el recurso a la propaganda política para conseguir el apoyo de la población a la causa de la insurgencia. Si bien estas acciones son de utilidad para conseguir los objetivos propuestos, Debray concluye que la estrategia base del movimiento es la guerrilla y esta debe encontrarse sujeta a una organización política o partido.⁵⁰

⁴⁶ Heather S. Gregg, “Setting a place at the table: ending insurgencies through the political process”, en *Small wars and insurgencies*, 22:4, 2011 pp. 645- 646.

⁴⁷ Ibid, p. 646 .

⁴⁸ Ibid, p. 646.

⁴⁹ Régis Debray, *Revolution in the revolution? Armed struggle and political struggle in Latin America*, Harmondsworth, Penguin Books, 1968, p. 35.

⁵⁰ Ibid, p. 25.

De acuerdo con Debray y tomando como referencia la experiencia vivida durante la Revolución Cubana y la estrategia “foquista” del Che Guevara, los procesos de insurgencia (guerrillas) parecen recorrer las siguientes fases: a) Fase de establecimiento: el grupo inicial experimenta un periodo de nomadismo, seguido por un periodo de consolidación y establecimiento por parte de los combatientes. Se organizan los mecanismos de comunicación, las líneas de suministro, las fuerzas de auxilio y los depósitos de armas con la finalidad de arribar a la etapa final de esta fase con la constitución de una zona de operaciones. b) Fase de desarrollo: se encuentra marcada por la ofensiva enemiga llevada a cabo por todos los medios disponibles (cercos tácticos y operacionales, tropas aéreas, bombardeos). Esta fase incluye el momento en el que las tropas están listas para enfrentar la ofensiva enemiga, tomar la iniciativa táctica y destinar unidades de la columna central para establecer “células” en otros frentes. c) Fase de la ofensiva revolucionaria: marcada por el uso simultáneo de componentes militares y políticos. Las guerrillas tienen motivaciones y metas políticas; deben contar con el apoyo de las masas o de otra forma desaparecerán. Antes de enlistarlos, deben convencerlos primero de que hay razones válidas para su existencia de manera que la “rebelión” se convierta en una “lucha del pueblo”.⁵¹

El trabajo político o “trabajo de masas” característico de la tercera fase propuesta por el autor, tiene la finalidad explícita de adquirir el apoyo activo de diversos sectores sociales. Una vez que el movimiento ha logrado asegurar dicho apoyo podrá formar una sólida retaguardia, contar con una fuente regular de provisiones, desarrollar una red de

⁵¹ Ibid, p. 32.

inteligencia y contar con un centro de reclutamiento. De esta forma, la guerrilla podrá proceder a la confrontación directa.⁵²

Es importante reconocer que el conflicto armado encontrará condiciones específicas en cada país y su desarrollo dependerá, en buena medida, de la situación en la que tenga lugar. Sin embargo, es importante destacar el valor de elementos comunes como la flexibilidad, la capacidad para mantenerse en constante movimiento, la secrecía para la preparación de las misiones, la rapidez en la ejecución y el factor sorpresa. Todas estas son herramientas que pueden traducirse en ventajas significativas para los movimientos insurgentes. Sin embargo, de ellas dependerá el éxito o el fracaso de la insurgencia.

Una idea interesante que puede ayudarnos a contrastar diversas insurgencias en la experiencia mexicana es la que retoma Debray de los clásicos como Mao Tse Tung y Ernesto “Che” Guevara, referente a la relevancia del partido político. Estos pensadores destacan el papel de la organización política como el órgano responsable de marcar la meta a la cual deberá entregarse el ejército popular. El mismo Debray argumenta que “quitar al ejército del partido, sería quitar al instrumento de su razón política”.⁵³ De esta manera, el autor pone de manifiesto la idea de que la organización armada depende de la organización política para la concreción de sus objetivos.

El papel de la población y su relación con la insurgencia

El consenso entre los académicos indica que la población tiene un rol central dentro de este tipo de procesos, o en términos de Robert Taber “la población es la clave de todo el

⁵² Ibid, p. 47.

⁵³ Ibid, p. 96.

conflicto”.⁵⁴ Para Galula, “si los insurgentes logran disociar a la población de la contrainsurgencia, controlarla físicamente y tener su apoyo activo, ganarán la guerra porque, al final del análisis, el ejercicio del poder político depende del acuerdo, tácito o explícito, de la población y su sumisión”.⁵⁵

Otros autores, como Bard O’Neill incluso destacan la conveniencia de dividir el apoyo popular entre miembros activos y pasivos de la sociedad así como participantes intelectuales. De esta forma se logrará resaltar el papel específico que cada uno cumple al apoyar a la insurgencia.⁵⁶ Asimismo, Régis Debray refuerza la idea de que la guerrilla debe permanecer independiente de la población civil, tanto en acción cuanto en organización militar. De ser así, la guerrilla no necesita asumir la defensa directa de la población campesina, ya que la protección de la población dependerá de la progresiva destrucción del poder militar de los enemigos.⁵⁷

De acuerdo con Kitson, subversión e insurgencia refieren a formas de conflicto civil, porque ambas implican la acción de una parte de la población contra otra, ya sea a través del uso de la fuerza o por otro tipo de presiones. Lo que es claro es que la población de un país sólo podrá alzarse en contra de su gobierno si se le persuade de hacerlo o si se le coerciona. En teoría, los insurgentes prefieren utilizar mecanismos de persuasión para convencer a la gente de que los apoyen y dejar el uso de la fuerza como último recurso. En la práctica, los insurgentes suelen recurrir a la fuerza por errores de juicio, impaciencia y pánico, o como consecuencia de su inhabilidad de controlar a sus seguidores. Es importante señalar que si los organizadores de una campaña son capaces

⁵⁴ Heather S. Gregg, op. cit., p. 646.

⁵⁵ Ibid, p. 646.

⁵⁶ Ibid, p. 646.

⁵⁷ Régis Debray, op. cit., p. 41.

de obtener el apoyo de un importante sector de la población y demostrárselo al gobierno mediante huelgas y protestas, es posible que consigan que el gobierno se rinda sin usar la fuerza. Pero si el gobierno mantiene un control considerable sobre la población, los insurgentes necesitarán emplear la fuerza para atacarlo, defender a aquellos envueltos en la subversión y crear dificultades por otros medios (condiciones para la desestabilización).⁵⁸ En términos de los insurgentes y la población civil, es claro que la fuerza se utiliza como segunda opción para reforzar los mecanismos de persuasión.

Un tema que Timothy Wickham-Crowley identificó, con base en las relaciones que se establecen entre combatientes y civiles, es el de los sistemas de apoyo de las insurgencias. Dichos sistemas incluyen armas, fábricas, redes de transportación y líneas de suministro que conectan a los combatientes con recursos diversos. La relevancia de la triada compuesta por combatientes, civiles y sistemas de apoyo es que mientras los principios de la guerra moderna convencional establecen una clara distinción entre ellos, en situaciones de guerra de guerrillas, la distinción es intencionalmente difuminada por los guerrilleros.⁵⁹

Una vez que se identifica el papel fundamental que la población ejerce en el éxito o fracaso de las insurgencias entenderemos que el objetivo prioritario de cualquier gobierno, en esta situación, será recuperar y mantener la lealtad de la población. Con ese propósito, los gobiernos buscarán aislar y eliminar a los actores envueltos en la subversión y aumentar el control de la población.

⁵⁸ Frank Kitson, op. cit., p. 4.

⁵⁹ Timothy Wickham-Crowley, "Terror and guerrilla warfare in Latin America, 1956-1970", en *Comparative Studies in Society and History*, vol. 32, 1990, p. 224

CONTRAINSURGENCIA

La obra reciente de Keany y Rid, *Understanding Counterinsurgency Warfare: Origins, Operations and Challenges*, nos brinda un primer acercamiento a la doctrina clásica sobre la contrainsurgencia, es decir, la corriente británica y francesa. Por un lado, la francesa propone conceptos como la “guerra revolucionaria” y “armas psicológicas”, además de subrayar la necesidad de identificar el contexto político para el diseño de una estrategia apropiada. Por otro, la británica (doctrina de corazones y mentes) se enfoca en principios fundamentales, entre los que destacan los siguientes: el uso mínimo de la fuerza dentro de un marco legal, la legitimidad como objetivo principal, la cooperación entre militares y civiles, la flexibilidad táctica y el aislamiento de los insurgentes. En otras palabras, un constante proceso de aprendizaje y adaptación por parte de las fuerzas diseñadas para dichas operaciones.⁶⁰

La doctrina estadounidense, desarrollada en mayor medida al finalizar la Guerra Fría, se centra en el llamado “*Comprehensive approach*”. En términos generales, Adam Roberts resume la idea central de la doctrina al afirmar que significa: “la aplicación de todos los aspectos del poder del Estado dentro del territorio donde se está peleando”.⁶¹ Además de establecer esta noción, la doctrina resalta el hecho de que cada insurgencia es diferente y por lo tanto se debe tener conciencia sobre las características propias del ambiente donde dicha doctrina se desplegará. Ya sea en su versión francesa o anglosajona, estas doctrinas prevalecieron durante todo el s. XX como corriente dominante entre los analistas y estudiosos de la contrainsurgencia a nivel global.

⁶⁰ Thomas Rid y Thomas Keany, *Understanding Counterinsurgency Warfare: Origins, operations and challenges*, New York, Routledge, 2010, p. 3.

⁶¹ Adam Roberts, “Doctrine and reality in Afghanistan” en *Survival: Global Politics and strategy*, 51:1, 2009, pp. 34-35.

Sin embargo, en las últimas décadas, dos grandes acontecimientos obligaron a los teóricos de la insurgencia y contrainsurgencia a reformular ciertos aspectos de la doctrina con el objetivo de entender con mayor claridad el desarrollo de este tipo de conflictos. Así, las intervenciones en Irak y Afganistán, lideradas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a principios del s. XXI y la circulación del *Counterinsurgency Field Manual (FM 3-24)* redactado por David Petraeus (actual director de la CIA) y James Mattis (General del Comando Central de los Estados Unidos), impulsaron una nueva ola de reflexiones teóricas sobre dicho tema. De acuerdo con Adam Roberts, el manual “revive y actualiza doctrinas que fueron desarrolladas durante la Guerra Fría como respuesta a las insurrecciones anticolonialistas y [...] retoma dos fuentes principales, *Counterinsurgency Warfare* de David Galula y *Defeating Communist Insurgency* de Sir Robert Thompson”.⁶²

De acuerdo con Heather S. Gregg, cuando se estudian conflictos de este tipo conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: a) la insurgencia es violencia encaminada a cambiar el statu quo y, para obtener este fin, se vuelve fundamental adquirir el apoyo de la población, b) si la insurgencia consigue este apoyo, la clave para una estrategia de contrainsurgencia exitosa reside en la capacidad de la misma para volver a conseguir el apoyo popular, no sólo eliminar insurgentes y c) la contrainsurgencia requiere una mezcla de acciones militares y no militares (políticas). Por lo tanto, las insurgencias tienen causas políticas y la violencia es un medio para fines políticos.⁶³

⁶² Ibid., p. 35.

⁶³ Heather S. Gregg, op. cit., p. 645.

Frente al concepto de insurgencia se desarrolló la idea de la contrainsurgencia; misma que apunta al cúmulo de acciones militares y políticas que los gobiernos emprenden para responder a tales amenazas. En este aspecto, David Galula propone la idea de un “Plan Holístico” bajo el argumento de que “no es suficiente que el gobierno establezca objetivos políticos para determinar la cantidad de fuerza militar que se aplicará en el conflicto o para crear o destruir alianzas; la política se debe convertir en un instrumento real de operación [...] cada acción militar debe estar relacionada con un efecto político y cada acción política debe estar relacionada con un efecto militar”.⁶⁴ De esta forma, la contrainsurgencia puede ser entendida como una serie de acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y civiles que emprenden los gobiernos para derrotar insurgencias. La lógica subyacente apunta al hecho de que si los movimientos insurgentes tienen un origen político, entonces incorporarlos al sistema puede ayudar a solucionarlos, por lo tanto, las estrategias de contrainsurgencia no implican necesariamente, ni exclusivamente, el uso de la fuerza pública para mitigar sus efectos. En términos de Kitson, estas estrategias pueden incluir operaciones para la estabilidad, mismas que implican el mantenimiento de la paz mediante acciones de conciliación, el apoyo de fuerzas armadas oficiales por invitación de sectores de la población y la prevención del uso de violencia.⁶⁵

De acuerdo con Barry Cooper, el objetivo de estas operaciones es separar a los insurgentes de la población civil. En términos políticos, esto significa que el gobierno debe tener una propuesta alternativa, lo suficientemente atractiva para que pueda contrarrestar las promesas ofrecidas por los insurgentes a la población. En términos

⁶⁴ Ibid, p. 647.

⁶⁵ Frank Kitson, op. cit., p. 25.

militares, esto significa también que la fuerza del Estado debe ser usada para contrarrestar, no para sobrepasar masivamente a las fuerzas insurgentes.⁶⁶ Es importante destacar que si la población percibe que las acciones del gobierno en contra de los grupos insurgentes son desproporcionadas, el efecto puede ser contraproducente y la lealtad de la sociedad puede reorientarse a favor de los opositores.

Así, la doctrina estadounidense vigente sobre contrainsurgencia pone el énfasis en operaciones de estabilidad cuya lógica está más relacionada con la organización de la sociedad que con el desmembramiento de grupos armados. Las funciones de estas operaciones son:

- a. Asesoría: la tarea de asesorar comandos militares nativos en la zona del conflicto para operaciones paramilitares y de tropas irregulares.
- b. Asuntos civiles: establecer una relación de cooperación entre las unidades militares y la población.
- c. Población y control de recursos: acciones que toman los gobiernos para prevenir que la población apoye las causas insurgentes.
- d. Operaciones psicológicas y de inteligencia.⁶⁷

En América Latina, la influencia de las fuerzas armadas con frecuencia ha resultado problemática debido a su peso político. Autores como Dirk Kruijt han cuestionado la capacidad de las fuerzas armadas latinoamericanas para actuar como "fuerza de estabilización", "árbitro desinteresado", "protector del poder de la Constitución" o "guardián del desarrollo nacional". En calidad de entidad interviniente,

⁶⁶ Barry Cooper, *Democracies and small wars*, Calgary, Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, 2009, p. 30.

⁶⁷ *Ibid*, p. 53.

los militares ejecutan misiones de estabilización en la arena política. Asimismo, se convirtieron en diseñadores y ejecutores de proyectos militares de sus respectivos países. El concepto de las fuerzas armadas como "la estabilización de las instituciones" propició dos tendencias diferentes: la primera dio lugar a gobiernos con carácter reformista - dictablandas – y la segunda desembocó en represión dura. Los gobiernos de los generales Calles y Cárdenas en México, el Estado Novo de Vargas en Brasil, el gobierno peronista en la Argentina, el Velasquismo en Perú y el Torrijismo en Panamá son ejemplos de gobiernos militares reformistas. Por el contrario, las dictaduras cívico-militares en Brasil y el Cono Sur en la década de 1970 y los gobiernos militares y civiles-militares durante las guerras civiles de América Central son ejemplos de gobiernos militares que recurrieron a la violencia y la opresión abierta, amparados en las doctrinas de "seguridad nacional" y "estabilidad nacional".⁶⁸

Las batallas contra el terrorismo interno y las guerras internas en América Latina coinciden en mayor parte con gobiernos cívico-militares caracterizados por la mano dura. El instrumento de poder por excelencia de estos gobiernos es su amplia gama de servicios paralelos: inteligencia militar, los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales y parapoliciales y los grupos paramilitares. Como cerebro y columna vertebral de la lucha contra la insurgencia y el terrorismo, los sistemas de inteligencia y de seguridad se ampliaron a tal punto que sus lazos oficiales y no oficiales se volvieron difíciles de distinguir.⁶⁹

⁶⁸ Dirk Kruijt, op. cit., p. 411

⁶⁹ Ibid, p. 413

Tomando en cuenta la doctrina y el desarrollo conceptual de la noción de contrainsurgencia, es importante establecer algunas ideas que se identifican en la literatura como puntos débiles de los estudios realizados hasta el momento. En primer lugar, Adam Roberts reconoce que una de las debilidades que comparten las distintas doctrinas sobre contrainsurgencia es la falta de sensibilidad ante el contexto y, en algunos casos, su carácter ahistórico. Roberts alude a uno de los principales errores que cometen los exponentes de estas doctrinas al intentar establecer reglas generales para conflictos particulares con circunstancias radicalmente distintas. El mismo Roberts señala que otro problema común es el hecho de que se asume que los Estados encargados de emprender prácticas de contrainsurgencia, son Estados con fortaleza institucional y con gran capacidad de implementar estas medidas.⁷⁰

Huw Bennett, por su parte, añade al análisis la importancia de diferenciar periodos de continuidad y cambio durante estos procesos, con la finalidad de identificar los momentos en los que el uso de la violencia oscila entre un máximo, que implica confrontación directa, y un mínimo, que puede significar ataques psicológicos o propagandísticos.⁷¹ Por otra parte, los trabajos actuales de contrainsurgencia han dejado con frecuencia de lado el hecho de que las nuevas herramientas de comunicación e información han sido un factor importante en la consolidación y acción de diversos movimientos insurgentes.

Ben Connable y Martin Libicki, en la obra *How insurgencies end*, establecen una serie de hallazgos sugerentes con base en el estudio cualitativo y cuantitativo de 89

⁷⁰ Adam Roberts, op. cit., p. 36.

⁷¹ Huw Bennett, "Minimum force at British counterinsurgency" en *Small wars and insurgencies*, 21:3, 2010, p. 469.

insurgencias en el mundo. Primero, las insurgencias modernas duran aproximadamente 10 años y las oportunidades de ganar del gobierno se incrementan con el tiempo. Según estos autores, se podría terminar y derrotar por completo a una insurgencia sin que los gobiernos se dieran cuenta realmente de sus victorias y derrotas a lo largo de los años. Además, en algunos de los casos estudiados las insurgencias "derrotadas" se han dividido en pequeñas y más violentas organizaciones terroristas o bien, han hibernado con el propósito de reavivar las hostilidades en cuanto las condiciones adecuadas se presenten.⁷² Segundo, el retiro del patrocinio externo puede perjudicar a una insurgencia y, por lo general, conducir a su derrota. El patrocinio externo se define como apoyo directo o indirecto provisto a una insurgencia por determinado estado-nación (ej. EUA apoyando a las tropas afganas en contra de la URSS en los ochentas) o por un estado-nación hacia otro. Los patrocinadores proveen apoyo directo en forma de intervención militar –golpes militares, tropas o entrenadores- o indirectamente mediante financiamiento y equipamiento. Las pérdidas de patrocinio frecuentemente se correlacionan con la pérdida de seguidores, requisito fundamental para las insurgencias.⁷³

Tercero, las anocracias o pseudodemocracias no suelen tener éxito en su lucha contra las insurgencias y rara vez tienen éxito en plena democratización. De nuevo, de los 89 casos estudiados, 15 pueden ser descritos como “anocracias” o democracias “de nombre”. Anocracia es una forma particularmente débil de gobierno. Según Connable y Libicki, como consecuencia de su debilidad, las anocracias suelen obtener pocos beneficios de procesos de reforma y con el fin de conservar la fachada de la democracia, deberán abstenerse de utilizar tácticas represivas. En términos generales, las anocracias

⁷² Ben Connable y Martin C. Libicki, *How insurgencies end*, California, National Defense Research Institute, 2010, p. xii-xiii.

⁷³ *Ibid*, p. xiii.

tienen mal historial de lucha contra la insurgencia, ganando solo el 15 por ciento de todos los casos.

Algunos hallazgos adicionales en el estudio son interesantes y merecen, pues, ser considerados. Primero, se subraya que las insurgencias consideradas “complejas” con frecuencia dan lugar a finales complejos y prolongados. Es decir, aquellas insurgencias constituidas por dos o más facciones tienden a durar más tiempo y a ser más violentas. Afganistán es un ejemplo de esta situación con al menos siete grupos étnicos mayoritarios y numerosas organizaciones insurgentes. Además, en Afganistán encontramos la intromisión de varios actores internacionales como Irán, Pakistán, India, Estados Unidos y la OTAN, cada uno defendiendo sus intereses y complicando la terminación del conflicto. Si bien no todas las partes deben acordar el fin inmediato del conflicto, la insatisfacción de una o más partes complicará el final y puede contribuir al renacimiento de la insurgencia.

Un segundo hallazgo sugiere que los gobiernos suelen sobrevivir a las insurgencias. Contrario al conocimiento convencional, las insurgencias no consiguen triunfar por el simple hecho de prolongar su lucha contra el gobierno. De hecho, en el conflicto prolongado, los gobiernos tienden a triunfar. El factor tiempo siempre corre en contra de las insurgencias. Una tercera aportación se refiere al desempeño de los gobiernos. En general, los gobiernos actúan mejor sin apoyo externo, los gobiernos se benefician del apoyo directo, pero frecuentemente tienden a perder cuando el apoyo es indirecto; su desempeño es mejor cuando no cuentan con apoyo externo.⁷⁴ Una vez que se brinda el apoyo, casi siempre crea una dependencia con el patrocinador externo (el apoyo de EUA al sur de Vietnam, frente al apoyo prestado por China y la URSS al norte).

⁷⁴ Ibid, p. xvi.

Otro hallazgo es que las insurgencias pueden organizarse bajo la lógica de dos modelos. En el primer modelo, las insurgencias cuentan con una estructura jerárquica y unificada, mientras que en el segundo, las insurgencias se caracterizan por ser un conjunto fragmentado de redes. De acuerdo con la evidencia mostrada por los autores, las guerrillas urbanas tienden a organizarse más en redes fragmentadas y su contraparte rural en estructuras jerárquicas unificadas. Este hallazgo se relaciona con el hecho de que las insurgencias, en rara ocasión, triunfan en países urbanizados con ingreso medio. Según estos estudios, la insurgencia es un esfuerzo que se practica mejor en ambientes rurales o en ambientes semi urbanos.⁷⁵

Una de las aportaciones más importantes tiene que ver con el uso indiscriminado de la violencia y de métodos terroristas, mismos que pueden acarrear consecuencias imprevistas e, incluso, contraproducentes. De acuerdo con Wickham-Crowley, las tácticas terroristas se refieren a aquellos actos prohibidos por el derecho internacional humanitario e incluyen: a) palizas, asesinatos, robos, bombardeos u otros tipos de asalto a la población civil, incluidos asuntos como el desplazamiento forzado; b) golpear, torturar o matar combatientes que se han rendido; c) el uso de armas que no discriminan entre combatientes y civiles.⁷⁶ Cualquiera de estos actos abarca el proceso de terror, que tiene tres elementos distintos: a) el acto violento en sí; b) la víctima de un acto violento, y c) el objetivo del acto violento. Esta última expresión de violencia extrema es importante para la discusión de las insurgencias y contrainsurgencias. El objetivo fundamental del terror no es matar individuos, sino asustar a grupos sociales enteros.⁷⁷

⁷⁵ Ibid, p. xvi.

⁷⁶ Timothy Wickham-Crowley, "Terror and guerrilla warfare in Latin America, 1956-1970", p. 202.

⁷⁷ Ibid, p. 203.

En este sentido, en función de su origen, conviene distinguir entre dos tipos de terror. Por un lado, se observa el terror que producen los gobiernos y, por otro, el terror que produce el estado de inseguridad y pánico que produce una guerrilla. De acuerdo con Mitchell Stohl, Carleton y López, el terror por parte del gobierno “implica la coerción y la violencia deliberadas dirigidas contra alguna víctima, con la intención de provocar temor extremo en algunos observadores objetivo que se identifican con la misma, de tal manera que estos se perciban a sí mismos como futuras víctimas probables”. Esto obliga a analizar la posibilidad de que cambien su comportamiento en alguna forma deseada por el actor.⁷⁸ No hay duda de que el terror utilizado por las tropas del gobierno suele ser mucho mayor al que utilizan las guerrillas. Esto no quiere decir que el terror no sea un elemento sin importancia de la actividad guerrillera. Por el contrario, algunos argumentos tratan de legitimar el terror insurgente contra civiles por dos razones. En primer lugar, se argumenta que los insurgentes deben utilizar el terror con el fin de sobrevivir a los ataques iniciales del régimen sobre su movimiento. En segundo lugar, se argumenta que tal terror es muy selectivo y se utiliza sólo contra funcionarios gubernamentales, informantes, desertores y elementos criminales locales, incluyendo criminales sociales como los dueños de la tierra.⁷⁹

Algunas consideraciones finales que conviene señalar sobre el asunto del terror, y que son propuestas por Wickham-Crowley con base en el estudio de guerrillas latinoamericanas en la década de los setentas, se refieren al terror proveniente de la guerrilla. Según el autor, este tipo de terror suele ser más selectivo que el terror producido por el gobierno. Además, en ocasiones, el terror de la guerrilla puede resultar más eficaz

⁷⁸ Stathis Kalyvas, “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, p. 8.

⁷⁹ Ibid, p. 215.

que el del gobierno en lograr el sometimiento o apoyo de los campesinos; por último, el terror de la guerrilla puede ser más eficaz porque se combina con un programa de promoción de los intereses campesinos.⁸⁰

Aun así, la experiencia histórica sugiere que amplias campañas de terror organizadas por las fuerzas insurgentes se correlacionan con la derrota de las mismas. Tal es el caso, por ejemplo, de Sendero Luminoso en Perú. Sin embargo, en ocasiones las campañas de ataques terroristas discriminados y específicos que logran afectar sólo a un grupo limitado de civiles pueden otorgar una clara ventaja a los insurgentes. En otras palabras, aquellos grupos insurgentes capaces de restringir el uso de acciones terroristas mediante la minimización de bajas civiles, son más propensos a ganar que aquellos que no lo hacen.⁸¹

Cabe señalar, por último, que las insurgencias militarmente débiles, pero políticamente fuertes, pueden ganar. Las insurgencias no necesitan ser fuertes en términos militares para ganar e, incluso, la fortaleza militar puede resultar contraproducente si la amenaza de una victoria militar por parte de los insurgentes incita a las fuerzas de seguridad de un gobierno a la represión violenta. En los casos de insurgencias prolongadas, por ejemplo Colombia y Sri Lanka, el gobierno fue capaz de revigorizar los esfuerzos contrainsurgentes incluso enfrentando poderosos cuadros insurgentes (FARC y Tamil Tigers, respectivamente).⁸²

⁸⁰ Ibid, p. 217.

⁸¹ Ben Connable y Martin C. Libicki, *op. cit.*, p. xvii.

⁸² Ibid, p. xvii.

POSIBLES RESULTADOS EN TÉRMINOS DE INSURGENCIAS

Para fines del estudio propuesto, la parte cualitativa del análisis realizado por Connable y Libicki resulta de especial interés. Los autores establecen una tipología de los posibles resultados que pueden derivar del levantamiento de una insurgencia, obteniendo cuatro escenarios posibles que pueden ser susceptibles de comparación con la experiencia mexicana.

El primer escenario corresponde a situaciones en las que el gobierno pierde. Como se señaló antes, la evidencia histórica sugiere que la mayoría de las insurgencias pierden ya que los estados, sin importar debilidades o fortalezas, suelen ser más fuertes, están mejor organizados y cuentan con fuerzas profesionales. De acuerdo con el estudio de Connable y Libicki, todas las insurrecciones en Latinoamérica que siguieron a la Revolución Cubana, exceptuando a la insurgencia en Nicaragua en 1978-1979, fallaron. Los autores señalan que las insurgencias exitosas tienden a tener importantes repercusiones históricas y para muestra, se debe recordar las experiencias de Fidel Castro en Cuba, Mao Tse Tung en China, los Jémeres Rojos en Camboya y el Mujahideen en Afganistán. Las insurgencias pueden ganar en una variedad de formas, incluyendo el derrocamiento del gobierno, la anexión exitosa de territorio independiente, el reconocimiento de los derechos de las minorías o de derechos de propiedad en disputa, entre otros.⁸³

En el caso de victoria por parte de los insurgentes, el fin del juego para el gobierno puede ser por un cambio drástico que, en términos de McCormick, Horton y Harrison, representaría un “punto de quiebre” para el gobierno a partir del cual podría

⁸³ Ibid, p. 14

decaer de manera acelerada.⁸⁴ En una situación de estas características, la sociedad podría cambiar lealtades al percibir que el gobierno se encuentra en desventaja ante la insurgencia. El mismo fenómeno es probable que se dé entre los militares de alto rango.

Ya que es difícil ubicar puntos de quiebre en los procesos de conflicto que indiquen con certeza el momento en el que empieza la decadencia de alguna de las partes, los expertos de inteligencia crean constantemente listas de riesgos que, de manifestarse, podrían ofrecer indicadores acerca del rumbo en que se dirige una situación o conflicto. Algunos de los indicadores que la CIA formuló en la década de los ochenta incluyen: la retirada progresiva de la ayuda interna para el gobierno; la retirada progresiva del apoyo internacional para el gobierno; la pérdida progresiva del control del gobierno sobre la población y el territorio; la pérdida progresiva del poder coercitivo del gobierno; la fuga de capitales y las tasas crecientes de "fuga de cerebros"; el aumento de las tasas de desertión militar, especialmente entre los altos oficiales; el agotamiento de "inteligencia práctica" y otra información útil previamente suministrada por la población civil.⁸⁵

Para ejemplificar este escenario, conviene detenernos en el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua. Podemos identificar dos etapas que dan cuenta del avance que tuvo la insurgencia en su camino a derrotar al gobierno de Somoza. La primera va desde su fundación en 1961 hasta los primeros años de la década de los setenta. La segunda inicia en 1974 y concluye en 1979 con su ascenso al poder.⁸⁶ El primer periodo se caracteriza, militarmente, por una estrategia basada en el foquismo del "Che" durante la revolución cubana. Sin embargo, dos cuestiones llaman la atención para el caso nicaragüense. La dictadura se mantuvo férrea en su dominio autoritario, es

⁸⁴ Ibid, p. 15.

⁸⁵ Ibid, p. 16.

⁸⁶ Raúl Benítez Manaut, *"La teoría militar y la guerra civil en EL Salvador"*, p. 176.

decir, el gobierno de Somoza nunca emprendió las reformas necesarias para lograr un consenso mínimo en la población y evitar que se polarizaran las posiciones. Además, la guerrilla sandinista nunca pudo ser eliminada del todo, por lo que tuvieron la posibilidad de volver a la escena pública con otra estrategia.⁸⁷ La nueva estrategia inauguró la segunda etapa de la organización y se basó en los principios de conseguir la participación activa de las masas en la lucha armada y mantener una situación de movilización total. Dicha movilización abarcó aspectos sociales, políticos y económicos de la vida pública nicaragüense y su finalidad fue dispersar la capacidad técnica y militar del gobierno.⁸⁸

Por ende, militarmente, el triunfo del Frente Sandinista se dio por la articulación que efectuó entre la espontánea insurrección del pueblo y la conducción militar de sus columnas guerrilleras. En lo político, supo canalizar el creciente vacío de poder que se gestaba en la sociedad, manifestado por la incapacidad del gobierno para promover reformas y hacer alianzas políticas que permitieran reducir el descontento popular. Además, el gobierno se mantuvo en una posición aislada de las fuerzas internacionales, de manera que Somoza no logró obtener apoyo militar y económico del exterior.⁸⁹

El segundo escenario corresponde a una victoria por parte del gobierno. En teoría, el gobierno gana destruyendo los cuadros insurgentes, la estructura política insurgente, o ambos. Sin embargo, en la práctica, los gobiernos han dejado ver su capacidad para acorrallar y destrozarse fuerzas insurgentes o movimientos rebeldes sólo para verlos reaparecer décadas después. El gobierno puede también adquirir victorias a través de métodos y canales políticos legítimos, sin importar que este método requiera, con

⁸⁷ Ibid, p. 176.

⁸⁸ Ibid, p. 179.

⁸⁹ Ibid, p. 179.

frecuencia, hacer concesiones a los insurgentes.⁹⁰ Cuando este es el caso, la trayectoria de la fase final de un conflicto puede variar de acuerdo al tipo de derrota o respuesta que el gobierno emprenda en contra de los rebeldes.

Connable y Libicki identifican algunos indicadores que podrían ayudar a distinguir el momento en que una insurgencia se encuentra en periodo de decadencia. Entre dichos indicadores podemos destacar: el número creciente de defecciones y desertiones, particularmente, entre los cuadros de alto rango; altos volúmenes de información útil proporcionada por la población; eliminación de zonas de seguridad y apoyo de los insurgentes dentro y fuera del país; indicadores de mercado que sugieran el hecho de que los insurgentes deben pagar más por materiales, servicios e información; y, por último, la caída significativa en la asistencia internacional, incluyendo el apoyo financiero por parte de las diásporas.⁹¹

El tercer escenario corresponde a un resultado combinado, ya sea que el conflicto se estanque o que se resuelva por medio de la negociación. De acuerdo con la información procesada por Connable y Libicki, los finales negociados o pactados son raros; de los 89 casos seleccionados, solo un cuarto de ellos transitaron por el camino de la negociación. El estancamiento en el conflicto, es decir, cuando ambas partes se encuentran en una situación en la que no pueden escalar el conflicto con sus medios disponibles a un costo aceptable, provee oportunidades inmejorables para el logro de negociaciones.⁹² En una dimensión estructural, se establecen como posibles obstáculos para impedir la resolución pacífica del conflicto los siguientes: largas historias de uso de violencia para canalizar diferencias políticas; el juego de suma cero que se percibe como

⁹⁰ Ben Connable y Martin C. Libicki, op. cit., p. 17.

⁹¹ Ibid, p. 18

⁹² Ibid, p. 18s

natural en las guerras internas, es decir, o se gana todo o se pierde todo; y, por último, la falta de voluntad para renunciar a las oportunidades de lucro que ofrece la continuidad y permanencia del conflicto.⁹³ Una premisa fundamental de los procesos de paz por la vía de la negociación es la presencia voluntaria de los grupos que transitan de las armas a la política; es decir, la participación de la insurgencia es el elemento que brinda legalidad y legitimidad al proceso.

De acuerdo con Benítez Manaut, otro elemento a considerar en los procesos de negociación es el relativo a las fórmulas para “compartir el poder”. Dichas fórmulas conllevan la aceptación, por parte de los contendientes del poder de su contrario. Ante la imposibilidad de que uno de los bandos pueda prevalecer, se aceptan fórmulas de convivencia política, entre las que destacan la organización de gobiernos provisionales mientras se definen los procesos a través de la realización de elecciones (Zimbabue, Camboya, Angola), e incluye en algunos casos fusión de ejércitos. Esta fórmula de paz se puede considerar como la modalidad africana.⁹⁴

Alternativamente, cuando por condiciones internas y externas no es posible instaurar la fórmula de negociación, la salida es el reconocimiento institucional. Este esquema ha predominado en América Latina desde la pacificación venezolana. Para la aplicación de esta modalidad de negociación la clave es el paso de posiciones polarizadas y excluyentes en lo político, ideológico y militar a posiciones moderadas, donde las partes rechazan mantener o buscar el poder total, para fortalecer los mecanismos de contrapeso de las democracias representativas.⁹⁵

⁹³ Ibid, p. 19

⁹⁴ Raúl Benítez Manaut, “Negociaciones de paz en el tercer mundo: análisis comparativo”, en *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, No. 28, 1995, p. 83

⁹⁵ Ibid, p. 83

Para este escenario la experiencia latinoamericana vuelve a ser de utilidad. En este caso, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) representa a una insurgencia que tuvo la posibilidad de acceder al poder, pero no por medio de la lucha armada. El FMLN se fundó en El Salvador en octubre de 1980. Fue una coalición formada por cinco organizaciones político-militares de orientación marxista-leninista. Como muchas otras organizaciones armadas de la época, su objetivo era tomar el poder por las armas y sentar las bases del socialismo en El Salvador mediante la instauración de un régimen revolucionario.⁹⁶

La campaña de contrainsurgencia para el caso salvadoreño puede ser analizada desde las acciones emprendidas por tres actores políticos: el gobierno encabezado por la Democracia Cristiana, las fuerzas armadas y el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, el gobierno emprendió durante la década de los ochenta un proceso de liberalización que permitió la inclusión de diversos grupos políticos a la escena electoral, permitiendo así una limitada apertura del sistema político y la celebración de elecciones periódicas. De esta manera, los procesos electorales sirvieron para legitimar la nueva institucionalidad surgida del golpe de estado de 1979.⁹⁷ Por otra parte, de acuerdo con cifras presentadas por William Robinson, entre 1981 y 1992, los Estados Unidos otorgaron 6 mil millones de dólares al gobierno salvadoreño en ayuda económica y militar. Al menos 30% de esta cantidad fue entregada en forma de ayuda militar directa y se dirigió fundamentalmente a aumentar el tamaño de las fuerzas militares –de 10 mil a 55 mil efectivos de 1979 a 1990-, a la adquisición de armamento moderno, a la

⁹⁶ Alberto Martín Álvarez, “Una propuesta para analizar los procesos de cambio en organizaciones de guerrilla a partir del caso del FMLN salvadoreño”, en Verónica Oikión y Miguel Ángel Urrego editores, *Violencia y Sociedad. Un hito en la historia de las izquierdas en América Latina*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-El Colegio de Michoacán, Morelia, 2012, p. 494.

⁹⁷ *Ibid.*, p. 496s.

organización de unidades aeromóviles y a la reestructuración de los sistemas de mando, comunicaciones e inteligencia.⁹⁸ La consecuencia directa del apoyo de Washington a las fuerzas armadas fue que estas comenzaron a imponer condiciones en el combate contra el FMLN, reduciendo sus posibilidades de organizar ofensivas a gran escala que pudieran poner en riesgo la estabilidad del gobierno. No obstante la insurgencia fue derrotada, el frente fue objeto de diversas adecuaciones que lo transformaron en partido político y lo llevaron al poder más adelante.

Por último, el cuarto escenario corresponde a los resultados inconclusos. Esta categoría se refiere a conflictos que continúan en desarrollo o en los cuales la victoria no se le puede adjudicar claramente a ninguno de los bandos. El problema con este tipo de resultados parece ser que si no se abordan las causas profundas de la insurgencia, se les brinda la posibilidad de hibernar, a veces sin ser detectados, por años antes de volver a emerger. Ejemplos concretos de esta situación lo representan Colombia, Perú y Francia. Por un lado, el gobierno peruano derrotó al movimiento Sendero Luminoso en 1992, sólo para verlo resurgir diez años más tarde, Perú falló al abordar las causas profundas de esta insurgencia en su mayoría rural; por otro, el gobierno francés derrotó, aparentemente, al Frente de Liberación Nacional en Argelia en la década de 1950, pero en 1962, Argelia adquirió la independencia en gran parte por dicho movimiento.⁹⁹

Conviene detenernos en el caso colombiano. En términos generales, podemos distinguir dos grandes modalidades guerrilleras en Colombia: la agrarista-comunista y la foquista. La primera está representada por las FARC, que hasta comienzos de los años ochenta fueron un apéndice del Partido Comunista pro soviético y heredaron una

⁹⁸ Ibid, p. 505.

⁹⁹ Ben Connable y Martin C. Libicki, op. cit., p. 20.

tradición que combina las luchas agrarias iniciadas en los años veinte y la violencia de los años cincuenta. La segunda modalidad es de tipo castrista y está representada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones de entre las cuales destaca el M-19. La situación de la guerrilla colombiana es compleja ya que su fragmentación se exacerbó en cuanto la guerra insurgente y contrainsurgente quedó interferida por la guerra contra las drogas.¹⁰⁰

Las políticas de Reagan para la región propiciaron una intervención indirecta por parte de las autoridades estadounidenses en Colombia. De 1981 al año 2000, el apoyo militar estadounidense entró con flujo constante a las distintas administraciones gubernamentales. Sin embargo, las autoridades colombianas no lograron capitalizar el apoyo externo y las FARC crecieron en fuerza y arsenal. Eventualmente, los insurgentes se hicieron de una zona autónoma del control gubernamental para desarrollar sus operaciones.¹⁰¹ Diversos estudios demuestran que en el periodo de 1986 a 1996, la guerrilla creció más que en los treinta y dos años anteriores. Las FARC pasaron de cerca de 3,600 hombres y 32 frentes en 1986 a aproximadamente 7,000 hombres y 60 frentes en 1995; el ELN, por su parte, pasó de 800 hombres y 11 frentes a 3,000 hombres y 32 frentes.¹⁰²

Para el año 2000, el presidente Clinton y el presidente Pastrana anunciaron los pormenores del Plan Colombia. El programa incluyó un monto de ayuda para gasto militar que ascendía a los 4.9 billones de dólares. Para el año 2009, las autoridades colombianas han logrado reducir sustancialmente las áreas de control de las FARC, han

¹⁰⁰ Marco Palacios, “Colombia: ni estado de guerra, ni estado de paz; estado en proceso de paz”, en *Foro Internacional*, Vol. 40, 2000, p. 17.

¹⁰¹ Ben Connable y Martin C. Libicki, op. cit., p. 58.

¹⁰² Marco Palacios, op. cit., p. 17.

logrado el rescate de diversos presos por la guerrilla y han logrado que la comunidad internacional mantenga el consenso en contra de la insurgencia.¹⁰³

CONCLUSIÓN

Como se observa, la contrainsurgencia es un fenómeno multidimensional que puede ser estudiado desde diferentes perspectivas. Es importante notar que estudiarla en sus particularidades implica el análisis de diversos factores de índole nacional, internacional y de la misma configuración de la insurgencia que se enfrenta. En efecto, además de mostrarnos los diversos análisis que se han realizado sobre el tema, la perspectiva teórica propuesta sirve también como una justificación conceptual sobre la investigación que propongo. La idea de Roberts cobra vital importancia, las circunstancias importan. No sólo al momento de decidir las características de la campaña que se emprenderá, sino también en términos del resultado que se aspira lograr.

Las herramientas analíticas que aquí presento servirán para sistematizar y profundizar en el análisis de las experiencias del gobierno mexicano al enfrentar a la Liga y al EZLN. A continuación, se presenta el primer caso de estudio.

¹⁰³ Ben Connable y Martin C. Libicki, *op. cit.*, p. 58.

II

LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE. GUERRA EN LAS CALLES

El primer caso a tratar corresponde a la organización armada conocida como Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S o la Liga). Sin embargo, antes de iniciar con el análisis de esta guerrilla -su modalidad, sus consecuencias, los factores de la esfera política que repercutieron en su acción y la respuesta gubernamental que buscó su erradicación- conviene precisar el contexto general en el que surgió y adquirió visibilidad.

En nuestro país, la historia de los movimientos armados de la segunda posguerra puede rastrearse al 23 de septiembre de 1965, fecha en que ocurrió el llamado asalto al cuartel Madera. Ese día, un grupo de trece personas dirigido por el profesor Arturo Gámiz García, e integrado por maestros, estudiantes y líderes campesinos, atacó el cuartel militar de Ciudad Madera, en el estado de Chihuahua. Las causas eran simples. Cansados de los abusos, explotación, agravios y despojos por parte de caciques, ganaderos, compañías madereras y algodonerías, quizás incluso alentados por el propio gobernador Práxedes Giner Durán, los guerrilleros decidieron tomar las armas.¹⁰⁴ Sin embargo, esta acción fracasó debido a la falta de experiencia militar de los combatientes, el desconocimiento del terreno, la ausencia de refuerzos para apoyar el ataque y, desde luego también, la capacidad del enemigo.

Pese a su derrota, el ataque al cuartel de ciudad Madera se convirtió en símbolo de la lucha guerrillera en México, pues su acción marcó el inicio de las guerrillas modernas

¹⁰⁴ Véase, Fritz Glockner, *Memoria Roja*, México DF, Ediciones B, 2007.

en el país. Como propone Fritz Glockner, este ataque significó el nacimiento del primer grupo guerrillero en México que pretendía justificar, desde una reflexión teórica y de su supuesto análisis puntual de la realidad, las razones de su lucha armada. Dicha reflexión superaba la simple indignación localista, producto de las injusticias a las que estaban expuestos los campesinos de la zona. La consigna ahora era crear focos que llevaran la lucha armada a la escala nacional.¹⁰⁵ A partir de este suceso, se inició en México una proliferación de numerosos grupos guerrilleros que alcanzó su fase más intensa durante los años de 1971 a 1977.

Para entender la proliferación de movimientos armados en la década de los setenta conviene entender dos dinámicas. Una se dio a nivel internacional y la segunda tiene que ver con causas en el interior de la nación. Por un lado, en el contexto de la Guerra Fría, la opción comunista se erigió como una alternativa atractiva para diversos grupos alrededor del mundo. En diversas naciones, estos grupos abrazaron la causa revolucionaria y pugnaron por cambios estructurales. Desde luego, el caso más emblemático para los simpatizantes de la opción armada, en México y en el resto de Latinoamérica, fue la revolución cubana.

A esta dimensión de índole internacional, se añaden las causas de orden interno. En muchos países de la región, pero también en México, la cerrazón gubernamental frente a las demandas de reparto agrario, la concentración neolatifundista de la tierra, la opresión política caciquil, la pobreza y marginación social, el férreo autoritarismo, así como la violencia gubernamental contra organizaciones campesinas de la más diversa orientación política y ubicación geográfica tuvieron consecuencias decisivas en diversos

¹⁰⁵ Ibid.

grupos que comenzaron a considerar la vía armada.¹⁰⁶ Una de estas organizaciones representa nuestro primer caso de estudio: la Liga comunista 23 de Septiembre.

MODALIDAD DE LA INSURGENCIA

Origen

La Liga Comunista 23 de Septiembre o “Liga”¹⁰⁷ fue un movimiento guerrillero con orientación Marxista-Leninista fundado en la ciudad de Guadalajara el 15 de marzo de 1973. La organización se mantuvo en funcionamiento hasta 1983 con amplia actividad tanto en el frente urbano, cuanto en el rural. Junto con el Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, se perfiló como uno de los grupos guerrilleros más grandes durante el periodo de la Guerra Fría. Mario Arturo Acosta Chaparro, militar implicado en la estrategia antiguerrillera en el estado de Guerrero, estimó el número de combatientes de dicha organización en 392. Esta fue la cifra más alta en términos de militantes para las organizaciones guerrilleras de la época.

La Liga se fundó por una coalición de grupos armados independientes y estuvo integrada predominantemente por estudiantes que reivindicaban la revolución al estilo comunista. La coalición agrupó a siete organizaciones guerrilleras: los Procesos, los Guajiros, los Enfermos, el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), el Movimiento Armado Revolucionario 23 de Septiembre, los Lacandones y los Macías. En 1973, algunos de estos grupos se encontraban en franco proceso de radicalización, lo que explica que más tarde, la Liga se constituyera como la organización guerrillera más radical de la época.

¹⁰⁶ José Luis Piñeyro, “Las fuerzas armadas y la contraguerrilla rural en México: pasado y presente”, en *Nueva Antropología*, vol. XX, num. 65, mayo-agosto, 2005, p. 78.

¹⁰⁷ Conocida también por sobrenombres como: la Resortera, LC, Veintitrés, Dostrés, la Orga y la O.

La iniciativa de unir a grupos independientes, bajo el auspicio de una organización revolucionaria, puede rastrearse a agosto de 1971 cuando se funda la “Organización Partidaria”. Diego Lucero, Leopoldo Angulo Luque (miembros de los Guajiros) y Raúl Ramos Zavala (líder de los Procesos) fueron los ideólogos de esta propuesta. Para finales de mes, dos miembros del grupo Procesos, Raúl Ramos Zavala e Ignacio Arturo Salas Obregón, se reunieron con los Guajiros y acordaron la creación de un movimiento guerrillero único. En enero de 1972, Ramos Zavala y Salas Obregón se reunieron con elementos del FER para discutir el plan de unirse en un solo movimiento. La dirigencia del FER accedió y para finales de 1973 se convirtió en una de las principales fuentes de militantes de la Liga.¹⁰⁸ En la primavera de 1973, Ignacio Salas Obregón convocó a una junta nacional en la ciudad de Guadalajara. La junta tuvo lugar en la calle Fraternidad de la Colonia Belisario Domínguez. Después de quince días de intenso trabajo, se resolvió la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre. La organización, bautizada así por Ignacio Salas Obregón, reivindicaba al comunismo y al grupo que había dado el golpe en el cuartel militar de la ciudad de Madera el 23 de Septiembre de 1965.

La Tabla 1, que se muestra a continuación, da cuenta de los grupos que se adhirieron al proyecto, así como de los principales dirigentes de la organización.

¹⁰⁸ Romain Robinet, “A revolutionary group fighting against a revolutionary State: the September 23rd Communist League against the PRI-State”, en Fernando Herrera Calderón y Adela Cedillo (eds.) *Challenging Authoritarianism in Mexico: Revolutionary struggles and the Dirty War 1964-1982*, Nueva York, Routledge, 2012, p. 131.

<i>Miembros y grupos fundadores de la Liga, 1973</i>	
<i>Fundadores</i>	<i>Organización</i>
Ignacio Salas Obregón Adolfo Hirales Morán Héctor Torres González	Movimiento Estudiantil Profesional
Leopoldo Angulo Luquen José A. García Martínez	Los Procesos
José Ignacio Olivares Torres	Los Guajiros
Fernando Salinas Mora	Frente Estudiantil Revolucionario
Francisco Rivera Carvajal	Enfermos de Sinaloa
David Jiménez Sarmiento	Lacandones
Manuel Gámez García Eleazar Gámez García Rodolfo Gámez García	Movimiento 23 de Septiembre
Wenceslao José García	Movimiento de Acción Revolucionaria

Figura 1. Composición inicial de la Liga.¹⁰⁹

Plataforma política e ideología

Los padres fundadores de la Liga creían que la Revolución de 1910 había sido rebasada. En su opinión, el régimen “revolucionario” carecía de la capacidad para transformar a la sociedad. Asimismo, el legado de la Revolución mexicana se había distorsionado y había terminado por beneficiar a una pequeña élite política.¹¹⁰ En consecuencia, la lucha que la Liga emprendería se caracterizó por un fuerte componente ideológico. Desde su perspectiva, la revolución comunista, ya fuese al estilo de Mao o de Lenin, representaba la mejor alternativa a un sistema que se encontraba en franca decadencia por la mala administración del PRI y su colusión con la élite económica.

La ideología Marxista-Leninista fue central en el posicionamiento político de la organización. Para los guerrilleros, la organización debía dar paso en el futuro a la creación de un partido revolucionario y de un ejército. La idea central que guiaba el accionar de la organización era la destrucción del Estado burgués y la instauración de la

¹⁰⁹ Rodolfo Gamiño Muñoz, *Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México*, México DF, Instituto Mora, 2011, p. 61.

¹¹⁰ Romain Robinet, “A revolutionary group fighting against a revolutionary State: the September 23rd Communist League against the PRI-State”, p. 129.

dictadura del proletariado. Para ellos, la revolución arrebataría a la burguesía las fábricas, las tierras, el capital y, además, eliminaría a su paso la propiedad privada. La idea era simple, en primer lugar los obreros irían a huelga en sus respectivos centros laborales. Mientras tanto, la Liga se encargaría de la organización de “comités clandestinos” para difundir propaganda y agitar a las masas. A largo plazo, estos comités serían los encargados de proveer de soldados al ejército revolucionario. Después de algunos enfrentamientos, el siguiente paso sería asestar un “golpe político” contundente que culminaría con un levantamiento general en contra de la burguesía.¹¹¹

El vehículo por el cual la Liga dio a conocer su plataforma política y divulgó información que iba desde el análisis crítico de la realidad política hasta noticias sobre las acciones que el gobierno tomaba en su contra, fue el periódico *Madera*. En los artículos publicados por dicho diario se podía apreciar un alto contenido Marxista-Leninista, pero también la presencia de otras corrientes de pensamiento como el viejo y nuevo anarquismo (cuyos principales exponentes, internacionales y nacionales, eran Bakunin y Flores Magón), los teóricos de la Escuela de Frankfurt (Marcuse, Adorno), algunos clásicos de la sociología como Weber y Durkheim, o extractos de la teoría novísima de Althusser.¹¹²

En este sentido, cabe señalar que la Liga no tomó en consideración las enseñanzas de la revolución cubana. Ello fue en parte consecuencia de la buena relación que el régimen de Fidel Castro sostuvo con el gobierno mexicano. A diferencia de lo que ocurrió en otras partes de la región, La Habana nunca ayudó formalmente a

¹¹¹ Ibid, p. 134.

¹¹² Gustavo Hiraes Morón, *La Liga Comunista 23 de Septiembre: orígenes y naufragio*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1977, pp. 14-15.

organizaciones guerrilleras en el país.¹¹³ El objetivo último de los ideólogos de la Liga era, por lo tanto, alcanzar la pureza y claridad ideológica necesaria para llevar la revolución a buen término. Al respecto, Jorge Castañeda señala que la política de Cuba hacia la lucha armada en México fue similar a la que la isla seguiría más tarde con respecto a la izquierda legal y con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas a finales de los ochenta. En ambos casos, dicha política se apejó a un postulado básico: “no inmiscuirse”.¹¹⁴ En efecto, el gobierno cubano difícilmente podía renunciar al beneficio que derivó de las relaciones diplomáticas que mantuvo con el gobierno mexicano durante los peores años del aislamiento hemisférico del que fue víctima. Ello fue posible gracias a su compromiso de no intervenir en la política interna mexicana. En otras palabras, abstenerse de apoyar directamente el surgimiento y mantenimiento de los grupos armados mexicanos.

Otra idea fundamental en el desarrollo ideológico de la Liga era la noción de la llamada Universidad Fábrica. Como lo explica A. Tecla Jiménez, la tesis fundamental detrás de esta noción planteaba que la universidad es parte de una nueva rama de producción y que la mercancía que produce es la educación. Por consiguiente, sus medios de producción serían los edificios, los laboratorios, los campos y demás bienes. Mientras que la fuerza de trabajo la conformarían los maestros y estudiantes. El proceso de producción consistiría en la elaboración y transmisión del conocimiento, dando la capacidad necesaria a la fuerza de trabajo del estudiante. De esta forma, el estudiante y el maestro serían considerados obreros.¹¹⁵ En palabras de Laura Castellanos, la Universidad

¹¹³ Romain Robinet, “A revolutionary group fighting against a revolutionary State: the September 23rd Communist League against the PRI-State”, p.133.

¹¹⁴ Jorge Castañeda, *La utopía desarmada*, Grupo Editorial Planeta, México D.F., p.165.

¹¹⁵ Laura Castellanos, *México armado*, México DF, Ediciones Era, 2007, p. 206.

Fábrica reconocía que la educación se había masificado en la sociedad capitalista, lo que convertía a las universidades en fábricas de reproducción cultural y económica. El estudiantado era el proletariado. La responsabilidad histórica que la tesis marxista-leninista había atribuido a los obreros explotados y despojados de los medios de producción pasaba ahora al estudiantado, que ya no era solamente su aliado, sino su propia vanguardia revolucionaria.¹¹⁶ Así, la inclusión de los grupos estudiantiles herederos de la movilización de finales de los sesenta, se vería justificada en una organización netamente comunista.

Un ejemplo interesante sobre el papel fundamental que la ideología ejerció en el interior de la organización se vio reflejado en sus mecanismos de reclutamiento. Como se explicó, la Liga estaba formada principalmente por estudiantes. La forma en que estos eran reclutados estaba estrechamente ligada al grado de conocimiento que los aspirantes dejaban ver de los principios propuestos por Marx y Lenin. Los estudiantes se reunían a discutir las tesis de distintos autores marxistas en círculos de estudio. Estas eran reuniones de cinco o seis integrantes en las que se encontraba presente algún miembro de la guerrilla bajo otra identidad. Después de una observación atenta, el guerrillero infiltrado procedía a seleccionar al prospecto que demostrara mayor conocimiento y comulgara con la causa revolucionaria.¹¹⁷

Estructura organizacional

La Liga estaba estructurada de manera jerárquica y con mandos bien definidos, pero al mismo tiempo, sus estructuras locales gozaban de cierta autonomía que les permitía llevar

¹¹⁶ Ibid, p. 206.

¹¹⁷ Romain Robinet, op. cit., p. 132.

a cabo sus tareas de forma más eficiente. La estructura organizacional de la Liga se encontraba dividida en dos ramas, una política y otra militar. La estructura organizacional de la Liga, al momento de su creación, se ilustra con claridad en la Tabla 2:

<i>Estructura Política-Militar de la Liga</i>	
<i>Estructura Política</i>	<i>Dirección</i>
Coordinadora Nacional	Ignacio Salas Obregón
Buró de dirección	Ignacio Salas Obregón
Cuerpo de servicio responsables	Ricardo “el güero”, Mara “la flaca”
<i>Estructura militar y distribución geográfica</i>	<i>Dirección</i>
Distrito Federal (Brigada Roja)	David Jiménez Sarmiento, B. Cervantes Tavera, Francisco A. Pérez, Alfonso Rojas Díaz y Arturo Rivas Jiménez
Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua (Zona Norte)	Salvador Gaytán Aguirre, Gabriel Domínguez y Eleazar Gámez
Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca (Comandos urbanos del Comité Estudiantil Revolucionario)	Paulino Peña Peña, Francisco Márquez Guzmán, José Manuel Báez Ávila y José Wenceslao José García
Jalisco, Michoacán (Zona Centro)	Salvador Alfaro Martínez
Chiapas, Oaxaca, Oaxaca, Guerrero (Brigada Emiliano Zapata)	Tomás Lizárraga Tirado, Paulino Peña y Wenceslao José García

Tabla 2. Estructura político-militar de la Liga.¹¹⁸

Se observa en el gráfico anterior que la Liga fue especialmente activa en las tres principales ciudades del país: Guadalajara, donde operaba el FER; Ciudad de México, donde los Lacandones dieron origen a la Brigada Roja; y Monterrey, donde operaba el Comité Estudiantil Revolucionario. Aunque diversos autores consideran a la Liga como una organización guerrillera urbana, los grupos rurales también fueron importantes en el interior de este movimiento. Sin embargo, uno de los principales problemas que a la postre enfrentaría la organización fue su incapacidad de tender lazos con los movimientos

¹¹⁸ Rodolfo Gamiño Muñoz, *Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México*, p. 64.

armados rurales como las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, para formar una alianza que tuviera mayor alcance y capacidad.¹¹⁹

Otra dimensión que es poco trabajada en el estudio de la insurgencia nacional es el costo económico que representa mantener una organización de estas características. En este sentido, Romain Robinet ha estimado que la Liga pudo haber necesitado entre 600 mil y 700 mil pesos por mes para financiar sus operaciones. El dinero provenía en su mayoría de expropiaciones, asaltos bancarios y secuestros.¹²⁰ Por lo tanto, para poder sostener económicamente a la organización, la Liga tuvo que mantenerse en constante flujo operativo.

Estrategia político militar

La estrategia fue otro punto fundamental que caracterizó el accionar de la Liga. Para sus ideólogos, el objetivo que la organización se había planteado sólo podía alcanzarse por medio de una guerra de carácter prolongado. De esta forma, la estrategia propuesta se encontraba dividida en cuatro grandes planos, a saber: la huelga económica, la huelga política, el combate en la calle y posteriormente la guerra de guerrillas. Estos cuatro planos no debían dar lugar a esfuerzos aislados, sino a una serie de pasos lógicos para alcanzar el ideal revolucionario. Durante los primeros meses de existencia de la Liga, Ignacio Salas Obregón escribiría el documento estratégico base llamado “Cuestiones fundamentales sobre el movimiento armado en México, Manifiesto de la Liga Comunista 23 de Septiembre”, también conocido como “Las cuestiones”. De las acciones propuestas, el buró político decidió dar prioridad a 5 objetivos: ajusticiar a policías y

¹¹⁹ Romain Robinet, op. cit., p.136.

¹²⁰ Ibid, p. 136.

militares, realizar actividades militares que apoyaran el movimiento de masas, recuperar y conseguir armas, hacer expropiaciones materiales y monetarias, y exigir la liberación de presos políticos a través de secuestros.¹²¹

En primer lugar, la huelga económica era mucho más que una acción de orden sindical. Desde la perspectiva estratégica de la Liga, la huelga económica representaría el paso a la movilización política, la base para el desarrollo de la lucha armada y el prelude de la guerra civil revolucionaria. El objetivo era paralizar económicamente la producción total o parcial de las empresas e industrias. La organización consideraba que a partir de esa experiencia, las bases sociales formarían organizaciones amplias que reforzarían la lucha. En segundo término, era claro que la huelga económica sería sucedida por la huelga política, que era considerada un estadio superior que debían alcanzar los obreros movilizados después de haber resistido la ofensiva burguesa. El proletariado pasaría de la fase de las huelgas a la implementación de procesos de agitación, propaganda, hostigamiento y resistencia armada, es decir, un conjunto de tácticas favorables para el desarrollo de la guerrilla. Por último, el combate en la calle consistiría en promover la agitación, la propaganda y el hostigamiento. Se contemplaba además el desarrollo de técnicas ofensivas y defensivas como mítines relámpago, la repartición de propaganda y la ampliación del hostigamiento más allá del rubro laboral.¹²²

La consigna era clara, el movimiento no debía reducirse a una mera expresión armada mediante el desarrollo militar de la organización. Para la Liga era importante el despliegue de tareas de educación y organización política para homogeneizar el método de lucha y evitar acciones con tendencia meramente terrorista. La movilización política y

¹²¹ Véase, Laura Castellanos, *México armado*, México DF, Ediciones Era, 2007, p. 208.

¹²² Rodolfo Gamiño Muñoz, *op. cit.*, p. 63.

el combate en la calle eran una estrategia que, según la Liga, debía ser trasladada al campo para ampliar los brazos rurales, efectuar invasiones de ejidos y, de esta manera también, recuperar y obtener tierras.

Al establecer una relación entre la propuesta ideológica y la estrategia del movimiento, podemos observar la influencia de diversos elementos de la teoría revolucionaria leninista, así como de lecciones derivadas de la revolución rusa, como el uso de revueltas, manifestaciones, combate en la calle y el desarrollo de bases para la creación de un ejército revolucionario.

El objetivo era desarrollar actividades militares que dieran soporte al movimiento de masas. Además de las tácticas propuestas, la Liga abrazó acciones como el asesinato de miembros prominentes del ejército, policías, líderes sindicales, o unidades de los cuerpos de represión, la recuperación o expropiación de dinero, armas, municiones, papel, máquinas de escribir, mimeógrafos e instrumental quirúrgico. Todo esto encaminado a potenciar el desarrollo de la lucha de clases y de minar la fuerza del enemigo.¹²³ La Liga ensanchó la fórmula de hostigamiento, promovió la eliminación de fuerzas económicas enemigas e impulsó la realización de secuestros a prominentes políticos y miembros de la élite económica e industrial con un doble objetivo: ampliar los fondos económicos y negociar con el Estado la liberación de presos políticos.¹²⁴

Con el objetivo de observar el despliegue e impacto desigual de la Liga en diferentes espacios y tiempos, Rodolfo Gamiño propone cuatro etapas para entender su desarrollo: la gestación, la rectificación, la fragmentación y el exterminio. Sin embargo, es importante advertir que al dividir el análisis en periodos de tiempo, buscaremos

¹²³ Ibid, p. 65.

¹²⁴ Ibid, p. 65.

analizar hasta qué punto la Liga representaba una amenaza real al orden público y a las instituciones del régimen.

Etapas de la Liga

En primer lugar identificamos la etapa de gestación. Las estrategias políticas y militares de la organización muestran que a nueve meses de haberse creado canalizó su energía y recursos al combate en la calle (asaltos, secuestros, hostigamiento, reuniones y propaganda). En esta etapa, la Liga vivió un proceso de expansión que parecía prometedor para sus integrantes. En Guadalajara, encabezó acciones de propaganda y agitación en las escuelas, además de promover la creación de comités de lucha clandestinos entre los barrios y los obreros. En dicha ciudad, la Liga llegó a tener la capacidad de aglutinar cien brigadas (de entre diez y quince integrantes) para implementar una campaña de “despistolización” en la cual se recuperó por la fuerza las armas de decenas de policías. En Sinaloa, el grupo conocido como los Enfermos incrementó rápidamente su presencia en escuelas y entre los obreros y jornaleros de la zona. Sus enfrentamientos eran contra la izquierda que condenaba sus acciones. Personajes como Liberato Terán (líder de la Juventud Comunista), Heberto Castillo y Carlos Guevara Reynaga (Jefe del Departamento de Extensión Universitaria) fueron agredidos en diversos encuentros.¹²⁵

La primera acción de notoria visibilidad auspiciada por la Liga fue el secuestro del prominente empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.¹²⁶ Este hecho, uno de los más icónicos perpetrados por la organización, tuvo lugar en Monterrey el 17 de septiembre de

¹²⁵ Laura Castellanos, op. cit., p. 212.

¹²⁶ Fundador de Cervecería Cuauhtémoc, Aceros Alfa, Hylsa, Cartón Titán y de la institución educativa Tecnológico de Monterrey.

1973 y tenía por objetivo captar la atención de la prensa. Sin embargo, el empresario fue asesinado durante el intento de secuestro. La indignación de la cúpula empresarial regiomontana señaló al presidente Luis Echeverría como el responsable directo. En el entierro del empresario, Ricardo Margáin Zozaya, presidente del Consejo Consultivo del Grupo Monterrey, declaró: “Sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad; cuando el Estado deja de mantener el orden público; cuando no tan sólo se deja que tengan libre causa las más negativas ideologías, sino que además se permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte”.¹²⁷

Esta situación representó una humillación pública para la figura del presidente Echeverría y elevó el costo político de este suceso de manera exponencial. A partir de ese momento, la administración de Echeverría no volvería a negociar ninguno de los futuros secuestros, además, la policía representaría una fuerza completamente exterminadora para los movimientos subversivos.

Sin embargo, este golpe representó un arma de doble filo para la Liga. Por un lado, gracias a la influencia y notoriedad que tenía el empresario regio, el reflector se posó inmediatamente sobre ellos y la Liga aseguró una proyección a nivel nacional. Por otro lado, el que el golpe se haya efectuado en contra de un civil, miembro de la alta esfera económica del país, causó la indignación y condena de sectores diversos. En efecto, el descontento generado permitió al gobierno criminalizar, de ese momento en adelante, cualquier acción llevada a cabo por la Liga.

Las acciones del gobierno no lograron disuadir a la Liga. Días después del asesinato de Garza Sada, el comité regional, con sede en la ciudad de Guadalajara, se propuso el secuestro de otros dos personajes importantes de la vida pública nacional: el

¹²⁷ Ibid, p. 215.

cónsul británico Anthony Duncan Williams y el empresario Fernando Aranguren Castiello. El doble rapto fue conocido como la “Operación 29 de Agosto”, se ejecutó el 10 de octubre de 1973, y tenía como objetivo, nuevamente, tener acceso a los medios de comunicación masiva. En contraste con lo ocurrido durante el primer golpe en contra de Garza Sada, esta vez los guerrilleros dieron a conocer un pliego con demandas que el gobierno debía cumplir para la liberación de los rehenes. Las demandas que la liga solicitó para la liberación de los cautivos fueron: un pago de 2, 500, 000 pesos, difusión masiva de sus comunicados y la liberación de 51 presos políticos.¹²⁸

Tomando en cuenta el antecedente del asesinato de Garza Sada y la rígida postura del presidente Echeverría, el gobierno se negó a negociar. Aranguren fue asesinado y Duncan Williams fue liberado tan sólo cuatro días después. El plan de la Liga falló. Ningún preso político fue liberado, no obtuvieron el pago por la liberación del cónsul y sus comunicados no accedieron al grueso de la población. Ocurrió todo lo contrario, los secuestros fueron contraproducentes para el movimiento y la respuesta inmediata por parte de la sociedad fue de condena.¹²⁹

Si bien los miembros de la Liga continuaron realizando un esfuerzo importante por divulgar sus principios entre círculos diversos de estudiantes y trabajadores, la respuesta negativa de la sociedad se vio reforzada por el manejo discursivo de las autoridades. La lógica del discurso oficial consistía en orientar la percepción de la población al comenzar a hablar del “terrorismo de izquierda”. Dos días después del asesinato de Aranguren, Jesús Reyes Heróles (presidente del PRI en ese momento) viajó a Guadalajara y declaró que “mentes perversas que quieren llevar al país a la psicosis”

¹²⁸ Romain Robinet, op. cit., p. 137.

¹²⁹ Ibid, p. 137.

fueron las encargadas de perpetrar tales hechos. La condena violenta en contra de la guerrilla dio paso a que los ciudadanos creyeran que la respuesta agresiva por parte del gobierno era justificable. Esta situación sugiere, por lo tanto, que las fuerzas de contrainsurgencia consiguieron imponer su visión del conflicto en la esfera pública. De esta forma, Miguel Nazar Haro (Director asistente de la Dirección Federal de Seguridad, DFS)¹³⁰, pudo anunciar una “cacería” a lo largo del país para eliminar a estos grupos que no eran considerados organizaciones revolucionarias del proletariado, sino organizaciones criminales.¹³¹

Al discurso oficial y a la condena pública, podemos agregar los posicionamientos de otros grupos de interés en el ámbito nacional. La Iglesia católica, por ejemplo, se manifestó en reiteradas ocasiones. El episcopado, a nombre de sesenta y tres obispos y arzobispos, criticó la violencia social, misma que, para ellos, engendraba más violencia. La idea del clero era que esta ola de violencia y crimen podía conducir a un endurecimiento de las formas autoritarias del régimen que podría desembocar fácilmente en la suspensión de garantías o, en caso extremo, una férrea dictadura.¹³²

La falta de simpatía que la sociedad en general manifestó en contra de la Liga, representó un hecho fundamental. Desde el punto de vista de la contrainsurgencia, la falta de apoyo popular pudo haber ampliado los márgenes de maniobra del gobierno. De ser

¹³⁰ La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue una agencia de inteligencia del gobierno mexicano dependiente de la Secretaría de Gobernación creada durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés. Su misión era recabar información de actividades subversivas o terroristas en el territorio nacional. A lo largo de su historia fue acusada de ser un instrumento del gobierno para espiar a políticos de oposición y de llevar a cabo prácticas violatorias de los derechos humanos. En 1985 desapareció dando origen a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, misma que, en 1989, se convertiría en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Para un relato más detallado del origen, desarrollo y acción de la DFS véase: Sergio Aguayo Quezada, *La Charola*, México DF, Grijalbo, 2001.

¹³¹ *Ibid*, p. 138.

¹³² Laura Castellanos, *op. cit.*, p. 217.

así, la evidencia parecía validar la teoría: en la medida en que las fuerzas del orden logren obstaculizar o, incluso, eliminar el apoyo de la población civil hacia los rebeldes, las posibilidades de éxito para erradicar la amenaza se potencian.

El segundo gran problema que se manifestó durante esta etapa y que aquejaría a la organización por el resto de su existencia fue la independencia de los comités de zona. La división territorial de la organización y la relativa autonomía de los comités de zona representó un problema para la capacidad de hostigamiento de la Liga. Los golpes eran gestados con independencia de la dirección nacional y esto equivalía a ataques aislados de bajo impacto. Para solucionar el conflicto, la Liga llevó a cabo un número considerable de reuniones (12 en nueve meses). En estas reuniones, lejos de solucionar el problema de mando que enfrentaba la organización, se optó por continuar incorporando a las filas de la Liga a militantes diversos con concepciones distintas sobre la lucha. Esta incorporación, volvió el proceso de integración y cohesión más lento y constituyó un obstáculo para el éxito de las operaciones.

El conflicto de integración se acrecentó con los primeros secuestros perpetrados por la organización. A pesar de ser fallidos, acarrearón pugnas, desacuerdos y contradicciones. Estos problemas obligaron a la dirección nacional a reiterar sus principales propuestas políticas que se debían realizar para homogeneizar los criterios de lucha.¹³³

Además del asunto de la integración, los principales problemas que aquejaron a la organización en esta primera etapa fueron: la falta de una dirección compartida (ya que el buró político, órgano de dirigencia de la Liga, permaneció bajo el mando único de Ignacio Salas González), fallas para armonizar la lucha armada a nivel nacional, escasez

¹³³ Rodolfo Gamiño Muñoz, *op. cit.*, p. 68.

económica, falta de claridad en el diseño de planes políticos y militares, y carencias en el trabajo de educación política.¹³⁴

La segunda etapa corresponde a la rectificación. Ante los múltiples problemas que padecía la organización, la dirección nacional implementó una solución inmediata: modificar su estructura. La Liga simplificó su estructura mediante la eliminación del buró político y, en su lugar, se formó la coordinación nacional. Aunque en principio, esta medida parecía corregir el problema de la dispersión del mando dentro de la organización, a la larga también trajo problemas. En lo sucesivo y al reflexionar sobre los obstáculos de orden interno, los miembros de la Liga llegaron a la conclusión de que la centralidad del mando y la verticalidad en la toma de decisiones eran contraproducentes. Esta estructura fue la que a la postre aceleraría el proceso de fragmentación de la Liga.

La reestructuración de la Liga tuvo efectos prácticamente inmediatos. El 16 de Enero de 1974, la Liga se vio en la posibilidad de organizar un levantamiento histórico en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Fue este, el llamado “Asalto al cielo”, coordinado por Salvador Corral. Con este golpe, la Liga se propuso detener la producción y las labores agrícolas para iniciar una campaña de agitación y propaganda e iniciar el movimiento popular en las zonas rurales alrededor de la capital. Mientras tanto, otro frente tomaría el centro de la ciudad para provocar el combate en la calle, recuperar armamento y hacer expropiaciones en los bancos.

Los enfrentamientos comenzaron en diferentes puntos de la periferia culiacanense. Datos recientes señalan que los Enfermos estuvieron en la posibilidad de movilizar alrededor de 10,000 jornaleros, mismos que contaron con el apoyo de 300 estudiantes. Los Enfermos robaron una innumerable cantidad de vehículos, armas, dinero y

¹³⁴ Ibid, p. 69.

propiciaron diversos enfrentamientos con la policía local.¹³⁵ Sin embargo, el levantamiento fue controlado por las autoridades y las detenciones no se hicieron esperar. Durante 1974, las detenciones originadas por el embate policial fueron el principal problema de la Liga.

Se puede argumentar que durante la etapa de rectificación, la Liga no logró sostener un grupo armado nacional. Por un lado, la Liga careció de una conexión con la sociedad mediante la propaganda política, acciones defensivas, programas de apoyo que ofrecieran soluciones a las demandas sociales y laborales. Por otro lado, no desarrolló estrategias de renovación de su estructura una vez que sus líderes fueron capturados.¹³⁶ La rectificación no fue exitosa. Los problemas continuaron y los dirigentes de los comités de zona comenzaron a creer que la separación de la coordinación central era la decisión que se debía tomar.

La tercera etapa es la de fragmentación. En este sentido, existen diversas hipótesis sobre las causas que dieron origen al proceso de fragmentación de la Liga. Por un lado, algunas de ellas argumentan que en 1975 la Liga decretó, a través de decisiones adoptadas por su dirigencia, su disolución, pero que algún ala militarista continuó sus actividades hasta 1980. Otra línea de argumentación sostiene que la Liga ya estaba prácticamente destruida como organización y dividida en tres corrientes: la Corriente Revolucionaria, la Coordinación Obrera y el Comité Comunista Estudiantil.¹³⁷ Ambas interpretaciones parecen subestimar la capacidad que tuvo la organización para rectificar errores políticos y estratégicos. Si la expresión militar se agotó o fragmentó, no sucedió lo mismo con el planteamiento político. Muestra de ello fue la ininterrumpida edición y

¹³⁵ Romain Robinet, *op. cit.*, p. 139.

¹³⁶ Rodolfo Gamiño Muñoz, *op. cit.*, p. 74.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 74.

distribución del periódico Madera, herramienta utilizada por la Liga para la transmisión de su postura ideológica y política.

Al percibir que la línea política que le dio forma se diluía, la organización buscó en la descentralización de las direcciones zonales y de los mandos independientes la solución a sus problemas. Esta decisión política cuestiona el argumento de exterminio anteriormente aludido. Se trata de una fragmentación deliberada en términos políticos y estructurales. Los cambios buscaron salvar el funcionamiento de la organización.¹³⁸ De esta manera, la Liga se fragmentó en tres corrientes: Los Mas o Matus, la Brigada Bolchevique y la Brigada Roja. Esta última dio continuidad al proyecto impulsado por Salas Obregón, mantuvo el mayor número de integrantes y el control de los comités de zona a escala nacional.

En 1976 se impulsaron acciones militares para reforzar la presencia de la Liga en la esfera pública, particularmente labores de agitación, combate en la calle, secuestros, la edición del periódico Madera y asaltos con mediano impacto económico y político. En ese año, la Liga volvió al camino de los golpes espectaculares con los secuestros de Socorro Soberón Chávez, hija del Rector de la UNAM y Nadine Chaval, hija del ex embajador de Bélgica en México.¹³⁹ Sin embargo, la precaria situación económica y las múltiples detenciones sufridas acorralaron a la organización en la defensiva. La dirección nacional de la Liga puso entonces en marcha una serie de acciones que en el corto plazo buscaron incrementar el despliegue cuantitativo de la organización. Ello fue posible gracias a la liberación de militantes presos en diversas cárceles del país. El primer rescate se llevó a cabo en el penal de Oblatos, Guadalajara. Esta acción derivó en el rescate de

¹³⁸ Ibid, p. 76.

¹³⁹ Ibid, p. 77.

seis miembros de probada experiencia política y armada, los cuales pasaron a integrar las filas de la Brigada Roja.¹⁴⁰

Desde 1974, la Liga arrastró el desafío del alto índice de detenciones. Esta problemática se agudizó en 1976 y su impacto no pudo contrarrestarse con la liberación de presos de distintos penales. La Brigada Roja llegó a sospechar la posible infiltración de elementos policiales y militares en la organización, a partir de los cuales se pudo, quizás, filtrar información de las acciones armadas, así como de los proyectos e identidad de los dirigentes y los militantes para que la DFS procediera a su detención.¹⁴¹

Por último, identificamos la etapa de exterminio. Durante esta etapa, que va de 1977 a 1979, la Liga fue exterminada política y militarmente. Para comprender las causas de su exterminio es conveniente tomar en cuenta varios elementos. En 1977, la Liga redujo su capacidad armada, pues solamente llevó a cabo 17 asaltos, cuatro secuestros y cuatro acciones de apoyo a movimientos sociales, frente a un total de 75 detenciones o bajas de acuerdo con cifras recabadas por la Dirección Federal de Seguridad (DFS).¹⁴²

Para esta fecha, la principal práctica de la Liga continuaba siendo el rescate de militantes de diversas cárceles. Sin embargo, la incorporación de estos miembros no logró salvar a la Liga del exterminio. La evidencia apunta a que el año de 1978 fue testigo de una caída considerable de las acciones de la Liga. Se tiene registro de cuatro acciones de asalto frente a 42 detenciones por parte de la DFS. No sólo se redujo el trabajo político sino también el apoyo a la movilización obrera. La organización estaba agotada y no había margen de acción para llevar a cabo nuevas reuniones. Para el año de 1979, la capacidad militar de la Liga había desaparecido. Apenas hay registro de cinco

¹⁴⁰ Ibid, p. 77.

¹⁴¹ Ibid, p. 77.

¹⁴² Ibid, p. 80.

acciones armadas y algunos secuestros que se llevaron a cabo de forma esporádica. Las detenciones e informes policiales no suman más de diez. Las posibilidades de rectificación eran nulas, no existía una dirección nacional, no era factible que algún militante asumiera el liderazgo y propusiera una plataforma política coherente con el contexto.¹⁴³

EL RÉGIMEN Y LA SEGURIDAD INTERNA

Como el apartado anterior da cuenta, la Liga Comunista representó una amenaza importante para los principios de orden y estabilidad en los que se fundaba el régimen mexicano. Sin embargo, todavía no terminamos por identificar las características específicas del propio régimen que pudieron condicionar la respuesta contrainsurgente del gobierno para enfrentar a esta organización armada.

En este sentido, la obra de Margarita Favela sobre el sistema político mexicano y la protesta social en el s. XX, nos ofrece una herramienta útil para identificar factores específicos sobre el régimen mexicano que pudieron haber incidido de manera importante en la estrategia del gobierno. Estos factores o subsistemas (como los denomina la autora) incluyen: a) las relaciones de poder y entre niveles de gobierno, b) el sistema electoral y de partidos, c) el sistema de representación de intereses de las organizaciones de masas y, d) el sistema de seguridad pública. De esta forma, el cuarto elemento establecería la conexión entre los tres primeros y nuestro objeto de estudio.

Con fines analíticos, Favela propone, para el estudio de estos subsistemas, adoptar dos tipos ideales: un sistema democrático liberal y un sistema autoritario. Además, el hilo conductor que guía su trabajo es la medida en que las estructuras institucionales de los

¹⁴³ Ibid, p. 82.

subsistemas mencionados anteriormente facilitan u obstaculizan las oportunidades de la población para influir sobre la toma de decisiones. Sin embargo, para fines del estudio que realizo y siguiendo la lógica de mi propuesta, las estructuras institucionales, en este caso, servirán para facilitar o impedir la aplicación de determinada respuesta gubernamental al momento de enfrentar insurgencias armadas.¹⁴⁴

En primer lugar encontramos la distribución funcional del poder. Este subsistema se caracterizó por un claro predominio de la rama ejecutiva sobre la legislativa y la judicial, y por la sustitución del pacto federal por un centralismo de facto. Como señala María Amparo Casar, el poder ejecutivo tenía la capacidad de atravesar a los otros dos poderes y a los otros niveles de gobierno mediante el ejercicio de un poder con dos características fundamentales: por un lado, excedía sus facultades institucionales legales y, por otro lado, anulaba los mecanismos institucionales legales creados para compartir y contrabalancear el poder.¹⁴⁵ En este sentido, la existencia de un sistema de partidos hegemónico, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), permitía afianzar el dominio del ejecutivo federal. Además, este dominio se vio apuntalado por mecanismos como: la no reelección de los legisladores, el control presidencial sobre la nominación de candidatos de su partido a puestos de elección popular y el control presidencial sobre los puestos burocráticos.¹⁴⁶

El apartado anterior en el que enunciamos diversos acontecimientos relevantes en la vida activa de la Liga, pudimos observar que los presidentes de la República, primero Luis Echeverría y posteriormente José López Portillo, asumieron el combate a la guerrilla

¹⁴⁴ Margarita Favela, “Cambios en el sistema político y en la protesta social en México, 1946-2000: la interacción entre instituciones y la acción social”, en *Estudios Sociológicos*, 2005, Vol. 23, No. 68, p. 540.

¹⁴⁵ María Amparo Casar, “Las bases político institucionales del poder presidencial en México” en *Revista Política y Gobierno*, 1996, Vol. III, No. 1, p. 81-82. pp. 61-92.

¹⁴⁶ Margarita Favela, op. cit., p. 542.

urbana como un asunto de agenda personal. La afrenta que representó el hecho de que la Liga intentara secuestrar a familiares de los mandatarios mexicanos hizo del conflicto un asunto prioritario. El Ejecutivo Federal, se valió de diversos mecanismos, legales y no legales, para resolverlo.

En segundo lugar encontramos el sistema electoral y de partidos. En efecto, la presencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obstaculizó el funcionamiento del federalismo en México. Los gobernadores debían su cargo al poder central y consideraban al presidente su jefe político, por lo tanto, el federalismo era inoperante. Además, la existencia del PRI impidió que la diversidad de posicionamientos políticos y preferencias de los ciudadanos se vieran reflejadas en el sistema de partidos. Por otra parte, la legislación electoral imponía requisitos para el registro y permanencia de los partidos, mismos que dificultaban la participación de organizaciones partidarias alternativas a las establecidas. Esta situación se reforzó por el sistema electoral de mayoría, las prácticas electorales fraudulentas y el manejo de los partidos adyacentes al hegemónico sostenidos extraoficialmente por el gobierno.¹⁴⁷ Así, los partidos de izquierda, encabezados por el Partido Comunista Mexicano (PCM), y demás institutos políticos que intentaban mantener autonomía con respecto al PRI y sus órganos, se vieron imposibilitados para contender en las elecciones. Como observamos antes, la falta de espacios y canales de participación fue una de las razones por las que diversos grupos políticos comenzaron a identificar la falta de “vocación democrática” del régimen. En consecuencia, el carácter autoritario del régimen había propiciado, en parte, la radicalización de distintas organizaciones.

¹⁴⁷ Ibid, p. 542.

En tercer lugar, observamos el sistema de representación de intereses. Mismo que puede ser considerado en esta etapa del régimen político como corporativo. Las implicaciones del corporativismo mexicano encuentran su máxima expresión en la incorporación de organizaciones obreras, campesinas y populares a grandes confederaciones. Así, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) se convirtieron en pilares del partido oficial. La implicación de este mecanismo de agregación y cooptación de intereses tiene dos expresiones fundamentales: por un lado, implicó la subordinación de un cúmulo de organizaciones al liderazgo del partido, tanto en los asuntos políticos cuanto en sus demandas económicas;¹⁴⁸ por otro lado, dicha subordinación las transformó en organizaciones "oficiales" y dio a los líderes el carácter de representantes únicos de las clases populares. Este monopolio de la representación popular debilitaba la personalidad legal y política de las organizaciones independientes y restringía severamente las posibilidades de incidir en la toma de decisiones y procesos de negociación con las instancias patronales a las organizaciones populares no oficiales.¹⁴⁹

Por último, encontramos a las instituciones relacionadas con la seguridad pública. En este aspecto debemos señalar la paradoja que establece el mismo arreglo constitucional. Si bien la Constitución estableció las garantías individuales como piedra fundacional del Estado, también definió la seguridad pública como un poder del Estado y no como un derecho ciudadano. De esta forma, las garantías individuales se subsumieron a la necesidad de defender la seguridad pública y, para efectos prácticos, la estabilidad

¹⁴⁸ David Collier y Ruth Collier, "Inducements versus constraints: disaggregating corporatism" en *American Political Science Review*, 1979, vol. 73, pp. 967-986.

¹⁴⁹ Margarita Favela, op. cit., p. 543.

del régimen. En consecuencia, todas aquellas actividades o personas que atentaran contra el orden público eran consideradas, automáticamente, enemigas de la seguridad del Estado y, por lo tanto, criminales carentes de cualquier tipo de derecho.¹⁵⁰ Esta situación justificó en parte la campaña abierta de persecución y eliminación de organizaciones armadas que surgieron en el país desde mediados de la década de los sesenta.

Los arreglos institucionales que regulaban el accionar de las instancias encargadas de preservar la seguridad pública tenían diversas expresiones. Entre ellas, podemos encontrar el delito de disolución social. Disposición que fue aprobada en 1941 y que fue utilizada por los gobiernos posteriores para desmovilizar y reprimir diversas expresiones de protesta en el país. La disolución social se encontraba estipulada en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal y establecía la prohibición para realizar propaganda política y difusión de ideas que pudieran perturbar el orden público. La perturbación podía ser ocasionada por rebeliones, tumultos, sediciones o escándalos.¹⁵¹ El artículo fue derogado en 1970 como consecuencia de los agravios cometidos contra los estudiantes en el movimiento estudiantil de 1968. Otra expresión a destacar del entramado institucional encargado de la seguridad pública fue la organización de un aparato de seguridad que contaba tanto con instituciones que operaban de manera abierta, cuanto con instituciones que operaban de manera encubierta. Más adelante profundizaremos en el papel

¹⁵⁰ Ibid, p. 543s.

¹⁵¹ El artículo original versa así: “Comete el delito de disolución social, el extranjero o el nacional mexicano, que en forma hablada o escrita o por medio de símbolos o en cualquier otra forma, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que perturbe el orden público o afecte la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público, cuando los actos de disolución social, definidos en el párrafo anterior, tiendan a producir rebelión, tumulto, sedición o escándalo. La soberanía nacional se afecta cuando los actos de disolución social puedan poner en peligro la integridad territorial de México, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. También comete el delito de disolución social, el extranjero o el mexicano que, en cualquier forma, realice actos de cualquier naturaleza, que preparen material y moralmente la invasión del territorio nacional o el sometimiento del país a cualquier potencia extranjera”. Ver sitio web: <http://www.jurisconsulta.mx>.

fundamental que las instituciones encubiertas desempeñaron en la contención de los grupos armados.

Así, la represión y censura no sólo permearon sobre las organizaciones armadas y otras movilizaciones de índole social, sino que alcanzaron a los medios de comunicación. Mediante mecanismos de vigilancia y regulación por parte de entidades estatales, la información se distorsionó y se organizaron campañas de desprestigio contra los opositores en las que participaban columnistas, caricaturistas, agrupaciones fantasma e, incluso, diputados y senadores. Por otra parte, aquellos medios que intentaron ejercer cierto nivel de autonomía, se vieron envueltos en diversos procesos de hostigamiento. Estas organizaciones fueron objeto de constantes fiscalizaciones, intervenciones telefónicas, violación de correspondencia, obstaculización de su circulación e incluso destrucción de talleres y robo en sus instalaciones.¹⁵²

Al tomar en cuenta estos factores podemos afirmar que cualquier tipo de organización independiente, la protesta social, la inconformidad, la crítica y el desacuerdo, la diversidad de opiniones y el activismo cívico-electoral no eran, desde la perspectiva de las autoridades mexicanas, más que conspiraciones, subversiones, presiones ilegítimas o actos desestabilizadores que no debían tolerarse. La lógica era anular al adversario para preservar la paz y el orden.¹⁵³

En conclusión, propongo que las cuatro características del régimen mencionadas anteriormente se conjugaron para dotar de un carácter autoritario al régimen mexicano. Este régimen facilitó la estrategia emprendida por el gobierno para perseguir a las insurgencias mexicanas. Mientras la falta de espacios de participación política fuera de

¹⁵² Margarita Favela, op. cit., p. 544.

¹⁵³ Enrique Condés Lara, *Represión y rebelión en México (1959-1985) Vol. I*, México D.F., Porrúa, 2007, p. 112.

las estructuras articuladas bajo el PRI, la nula vocación democrática al momento de dirimir conflictos y tomar decisiones, la ausencia de opciones políticas que representaran la diversidad de intereses y la falta de legalidad en los procesos de transmisión del poder fueron, en parte, causantes de que diversos grupos adoptaran la vía armada, la concentración del poder en la figura del presidente de la república y la articulación y uso discrecional del aparato de seguridad bajo su mando fueron factores clave para facilitar la respuesta contrainsurgente del gobierno.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD INTERNA

Como referimos en líneas anteriores, la influencia de Estados Unidos en México y la región, en materia de seguridad, fue de suma importancia. Si bien la doctrina que los estadounidenses impulsaron al final de la Segunda Guerra Mundial implicaba la defensa de la región frente a un ataque externo y pretendía consolidar su papel como la nación dominante en el hemisferio abasteciendo con armamento y dinero a las naciones latinoamericanas, el panorama cambió drásticamente con la Revolución Cubana y la crisis de los misiles.¹⁵⁴

La crisis de los misiles, que tuvo lugar en octubre de 1962, tuvo un impacto significativo en la doctrina y el sistema defensivo estadounidense. Hasta ese momento, la estrategia hemisférica partía del supuesto de un ataque exterior y de la actividad de submarinos enemigos. Sin embargo, este evento, aunado a la revolución cubana y al temor de occidente por la expansión del comunismo, logró poner en el centro de la

¹⁵⁴ Ibid, p. 52.

discusión el potencial peligro de la subversión interna y la posibilidad del acceso al poder de grupos revolucionarios en los países de Latinoamérica.¹⁵⁵

En efecto, para 1975 la iniciativa estadounidense de defender al continente de la amenaza comunista ya cobraba frutos. A través del Plan Cóndor, Washington apoyó y fortaleció gobiernos dictatoriales en países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tejieron una red que permitió a su aparato de seguridad realizar operaciones transfronterizas para secuestrar, torturar, violar, encarcelar, ajusticiar y desaparecer a decenas de miles de hombres y mujeres opositores a los regímenes militares sin importar el país en que radicaran.¹⁵⁶ El apoyo que brindaron las autoridades estadounidenses a los países de América Latina cambió drásticamente. En términos del suministro de armamento, lo que antes eran buques de guerra, aviones patrulleros y cazas interceptores, fueron reemplazados por helicópteros, equipos de comunicaciones, artillería de campo, transportes blindados y aviones de apoyo.¹⁵⁷

Además, se puso especial atención en la formación de efectivos militares latinoamericanos en academias e instalaciones estadounidenses. Como veremos más adelante para el caso mexicano, a estos efectivos se les entrenaba en materias como la guerra irregular, la guerra psicológica, la estructura de organizaciones clandestinas, el control de motines, inteligencia y contrainteligencia. Un ejemplo ilustrativo de estas facilidades fue la llamada Escuela de las Américas. Esta instalación estaba ubicada en el Canal de Panamá y fue considerada como el campo de adiestramiento más importante para operaciones de contrainsurgencia en Latinoamérica. En 1964, se graduaron 16,343

¹⁵⁵ Ibid, p. 53.

¹⁵⁶ Laura Castellanos, op. cit., p. 167.

¹⁵⁷ Enrique Condés Lara, op. cit., p. 53.

efectivos latinoamericanos. Para septiembre de 1975, sumaban ya 33,147. De ellos, en octubre de 1973, 170 graduados eran jefes de gobierno, ministros, comandantes generales o directores de los departamentos de inteligencia en sus países.¹⁵⁸

Las relaciones en términos de seguridad entre México y Estados Unidos se presentaron en este contexto. En este sentido, un ejemplo lo encontramos en la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en México y el Buró Federal de Investigación (FBI) en Estados Unidos. Estas instituciones fueron creadas en 1947 y de inmediato asumieron la tarea de enfrentarse a las amenazas relacionadas con la expansión del comunismo y los grupos subversivos. Desde aquellos años fueron formados técnica e ideológicamente por su contraparte estadounidense diversos personajes que más adelante se destacarían dentro de la política mexicana como, por ejemplo, Raúl Mendiola Cerecero, Jorge Obregón Lima, y Rafael Rocha Cordero. Estos personajes estuvieron por años a cargo de los Servicios Especiales y del Servicio Secreto de la Policía de la Ciudad de México.¹⁵⁹

Sin embargo, la colaboración entre los cuerpos de seguridad de ambos países fue mucho más allá de la asesoría y la preparación. En años recientes, se reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) actuó de manera conjunta con las autoridades mexicanas para llevar a cabo todo tipo de operaciones. De esta forma, Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en la Ciudad de México desde 1956, puso en marcha el proyecto LITEMPO.¹⁶⁰ Dicho proyecto abarcaba una serie de programas operativos de apoyo a

¹⁵⁸ Ibid, p. 53.

¹⁵⁹ Ibid, p. 65.

¹⁶⁰ LITEMPO fue el nombre codificado que la CIA asignó a la red de espías de Winston Scott en México. Las letras “LI” representaban el código de la Agencia para las operaciones en nuestro país. “TEMPO” fue el término que el propio Scott asignó para denominar el programa que se basaba en una estrecha relación entre la CIA y un selecto grupo de altos funcionarios en México. LITEMPO sirvió como un canal extraoficial para el intercambio de información política selecta y sensible que cada gobierno deseaba

distintas fuerzas de seguridad civil mexicanas. Además, tenía como finalidad el intercambio de información, las operaciones conjuntas y la mejora constante de los métodos de recopilación de información interna y de las funciones de seguridad pública”.¹⁶¹ Lo realmente alarmante del proyecto LITEMPO no es sólo que el gobierno mexicano haya colaborado frecuente mente con el aparato de inteligencia estadounidense en diversas operaciones, sino que funcionarios de alto nivel en México hayan aceptado la función de informantes para llevar a cabo dichas acciones.

De acuerdo con las investigaciones de Condés Lara podemos afirmar que a través del proyecto LITEMPO se emprendieron acciones de diversa índole. Dentro de estas acciones destaca el intercambio de información confidencial. En este aspecto, las agencias de seguridad estadounidenses estacionadas en México proporcionaron constantemente información y datos que sus homólogos mexicanos difícilmente habrían podido obtener por su propia cuenta.¹⁶² Aunado a esta labor, las autoridades mexicanas también colaboraron en la captura y entrega de activistas y perseguidos políticos. Algunos ejemplos de esta situación los encontramos en los casos de Morton Sobell y de Gus Hall. En el primer caso, Morton Sobell, contratista acusado de espiar para los soviéticos, fue secuestrado en la década de los cincuenta por policías de gobernación en su departamento en la capital de la República. Sobell fue trasladado en vehículo hasta la frontera de Nuevo Laredo y fue entregado a los agentes del FBI que ahí esperaban. A este procedimiento lo llamaron desde entonces extradición extraoficial. Sobell fue condenado a 30 años de prisión. En segundo lugar tenemos el caso de Gus Hall, secretario general

obtener, el uno del otro, pero no a través de intercambios de protocolo público. Véase Jefferson Morley, “LITEMPO: Los ojos de la CIA en Tlatelolco”, en The National Security Archive, The George Washington University, 2006.

¹⁶¹ Enrique Condés Lara, op. cit., p. 66.

¹⁶² Ibid, p.66.

del Partido Comunista de Estados Unidos, que fue encontrado en Cuernavaca y llevado a la frontera de Nuevo Laredo bajo los mismos términos que el caso anterior.¹⁶³

Otra dimensión de la cooperación en materia de seguridad era el control de extranjeros y refugiados políticos. Encontramos casos emblemáticos en la figura del escritor y poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. Mismo que si bien había sido condecorado con la Orden del Águila Azteca, para la DFS no era más que un escritor de filiación comunista, líder del grupo comunista Guatemaltecos en México y miembro de la Unión Patriótica Guatemalteca, y con nexos en la embajada de la URSS en México. A este caso, se suman los de los ex presidentes guatemaltecos Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz que fueron estrechamente vigilados por las autoridades mexicanas.¹⁶⁴

También se colaboró en materia de protección a delatores extranjeros. El gobierno mexicano ayudó en diversas ocasiones a la embajada estadounidense o a la de países latinoamericanos, en la protección y cambio de identidad de colaboradores o delatores que corrían riesgos en sus países. Un caso emblemático fue el del peruano Julio Colán Castillo quien, según Voz Rebelde (órgano clandestino de difusión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR) al ser detenido delató a numerosos compañeros y organismos partidarios, facilitando con ello la represión del movimiento. En 1965 Julio Colán fue arrestado por el servicio de Seguridad Peruano; después de haber sido sometido a constantes interrogatorios, proporcionó información de gran valor. La embajada estadounidense le concedió a Colán la estadía en tierras mexicanas.¹⁶⁵

Por último, la evidencia recuperada por Condés apunta al hecho de que estas actividades se extendían aún más al grado de tener vigilancia permanente en diversas

¹⁶³ Ibid, p. 70.

¹⁶⁴ Ibid, p. 72s.

¹⁶⁵ Ibid, p. 89s.

embajadas, agencias informativas y misiones comerciales o científicas de los países socialistas. Los movimientos del personal diplomático, sus comunicaciones telefónicas, sus paseos, entrevistas, tertulias, conferencias y viajes dentro y fuera del país estuvieron monitoreados por el personal de la DFS, de la Policía Judicial Federal de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, por la estación de la CIA en México y por los Servicios Especiales de la Policía del Distrito Federal.¹⁶⁶

En conclusión, analizar el contexto internacional en el que tuvo lugar el caso que analizo en este trabajo, nos permite identificar una influencia notoria por parte de los Estados Unidos en los asuntos de seguridad en México. La Guerra Fría fue, en este sentido, un proceso que impactó de manera global a las naciones y, en concreto, a los países de América Latina. Para Washington, la amenaza que representaba el avance del comunismo y el surgimiento de grupos subversivos que buscaban trastocar los principios de orden y estabilidad en la región eran causa suficiente para incrementar su injerencia en la política interna de los países del continente. Como lo hemos visto, México no fue la excepción. En materia de seguridad, las autoridades mexicanas tuvieron que adaptarse y seguir determinados principios que la potencia vecina estableció para garantizar la estabilidad en el interior de las naciones y de las mismas relaciones de índole económica y política entre Estados Unidos y sus contrapartes en Latinoamérica.

¹⁶⁶ Ibid, p. 90.

Doctrina nacional

Antes de 1964, los manuales militares y las estrategias antiguerrilla no existían en el país. La razón principal es que la práctica guerrillera no había sido un rasgo común entre los movimientos de resistencia de la década de los sesenta. A partir de la administración de Adolfo López Mateos (1958-1964) las fuerzas armadas participaron incesantemente en la contención de diversos estallidos sociales. A pesar de que los militares tuvieron éxito en suprimir la desobediencia civil, el gobierno mexicano era consciente de que la doctrina de seguridad nacional requería de un proceso de modernización.

En líneas anteriores identificamos la lógica que llevó a Estados Unidos a repensar los temas de seguridad en el continente. En plena Guerra Fría, Washington empujó a los países de Latinoamérica a abrazar la doctrina de la defensa interna contra movimientos armados o subversivos. Así, desde principios de los setenta Estados Unidos empujó y asignó recursos a lo que algunos han llamado la estrategia de “vietnamización” de América Latina. En dicha estrategia, los ejércitos nacionales fueron identificados como los principales responsables para combatir a grupos guerrilleros rurales o urbanos. En la lógica de esta estrategia, las corporaciones policiacas constituirían la primera línea de fuego contra la subversión armada o no armada y los militares la segunda línea ante situaciones inmanejables. Si bien Estados Unidos se abstendría, en principio, de intervenir, no se descartaba la posibilidad de la invasión directa en casos de emergencia.¹⁶⁷ Es importante tener en cuenta que durante este periodo, y a diferencia de lo que ocurrió en los demás países de América Latina, México guardó cierta distancia con respecto a los Estados Unidos. Aunque el apoyo militar estadounidense siempre ha estado

¹⁶⁷ José Luis Piñeyro, op. cit., p. 77s.

disponible para el gobierno mexicano, los sucesivos mandatarios se resistieron a la posibilidad de recibir ayuda militar estadounidense a gran escala. El gobierno mexicano no recibió grandes préstamos, donaciones o ventas de equipo castrense pesado o ligero, terrestre, naval o aéreo, así como el entrenamiento masivo de soldados.

Sin embargo, hay elementos que nos llevan a pensar que el gobierno mexicano eligió cuidadosamente sus opciones. Prueba de esto es que el Estado mexicano compró armamento a los Estados Unidos. Entre el armamento adquirido por las autoridades mexicanas podemos mencionar las metralletas Browning, los rifles M2, granadas, municiones y sesenta diferentes tipos de vehículos para sostener combate. En 1962 el ejército compró 2113 vehículos a los Estados Unidos, empleados para labores de infantería y artillería. A esta compra se agregaron 60 cañones Swiss-Spaniard 20mm para ser instalados en aviones de combate. Además, la adquisición de armamento no fue la única respuesta del gobierno mexicano al desafío de la práctica guerrillera. También, las fuerzas armadas desarrollaron un plan de acción social que tenía por objetivo estrechar las relaciones cívico militares y captar el apoyo que los campesinos le brindaban a la guerrilla.¹⁶⁸

Como se señaló antes, el ataque fallido al cuartel de Madera representó el inicio de los movimientos guerrilleros contemporáneos en México. La primera respuesta que el Estado mexicano consideró fue de naturaleza militar. Durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, la presidencia puso especial empeño en la profesionalización del ejército y el reforzamiento de la doctrina de seguridad nacional del país. En la primera parte de su administración, Díaz Ordaz mandó a 306 elementos del ejército a academias

¹⁶⁸ Jorge Luis Sierra Guzmán, “Armed forces and counterinsurgency: Origins of the Dirty War”, en Fernando Herrera Calderón y Adela Cedillo (eds.) *Challenging Authoritarianism in Mexico: Revolutionary struggles and the Dirty War 1964-1982*, Nueva York, Routledge, 2012, p. 185.

militares en Estados Unidos, solicitando, específicamente, que las tácticas de contraguerrilla fueran parte esencial del entrenamiento.¹⁶⁹

Además, en los primeros meses de 1965, el ejército mexicano incrementó su número de fuerzas en tierra, creando ocho batallones de infantería y mandando 12 mil soldados y 700 tropas navales a los primeros ejercicios conjuntos en el Istmo de Tehuantepec. Los ejercicios incluían entrenamiento de tropas para la protección de instalaciones vitales, combate contra elementos subversivos, sabotajes, disturbios civiles, movimientos obreros y campesinos, grupos armados, monitoreo de fronteras y combate al tráfico de drogas.

Respuesta militar y guerra de baja intensidad

La proliferación de guerrillas urbanas durante la década de los setenta convenció a Díaz Ordaz de la necesidad de crear unidades de seguridad paramilitares que ayudaran al control de manifestaciones y expresiones de descontento. Esta fue la lógica que llevó a la creación del Batallón Olimpia, mismo que es recordado por las acciones de represión llevadas a cabo la jornada del 2 de octubre de 1968.

Asimismo, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, creía en la necesidad de crear un grupo de acción contraterrorista que protegiera el sistema de transporte público de la ciudad, las líneas de electricidad y los sistemas de drenaje. De acuerdo con Sierra Guzmán, cerca de 2000 jóvenes y delincuentes fueron reclutados de los alrededores de la Ciudad de México para formar el grupo paramilitar llamado los Halcones.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ibid, p. 187.

¹⁷⁰ Ibid, p. 188.

Tenientes y capitanes de las fuerzas armadas usaron el conocimiento adquirido en los cursos sobre técnicas de contrainsurgencia que tomaron en Estados Unidos, Japón y Francia para entrenar a los Halcones. El grupo estaba dividido en cuatro subgrupos: los charros, los halcones, los acuario y los Pancho Villa. El 10 de Junio de 1971, los Halcones se presentaron en una marcha armados con palos y armas semi automáticas. Al enfrentarse a estudiantes que se manifestaban en pro del movimiento estudiantil dieron lugar a uno de los episodios más emblemáticos de la “guerra sucia” en México: el halconazo.

A raíz de estos sucesos, las fuerzas armadas adoptaron la llamada “guerra de baja intensidad”. De acuerdo con el Pentágono, esta estrategia de contrainsurgencia se define como “medidas paramilitares, políticas, económicas, psicológicas que se necesitan implementar para derrotar una subversión”.¹⁷¹ La estrategia de contrainsurgencia del gobierno federal enfrentó el desafío de dos organizaciones guerrilleras en el estado de Guerrero: la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres. Bajo este contexto, el estado de Guerrero fue el escenario perfecto para poner en práctica la nueva doctrina. En mayo de 1971, la prensa local reportó la movilización de tropas en dos zonas de la Sierra Madre Occidental: Xochipala y Atoyac de Álvarez. Tres importantes maniobras se implementaron durante estos operativos. La primera buscó saturar el estado de tropas. Esta acción implicó el despliegue de 10 mil soldados que rodearon las zonas montañosas donde presumiblemente operaban las organizaciones guerrilleras. De junio de 1972 a septiembre de 1974, las brigadas del Partido de los Pobres orquestaron una serie de emboscadas contra las fuerzas armadas. Durante estas acciones, las tropas

¹⁷¹ Ibid, p. 188.

militares experimentaron 150 bajas, mientras que ningún combatiente de la guerrilla fue muerto o atrapado.¹⁷²

La segunda maniobra incluyó una campaña de contrainsurgencia psicológica. Miles de panfletos fueron distribuidos con las fotografías de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, acompañados de la siguiente leyenda: “estos son criminales, bandidos, roban mujeres y propiedades, repórtelos en caso de verlos, estos hombres ponen en riesgo el bienestar de los suyos”. La tercera consistió en una campaña de trabajo social. Misma que fue desarrollada con la intención de ganarse el apoyo de las comunidades locales. Mientras los militares recorrían las montañas en busca de los guerrilleros, otros contingentes distribuían comida, ropa y medicina en las localidades aledañas.¹⁷³

Otros ejemplos de campañas emprendidas en el estado de Guerrero fueron la Operación Amistad y la Operación Telaraña. La Operación Amistad fue ejecutada entre el 25 de julio y el 13 de agosto de 1970 en las localidades de Ilatenco, Tlaxcalitlahuaca, Tierra Colorada, Pazcala, Colombia, Atenco y Colón. De acuerdo con documentación militar, los soldados torturaron, violaron, mataron y desaparecieron campesinos de estas zonas. En respuesta a estas acciones, la guerrilla comenzó a secuestrar prestamistas, empresarios y caciques locales por todo el estado de Guerrero. El 13 de mayo de 1971, la fuerza aérea comenzó la campaña conocida con el nombre de “Operación Telaraña”, en la cual, la Fuerza Aérea bombardeó diversas comunidades consideradas bastiones de Genaro Vázquez y también aquellas áreas donde se presumía, se escondía la guerrilla.¹⁷⁴

Para 1972, las habilidades y tácticas de contrainsurgencia del ejército habían mejorado como parte del Plan de Defensa Nacional 2 (DN2). El plan fue diseñado para

¹⁷² Ibid, p. 190.

¹⁷³ Ibid, p. 190.

¹⁷⁴ Ibid, p. 191.

enfrentar amenazas a la seguridad nacional y establecía el carácter preventivo de la mayoría de las acciones militares contra la subversión armada o, en general, de los diversos disturbios civiles. Esta previsión pretendía evitar que la guerrilla rural o urbana de los sesenta y setenta superase el ámbito regional y que el movimiento estudiantil de 1968 se irradiara al conjunto de la sociedad mexicana o, al menos, en centros urbanos estratégicos como la capital, Guadalajara y Monterrey.¹⁷⁵

El Plan DN2 parte de tres hipótesis de guerra. Primero, existe un reducido número de personal, que actualmente alcanza una cifra de casi 240 mil efectivos militares, frente a una población civil de más de 100 millones de habitantes por lo que la estrategia adquiere un valor fundamental. Segundo, la amplitud del territorio, es decir, cerca de dos millones de kilómetros cuadrados donde prevalecen miles de pequeñas comunidades rurales y un amplio terreno montañoso, es propicio para la guerra de guerrillas. Tercero, dada la magnitud territorial y poblacional, las fuerzas armadas se ven imposibilitadas para actuar simultáneamente en dos o más frentes de guerra internos.¹⁷⁶

Las campañas militares comenzaron a usar, con mayor frecuencia, aviones y helicópteros con la finalidad de movilizar y desplegar tropas, armas y equipo hacia las montañas. El ejército comenzó a ganar progresivamente mayor terreno conforme se fue enfrentando a la guerrilla, situación que suscitó el arrinconamiento de la misma. Para ese momento, cerca de 24 mil soldados, un tercio del total del ejército, se encontraban apostados en Guerrero.¹⁷⁷

¹⁷⁵ José Luis Piñeyro, *op. cit.*, p. 80.

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 80.

¹⁷⁷ Jorge Luis Sierra Guzman, "Armed forces and counterinsurgency: Origins of the Dirty War", p. 191.

Contrainsurgencia urbana

El desafío de la guerrilla urbana siguió al aniquilamiento de la guerrilla rural en el estado de Guerrero. Más de 30 organizaciones armadas emergieron en las grandes ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). El rasgo que distinguía a este tipo de guerrillas era su carácter militarista, es decir, una clara inclinación a favor de la violencia. La guerrilla urbana trabajó en diferentes puntos del país. Dividieron el territorio en pequeñas células independientes tanto por razones de seguridad, cuanto para prevenir que los líderes fueran aprehendidos. Aunque el número de organizaciones era considerable, solamente la Liga y las Fuerzas de Liberación Nacional fueron consideradas amenazas reales por parte del gobierno y los líderes de la contrainsurgencia.¹⁷⁸

El gobierno utilizó a la policía y a los agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para erradicar a la guerrilla urbana, aunque ambas corporaciones carecían del entrenamiento adecuado. Debido a esta situación, las fuerzas armadas se vieron en la necesidad de crear unidades especiales de contrainsurgencia que se adecuaran al combate en la ciudad. Además de la DFS, las siguientes dependencias también trabajaron en el desmantelamiento de la Liga: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la División de Investigación para la Prevención del Delito y la Segunda Sección de Inteligencia Militar.

Desde su creación en 1973, la Liga fue artífice de diversas operaciones. Durante su primer año, la Liga ejecutó secuestros y diversos operativos en contra de los “símbolos del capitalismo”. Como se mencionó antes, el 17 de septiembre de 1974, un comando de la Liga asesinó al empresario Eugenio Garza Sada. Un mes después, una brigada de la organización secuestró al magnate Fernando Aranguren y al cónsul británico Anthony

¹⁷⁸ Ibid, p.192.

Duncan Williams. La presidencia de Echeverría terminó debilitada por su incapacidad para erradicar a estos movimientos.

En 1976, el turno correspondía al presidente José López Portillo. En un inicio, la campaña de contrainsurgencia que impulsó la nueva administración fue prácticamente la misma. Sin embargo, esta situación cambió cuando la Liga intentó secuestrar a su hermana. Aunque la hermana de López Portillo escapó ilesa del intento de secuestro, el presidente tomó esta acción como una afrenta personal e intensificó la cacería de las guerrillas en el país. La principal consigna fue erradicar a la Liga.¹⁷⁹

La Brigada Blanca

En el verano de 1976, Miguel Nazar Haro se propuso seleccionar a elementos de siete corporaciones policiaco-militares para crear la Brigada Especial Antiguerrillas (BEA) que tendría como tarea exterminar a los movimientos armados en el país, principalmente, a la Liga. A partir del 7 de junio de 1976, alrededor de doscientos elementos del ejército mexicano, Dirección Federal de Seguridad, Procuraduría Federal de la República, Procuraduría del Distrito Federal, Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y de la Procuraduría General del Estado de México, fueron seleccionados para formar la BEA con sede en el Campo Militar Número 1. Los agentes seleccionados decidieron elegir su nombre y se autodenominaron Brigada Blanca, como contraparte a la Brigada Roja de la Liga.¹⁸⁰

Una vez que un agente se integraba a las filas de la Brigada Blanca, como parte de su entrenamiento inicial, era enviado a países en los que existían movimientos

¹⁷⁹ Ibid, p. 193.

¹⁸⁰ Laura Castellanos, op. cit., p. 267.

guerrilleros activos. De este modo, los elementos de la Brigada Blanca fueron enviados a Irlanda, Líbano y a otros países de Sudamérica. De acuerdo con algunos autores, a pesar de la efectividad del grupo en el combate a las subversiones, el número de integrantes no rebasó los 162. Como parte del entrenamiento, el agente debía aprender el “Plan de Operaciones No. Uno Rastreo” el cual contenía un apartado destinado específicamente al combate de la Liga titulado: Campaña de Orientación al Público en Contra de la Liga Comunista 23 de septiembre. La brigada operaba de la siguiente manera: los agentes trabajaban en pequeñas unidades y vestidos de civil, cargaban una diversidad de armas y tenían la consigna de usar cualquier medio para obtener información sobre la guerrilla. Una vez que se detenía a un presunto implicado en la guerrilla, estos eran detenidos, interrogados y torturados. Después de este proceso los agentes decidían si el detenido era procesado o no. El Campo Militar Número 1 servía como base de la Brigada Blanca y fue el lugar donde diversos revolucionarios fueron torturados. Los agentes de la Brigada tenían la facultad de decidir si enviaban a los reclusos a una prisión regular o no. De acuerdo con Sierra Guzmán, algunos de los individuos retenidos fueron ejecutados y sus cadáveres fueron arrojados a la calle como mensaje a otros miembros de la guerrilla. Como ocurrió en otros países, en México también llegó a suscitarse el fenómeno de los “vuelos de la muerte”, que consistían en transportar a los militantes a bases cerca de la costa, donde se les ponía en aviones militares para después ser arrojados al océano.¹⁸¹

El uso de estos métodos brutales –e ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario- permitió a la Brigada Blanca triunfar y erradicar a la Liga en un periodo de 7 años. Se estima que los costos de esta campaña de contrainsurgencia superaron las 1000 muertes y desapariciones. A este estimado habría que agregar, desde

¹⁸¹ Jorge Luis Sierra Guzmán, “Armed forces and counterinsurgency: Origins of the Dirty War”, p. 194.

luego, un sin número de violaciones y abusos a los derechos humanos. Una conclusión interesante que podemos extraer de la respuesta del gobierno a este desafío es que si bien la campaña de contrainsurgencia consiguió en el corto plazo apagar el conflicto interno, no logró establecer condiciones duraderas para el mantenimiento de la paz. La evidencia apunta a que la guerrilla no fue eliminada por completo. Los cuadros que sobrevivieron al embate del gobierno trabajaron en la clandestinidad durante los ochentas y ofrecieron una de las bases de la guerrilla zapatista a principios de los noventa.

La Brigada Blanca fue el principal grupo paramilitar de la época, pero no fue el único. En esta lucha emergieron otras organizaciones paramilitares que se formaron con auspicios de gobiernos locales y federal. Por ejemplo, en el norte del país operó el grupo denominado “Las Chamarras Azules”, patrocinados por empresarios de Monterrey para su protección. En el Estado de México, surgió el organismo policial llamado Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (BARAPEM), señalado como el responsable del asesinato-desaparición de varios militantes de la Liga que realizaban labores de agitación y de educación política en las zonas industriales de Naucalpan y Vallejo. Mientras que en Jalisco, operó el grupo denominado Federación Mexicana Anticomunista (FEMACO). No es fortuito que el nacimiento de estas organizaciones fuera en entidades donde las acciones de la Liga habían sido importantes. Estos cuerpos paramilitares llevaron a cabo una forma de combate directo que incluyó por igual la detención y el allanamiento sin orden judicial, la tortura, las cárceles clandestinas, la ejecución, la desaparición forzada y el encarcelamiento. Además, practicaron la infiltración en el seno de los movimientos armados tal y como lo hicieron algunos agentes de las corporaciones de inteligencia

gubernamental.¹⁸² Igualmente preocupante fue el hecho de que las fuerzas represivas estatales y paramilitares gozaran de facultades extralegales e “invisibilidad” de sus acciones.

Otras estrategias implementadas por las fuerzas del orden durante 1973-74 buscaron evidenciar, previa táctica de infiltración e inteligencia, que la estructura operativa de la Liga no funcionaba. Esta acción generó una gran incertidumbre y desconfianza en el interior de la organización, dada la existencia de posibles informantes policiales. Además, fomentó desacuerdos políticos y propició severas confrontaciones ideológicas en el interior de la Liga. Estos factores contribuyeron a que la organización se fragmentara. El punto de quiebre fue notable: las reuniones nacionales se redujeron, disminuyeron los apoyos a las movilizaciones obreras y estudiantiles, los secuestros - como método político, militar y económico- fracasaron y se incrementaron, también, las detenciones.¹⁸³ En efecto, en el corto plazo la estrategia de contrainsurgencia parecía brindar frutos. Previo a su muerte en 1974, Ignacio Salas Obregón urgió a los cuadros directivos de la Liga a llevar a cabo una “purga general”. Bajo este llamado se llevaron a cabo expulsiones, deslindes, rompimientos e, incluso, ejecuciones internas.¹⁸⁴

CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Una de las preguntas que se plantean diversos autores que trabajan el tema de los movimientos armados en México es ¿qué tan grave fue para la seguridad nacional la amenaza de la guerrilla mexicana? Y más concretamente, la Liga. A esto, Sergio Aguayo responde: La Liga Comunista tenía una estructura bastante pobre y sus 347 combatientes

¹⁸² Rodolfo Gamiño Muñoz, op. cit., p. 89.

¹⁸³ Ibid, p. 92.

¹⁸⁴ Laura Castellanos, op. cit., p. 221.

no estaban capacitados de manera uniforme, ni ideológica, ni militarmente. Los únicos que tenían cierto arraigo social y territorial eran aquellos que venían de los barrios de Guadalajara, quienes estaban dispuestos al enfrentamiento pero que carecían de una preparación política sólida. Puede argumentarse que la guerrilla mexicana tenía una capacidad limitada y en regiones muy específicas. El autor concibe a la guerrilla urbana como un mero factor irritante, no una amenaza real a la seguridad nacional. Según Aguayo, del peligro potencial que representó la guerrilla se derivó la percepción generalizada de que la Liga constituía una gran amenaza. Esta visión no sólo fue profundamente compartida por los servicios de inteligencia, sino proyectado por estos y otros actores en el entorno social.¹⁸⁵

El argumento de Aguayo ahonda al explicar que la peligrosidad de los grupos armados era evaluada, más que por factores externos, por los intereses políticos y económicos de los altos mandos de la DFS. A los ojos de estos actores, la amenaza que representaba la Liga los dotaba de estatus ante el presidente, les generaba mayor presupuesto económico y, por ende, les servía como trampolín político. Estos intereses motivaron a la DFS a distorsionar deliberadamente la información y el análisis sobre la insurgencia.¹⁸⁶

Estratégicamente la DFS, dejó florecer y prolongó artificialmente la rebelión para justificar su existencia e incrementar su fuerza y prestigio como el principal servicio de inteligencia civil. Como otros organismos de seguridad, la DFS derivó beneficios de este enemigo y tendió quizás a exagerar su poder, esto con el afán de apuntalar su propia influencia y poder.

¹⁸⁵ Véase, Sergio Aguayo Quezada, *La Charola*, México DF, Grijalbo, 2001.

¹⁸⁶ *Ibid.*

Por otra parte, Gamiño Muñoz nos ofrece una apreciación distinta acerca de la importancia de este fenómeno en la vida pública nacional. Coincide con Aguayo en que el Estado pudo haber eliminado rápidamente algunas organizaciones armadas, sobre todo aquellas que se habían debilitado por su fragmentación numérica. Sin embargo, en su opinión, es cuestionable que hayan sido exterminadas por su baja preparación política e ideológica. Además subraya que es pertinente no perder de vista que la DFS no era un organismo autónomo que definía su actuación de manera aislada del Estado. La evidencia apunta a que la DFS representaba un proyecto conjunto que incluyó un tipo de represión de baja intensidad, focalizada y semipública, diferente a la que se ejerció contra algunos movimientos estudiantiles y contra los grupos armados que emergieron en México entre 1968 y 1973.¹⁸⁷

Aunque coincido con Gamiño Muñoz y otros autores en que La Liga no llegó a amenazar la existencia del Estado mexicano, dicha organización representó un peligro para la seguridad interna. En sus primeros años de vida, la Liga hostigó constantemente a la élite económica y a las fuerzas policiales y militares. Además, la Liga retó abiertamente la política económica del Estado y no dejó de buscar nuevos reclutas y tender lazos con otras organizaciones al interior del país.¹⁸⁸ Además, ante la presencia de grupos guerrilleros, el Estado diseñó nuevos métodos represivos, mejoró el equipo armado policial e introdujo al ejército para que salvaguardara la seguridad interna.

¹⁸⁷ Rodolfo Gamiño Muñoz, *op. cit.*, p. 87.

¹⁸⁸ *Ibid.*, p. 87.

III

EZLN. LA GUERRA CONTRA EL OLVIDO

El segundo caso de análisis corresponde al levantamiento armado protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el 1 de Enero de 1994, así como la respuesta que puso en marcha el gobierno, federal y estatal, para contenerlo. El tratamiento que daremos al caso es similar al expuesto anteriormente con respecto a La Liga. Primero, identificaremos los factores determinantes en el surgimiento del movimiento. Las condiciones locales, los antecedentes y las características del movimiento nos permitirán definir la modalidad de la guerrilla que surgió en Chiapas. Segundo, resaltaremos cuestiones fundamentales del contexto nacional que, en nuestra opinión, condicionaron la respuesta del gobierno. Tercero, aludiremos a aquellos factores del contexto internacional que pudieron haber incidido en la estrategia de contrainsurgencia adoptada por el gobierno mexicano. El capítulo concluirá con un análisis más puntual de dicha estrategia.

El levantamiento del 1 de enero de 1994 sacudió la opinión pública nacional y puso de manifiesto que, al acercarse el fin de siglo, la llamada “inviabilidad de la lucha armada” no pasaba de ser un mito. Varios factores habían alimentado esta idea. En la esfera internacional, acontecimientos como la caída de los regímenes socialistas y los procesos de negociación que sostuvieron las guerrillas centroamericanas con sus gobiernos respectivos, se conjugaron con factores del contexto nacional, como la propaganda del gobierno mexicano en torno al proyecto modernizador salinista, para propagar la idea de que era prácticamente imposible el desarrollo de una fuerza político-

militar contestaria en el país.¹⁸⁹ Sin embargo, antes de lo esperado, el levantamiento zapatista en Chiapas, el resurgimiento del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y el surgimiento en 1996 del Ejército Popular Revolucionario (EPR) pusieron en evidencia los fundamentos endebles de dichas afirmaciones. Diversos grupos que se habían mantenido activos en la década de los setenta y habían permanecido en la clandestinidad durante los ochenta, encontraron, a principios de los noventa, nuevos espacios para el desarrollo de la lucha armada.

El surgimiento y la reactivación de grupos armados plantean una serie de interrogantes. Una primera pregunta se refiere a la efectividad de la estrategia de contrainsurgencia emprendida por los gobiernos priístas para erradicar a la “ola guerrillera” de los setenta. En su momento, el gobierno presumió el éxito de las campañas contrainsurgentes. Sin embargo, el estudio de los grupos armados en la década de los noventa deja ver la importancia de las organizaciones clandestinas en sus procesos de gestación. No sólo estas organizaciones venían operando desde los setenta, sino que en diversos casos, sirvieron de base para el nacimiento de nuevos movimientos armados. De ser así, se podría apuntar que la estrategia pudo parecer efectiva en el corto plazo, pero no así en el mediano y largo plazo. Algunos grupos siguieron funcionando bajo el manto de la clandestinidad y, años más tarde, volvieron a encontrar circunstancias propicias para el levantamiento armado. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización que precisamente encuentra su génesis en células clandestinas. Aunque más adelante profundizaremos en esta idea, es importante retomar el principio expuesto en el apartado teórico de este trabajo que subraya la importancia del contexto socio-

¹⁸⁹ Consuelo Sánchez, “Breve historia del EZLN”, en *Boletín de Antropología Americana*, No. 32, Julio de 1998, p. 127.

económico. Como mencionamos antes, el éxito o el fracaso de una determinada campaña contrainsurgente dependerán en buena medida de la atención que las autoridades presten al entorno socioeconómico.

La insurgencia zapatista no sólo replanteó el debate sobre la opción armada y las perspectivas de la lucha revolucionaria en México y América Latina, sino que puso en evidencia la histórica marginación, pobreza y discriminación de la que eran víctima las comunidades indígenas.

CONDICIONES ANTECEDENTES

La conformación de un grupo armado de las características del EZLN es un fenómeno ocasionado por circunstancias de diversa índole. En efecto, diversos autores se han dado a la tarea de explicar el descontento social que se acumuló en Chiapas a lo largo de los ochenta en función de la concatenación de una serie de factores. Algunos han resaltado el impasse que generó la reforma agraria en la década anterior y el empeoramiento de las condiciones de la agricultura como consecuencia de la expansión de la actividad ganadera. Otros factores a considerar son la radicalización de la protesta popular, el deterioro de la situación económica, la escalada de la violencia y la represión a raíz de la militarización del estado.¹⁹⁰ Durante décadas la estabilidad en el campo descansó en dos pilares: la reforma agraria y la participación activa del Estado en diversos aspectos de la vida rural. Esta situación se alteró con el ascenso de la ideología neoliberal y el repliegue del Estado en sectores donde anteriormente había ostentado una importante influencia; Chiapas no fue la excepción a este proceso.

¹⁹⁰ Mónica Serrano, “Violencia civil en Chiapas: los orígenes y las causas de la rebelión”, en *Foro Internacional*, Vol. 38, No. 4, Oct-Dic 1998, p. 453.

La reforma agraria y problemáticas afines

La reforma agraria no tuvo la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de la población campesina e indígena. Esta situación agravó las condiciones de marginación y pobreza extrema en las que vivía gran parte de la población. Además, favoreció la concentración de la tierra en manos de unos cuantos propietarios o “finqueros”.¹⁹¹ Un breve recuento de la evolución que ha experimentado la reforma agraria en el estado deja ver su alcance limitado. Desde finales del S. XIX, durante el gobierno de Emilio Rabasa (1891-1894), la modesta repartición de tierras iniciada por el gobernador fue interrumpida por el alza en los precios del café y del caucho.¹⁹²

Si bien durante la administración de Plutarco Elías Calles el proceso de redistribución de la tierra cobró nuevo aliento, pronto se topó con dificultades. En este caso, el Departamento de Acción Social y Asuntos Indígenas fue el encargado de la aplicación de la reforma. Aunque en principio, el desempeño de dicho departamento arrojó un saldo positivo y contribuyó a ampliar la presencia del Estado en Chiapas y al surgimiento de una burocracia indígena leal al partido en el gobierno, en el mediano plazo el costo político resultó contraproducente. El Departamento de Acción Social llevó a cabo la reforma agraria mediante invasiones armadas en grandes propiedades. De esta manera, los medios que el Estado empleó para la consecución de los objetivos de la

¹⁹¹ A principios de la década de los sesenta, el 70% de las mejores tierras del estado de Chiapas estaban en manos de los “finqueros”. Sus familias habían luchado contra el gobierno carrancista, lograron detener la Revolución en el estado y pactaron con el general Obregón la conservación de sus privilegios. Los indígenas que trabajaban en las fincas habían perdido sus tierras a lo largo del dominio colonial y con las leyes de desamortización promulgadas por los liberales en el siglo XIX. Los “finqueros” fueron los beneficiarios de este proceso de despojo y expropiación de las tierras de los indígenas. Véase Consuelo Sánchez, *op. cit.*, p. 128.

¹⁹² Mónica Serrano, *op. cit.*, pp. 453-454.

reforma potenciaron la confrontación y exacerbaron la violencia entre distintos grupos.¹⁹³ La respuesta de los terratenientes, directamente afectados por estas medidas, fue claramente violenta e incluyó desde ataques a comunidades hasta el asesinato de líderes campesinos. Al recurrir a acciones como la división de sus propiedades, la contratación de guardias privadas y el establecimiento de alianzas con los jefes militares de la región, los “finqueros” lograron su cometido y frenaron la reforma.¹⁹⁴

A los problemas ocasionados por la falta de efectividad de la reforma agraria en el estado, podemos agregar el impacto de los flujos migratorios asociados a los cambios en la producción y en la demanda de tierra. Dichos procesos impulsaron la reubicación gradual de comunidades tzeltales, choles y tojolabales hacia la zona de la selva.¹⁹⁵ Es importante mencionar que aunque el flujo de migrantes hacia la selva se había iniciado en la década de los treinta, a partir de la década de los sesenta se incrementó de manera exponencial. En efecto, indígenas tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y zoques de los valles de Ocosingo, del Norte, de los Altos, de los Llanos y de los Valles Centrales de Chiapas iniciaron un proceso de colonización de la Selva Lacandona. A la llegada de estos grupos, se sumó también el asilo de campesinos e indígenas de otros estados de la república como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y el Distrito Federal. Para 1970, la región contaba con un asentamiento estimado en más de 100 mil colonos organizados en ejidos.¹⁹⁶

No sólo los cambios en la producción y demanda de la tierra fueron causantes de la alteración de los flujos migratorios. También, conviene mencionar otras dos dinámicas

¹⁹³ Benjamin Thomas, *Chiapas. tierra rica, pueblo pobre*, México DF, Editorial Grijalbo, 1995, citado en Mónica Serrano, op. cit., p. 454.

¹⁹⁴ Ibid, p. 455.

¹⁹⁵ Ibid, p. 456.

¹⁹⁶ Consuelo Sánchez, op. cit., p. 128.

que a su paso potenciaron la migración de otros grupos. La primera corresponde a la erupción del volcán Chichonal en la primavera de 1982, que obligó a la reubicación de 11,291 personas en 16 nuevos asentamientos¹⁹⁷ y, la segunda, se refiere al conflicto en Guatemala que expulsaría a miles de refugiados que terminarían reubicándose en esta misma zona.¹⁹⁸

Como mencionamos al inicio de este apartado, la expansión de la actividad ganadera fue otra problemática que repercutió negativamente en el asunto de la tierra en Chiapas. Dicha expansión tuvo importantes consecuencias tanto de índole política cuanto de índole social. A partir de la década de los treinta, los gobiernos federal y del estado de Chiapas estimularon el desarrollo de la ganadería en la región, otorgando importantes apoyos a los “finqueros”. El modelo favorecido fue el extensivo, que consistía en la utilización de grandes extensiones de tierras dedicadas a pastizales. Sin embargo, la expansión de la ganadería en Chiapas, la cual llegó a ocupar el tercer lugar en el país por el número de reses en existencia, se realizó a un costo social y ecológico muy alto. Proliferaron las invasiones y despojos de tierras comunales, las apropiaciones de zonas de bosques y selvas, la erosión de tierras para uso agrícola, el desplazamiento de cultivos de plantación y de consumo básico. También, abundaron los desalojos y despojos de tierras a campesinos, en su mayoría indígenas.¹⁹⁹ De esta manera, la ganadería, como actividad productiva relevante para el Estado, representó una fuente de serios conflictos sociales y agrarios.

¹⁹⁷ Susana Villasana Benítez, Una propuesta para ampliar el estudio de los zoques en la región del Istmo, en "Memoria del Primer Seminario de investigación científica y tecnológica sobre el Istmo de los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, 2000.

¹⁹⁸ Mónica Serrano, op. cit., p. 456.

¹⁹⁹ Consuelo Sánchez, op. cit., 128.

Por último, podemos sumar a todo lo anterior la crisis de la agricultura en la década de los setenta y ochenta que afectó particularmente a la Selva Lacandona. En este caso, la respuesta del gobierno mostró cierta flexibilidad. Las zonas forestales deshabitadas, que eran propiedad del estado, serían empleadas para la formación de ejidos. Entre los años 1950 y 1960, la región sirvió como válvula de escape para los campesinos que pugnaban por el reparto de las tierras, mismos que venían de las comunidades del altiplano densamente pobladas. Sin embargo, estas políticas resultaron insuficientes.

En la década de los setenta, la situación continuó agravándose debido a que la región quedó marginada y excluida del Programa Nacional de Desarrollo. Dos factores podrían ayudar a explicar tal ausencia. El primer factor hace referencia a la inexistencia del tema de la agricultura en la agenda de recursos estatales prioritarios. Al parecer, la agricultura pudo haber sido relegada por otras actividades productivas como la producción de madera, la extracción de petróleo, la explotación de yacimientos minerales (uranio y aluminio), los recursos botánico-farmacéuticos y el ecoturismo, al cual el Estado tuvo acceso a través de la creación de la Reserva Integral de La Biósfera Montes Azules. El segundo factor fue de naturaleza política-electoral. El gobierno estatal pareció llegar a la conclusión de que las comunidades de colonos, inmersas en la problemática, tenían escaso valor político. Es decir, dichas comunidades no representaban diferencia alguna en las pretensiones de control político del partido dominante.²⁰⁰

Al paso del tiempo, los diversos intentos fallidos de reforma agraria se conjugaron con procesos productivos del estado que no sólo no alentaron la redistribución de la

²⁰⁰ Niels Barmayer, "The guerrilla movement as a project: An assessment of community involvement in the EZLN", en *Latin American Perspectives*, Vol. 30, No.1, Indigenous Transformations Movements in Contemporary Latin America, Jan. 2003, p. 123.

tierra, sino que pudieron haber contribuido a su concentración. De esta manera, el balance resultaría negativo. Para mediados de la década de los noventa, como apuntan diversos autores, la reforma agraria en Chiapas se podría desagregar en tres niveles: a) aunque cerca de 200 mil ejidatarios ocupan en aquella época una extensión que abarca casi los tres millones de hectáreas, sólo 40,8% de esta superficie fue considerada como tierra de buena calidad, b) el tamaño promedio de las parcelas de 45% de los ejidatarios se sitúa entre 0,1 y 4,0 hectáreas, extensión insuficiente para satisfacer las necesidades de más de un millón de personas y c) Chiapas concentraba, en ese momento, entre 27 y 30% de las demandas de tierra que aún no habían sido resueltas.²⁰¹ Frente a esta situación de parálisis en la redistribución de la tierra, el descontento entre indígenas y campesinos continuó en ascenso.

A finales de los ochenta, las presiones constantes terminarían engrosando las filas de las organizaciones campesinas, además del número y frecuencia de las ocupaciones de tierra. Esta situación había de hecho llevado al gobernador Absalón Castellanos a reactivar la reforma agraria en la agenda política estatal mediante la creación del Programa de Rehabilitación Agraria de 1984. La creación de este programa buscó, en la práctica, prevenir la radicalización de las organizaciones indígenas.²⁰² Más adelante nos referiremos a las razones que explican el fracaso de dicha iniciativa.

Las condiciones socioeconómicas y los programas gubernamentales

Aunado a los problemas generados por la redistribución de la tierra, el impacto de las actividades productivas y la migración, podemos identificar factores de diversa índole

²⁰¹ Neil Harvey, *The new agrarian movement in Mexico, 1979-1990*, Londres, Institute of Latin American Studies, 1990, citado en Mónica Serrano, op. cit., p. 457.

²⁰² Ibid, p. 457.

que se fueron encadenando para generar condiciones propicias para el surgimiento de un grupo armado. Entre estos subrayamos las deplorables condiciones socioeconómicas en las que se encontraba el estado, los conflictos étnicos, la intervención de la iglesia en las dinámicas de organización indígenas, la proliferación y posterior radicalización de las organizaciones campesinas y la campaña de represión desplegada por parte de las autoridades estatales ante las manifestaciones de descontento e inconformidad.

La información revisada al momento de iniciar la rebelión dejó ver que las condiciones socioeconómicas en las que se encontraba el grueso de la población en el estado, lejos de mitigar la situación, pudieron exacerbar el descontento. En efecto, mientras que sólo 29% de la población mexicana vivía en zonas rurales, esta cifra se elevaba al 60% en Chiapas. Algo similar ocurría en los niveles de alfabetización. Mientras que el país registraba sólo un 13% de analfabetismo, la cifra correspondiente para el caso de los chiapanecos ascendía a 31%. Además, un tercio de los hogares en Chiapas no disponían de electricidad, el 41,6 % no tenía agua potable y el 58,8% carecía de instalaciones sanitarias básicas como el drenaje. Las cifras se vuelven más alarmantes al compararlas con los datos nacionales. Para el país en su conjunto las cifras correspondientes son: el 12,5% de la población carecía de electricidad, el 20,6% de agua potable y el 36,4% de drenaje.²⁰³

Igualmente significativo resultó la concentración de los recursos y de las utilidades provenientes de los sectores productivos estatales. Aunque el estado concentraba el 21% y 47% de la producción total del país en petróleo y gas natural, el 55% de la electricidad, así como el 35% de la producción nacional de café; además de ser

²⁰³ Stephen J. Wager and Donald E. Schulz, Civil-military relations in Mexico: The Zapatista revolt and its implications”, en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 37, No.1, Spring-1995, p. 3.

el segundo mayor productor de ganado bovino y maíz del país, los beneficios de estas actividades no se veían reflejados en la economía de los chiapanecos.²⁰⁴

Además de las deficiencias estructurales como la falta de agua potable, electricidad, drenaje y caminos, los pueblos tenían grandes dificultades para obtener tierras de cultivo por parte del gobierno debido al número creciente de familias jóvenes sin títulos ejidales. Las perspectivas para la población chiapaneca se deterioraron aún más cuando en 1992 la administración de Carlos Salinas introdujo una reforma que ponía fin a la distribución de tierras.²⁰⁵ Desde su antecesor, Miguel de la Madrid, se habían iniciado una serie de medidas que provocaron el retiro o la privatización de diversas instituciones que hasta ese momento habían otorgado un apoyo valioso a las comunidades indígenas y campesinas en Chiapas. En 1989, la Corporación Forestal de Chiapas y el Ingenio Azucarero de Pujilic fueron privatizados. En ese mismo año el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera desaparecieron. El desmantelamiento del Inmecafé tendría efectos sumamente graves en Chiapas, ya que para 1988 este estado concentraba a cerca del 38% del total de los productores de café.²⁰⁶

En octubre de 1993, previo a la elección presidencial, se introdujo el Programa Nacional de Apoyos Directos al Campo (Procampo). Si bien la nueva política fue justificada en términos de mayor transparencia y de mayor eficiencia en la asignación de subsidios (por la vía de pagos directos), su ejecución favoreció a los propietarios regularizados. Para cerca de los 70 000 ejidatarios de Chiapas dedicados a la producción de maíz, el requisito de registro de las parcelas y el giro hacia los cultivos apoyados por Procampo resultarían sumamente complicados. La Secretaría de Desarrollo Social,

²⁰⁴ Ibid, p. 3.

²⁰⁵ Niels Barmayer, op. cit., p. 124.

²⁰⁶ Mónica Serrano, op. cit., p. 460.

entonces presidida por Luis Donaldo Colosio, reportó la entrega de 130 millones de pesos para un programa especial destinado al desarrollo productivo de 12 municipios chiapanecos, con prioridad en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En agosto del mismo año, Sedesol entregó 40 millones adicionales.²⁰⁷

Si bien Chiapas recibió la mayor proporción de fondos nacionales, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que buscaba mitigar los efectos negativos de los procesos de ajuste estructural y de los programas de estabilización, no logró contener la protesta social en el estado. En el periodo 1989-1991, la participación del estado en el presupuesto global de Pronasol (7.2%) permaneció por debajo de su contribución a la pobreza nacional (10%). Ni los gastos de Pronasol en Chiapas -de 130% en 1989-1990, 50% en 1990-1991, 20% en 1991-1992 y de 1% en 1992-1993- ni la aparente fortaleza de su estructura organizacional -apoyada en cerca de nueve mil comités- lograrían ofrecer una respuesta a las necesidades sociales.²⁰⁸ ¿Qué factores permiten explicar la falla del programa? En primer lugar, el diseño del Pronasol no logró garantizar que todos los recursos fueran distribuidos de acuerdo con las necesidades regionales en términos de pobreza. En segundo lugar, el programa no pudo asegurar que todos los beneficiarios pertenecieran al grupo identificado como prioritario y, por último, la distribución de recursos no respondió necesariamente a las necesidades más urgentes.²⁰⁹

²⁰⁷ Jorge Luis Sierra Guzmán, *El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México*, 2003, p. 125.

²⁰⁸ Mónica Serrano, *op. cit.*, p. 462.

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 462.

El conflicto étnico y el papel de la Iglesia

Otro problema histórico y estructural en el estado de Chiapas es el racismo. Las dinámicas racistas han estado presentes en las relaciones entre mestizos e indígenas. Tradicionalmente, los primeros han reivindicado una superioridad racial frente a los segundos. Por consiguiente, las tensiones entre estos grupos han sido especialmente agudas en aquellas regiones donde hay alta concentración de indígenas.²¹⁰ Cabe señalar que las estimaciones acerca del total de la población indígena de Chiapas varían entre 700 000 y un millón de habitantes. Esta población se encuentra dividida en nueve grupos étnicos. Cerca de 50% del total habita la zona de Los Altos y alrededor de 150 000 se localizan en la selva. Cerca de 230 000, es decir, 32%, no hablan español. Durante los ochenta, diversas identidades étnicas se activarían y se politizarían en parte como consecuencia de la incapacidad del Estado para garantizar la prosperidad económica y condiciones mínimas de orden y de seguridad a los habitantes.²¹¹

Otro factor que tuvo un peso decisivo en la organización de indígenas y campesinos se refiere al rol que desempeñó la iglesia. Los liderazgos religiosos, inmersos en los principios de la teología de la liberación, fueron una pieza clave en el engranaje que impulsó la formación del EZLN. Desde finales de la década de 1960, sacerdotes católicos y catequistas se concentraron en la conservación de las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y en el establecimiento de cooperativas locales mientras realizaban su labor misionera en la zona de la selva y de Las Cañadas. Dentro de esta labor, destaca el trabajo de Samuel Ruíz, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, que

²¹⁰ Raúl Benítez Manaut, "Seguridad nacional y transición política, 1994-2000", en *Foro Internacional*, Vol. 41, No. 4, Oct-Dic 2001, p. 977.

²¹¹ Juan Pedro Viqueira, "Los límites del mestizaje cultural en Chiapas", trabajo presentado en la conferencia "Le Mexique en France. Actualité de la Recherche en Sciences Sociales", París, 1995, citado en Mónica Serrano, op. cit., p. 463.

adoptó los principios de la teología de la liberación después de asistir a la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968. Además, la sensibilidad que desarrolló Samuel Ruíz ante la cuestión campesina se acentuó por la cercanía que tuvo con el conflicto en Centroamérica. Ruíz tenía una estrecha relación con Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, y con los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, principales promotores del diálogo y la negociación en el conflicto salvadoreño. Desde 1983 el obispo mexicano advertía que: “de pasarse el fuego de Centroamérica a México no será por cuestiones ideológicas, sino debido a las carencias y necesidades de la sociedad marginada”.²¹² Las palabras del “Tatic”, nombre con el que era conocido entre las comunidades indígenas, no pudieron ser más acertadas.

En términos generales, la estrategia de la acción pastoral de la diócesis de San Cristóbal consistió en articular lo religioso a la vida cotidiana de los indígenas, pero desde una posición de liberación que implicaba el orden social, político y humano. La acción pastoral buscó que los indígenas tomaran conciencia de su dignidad humana y del valor de su propia cultura; también, que descubrieran las causas por las que vivían en condiciones de miseria y sufrimiento, y que asumieran que éstas podían ser modificadas a través de la acción política. En este proceso, la Biblia serviría de instrumento de cambio y de lucha. Las historias de liberación de los pueblos oprimidos, contenidas en las narraciones de los evangelios, se relacionaban con las experiencias de los pueblos

²¹² Carlos Tello Díaz, *La rebelión de Las cañadas: origen y ascenso del EZLN*, Aguilar, León y Cal Editores, México, 1995, p. 103.

indígenas. En suma, con la acción pastoral se propuso aportar a los feligreses elementos para su valoración humana y su liberación individual y colectiva en la tierra.²¹³

Los preceptos que guiaron tanto a la feligresía de los altos cuanto a la de Las Cañadas, encontraron resonancia en la periferia y asentamientos dispersos de la región. En este sentido, la Diócesis de San Cristóbal tuvo éxito en la creación de una base de apoyo para las formas autónomas de representación popular.²¹⁴ Un ejemplo concreto sobre el involucramiento de la Diócesis de San Cristóbal en la organización de las comunidades indígenas fue la propuesta del Congreso Indígena. En el Primer Congreso Indígena de Chiapas, realizado en San Cristóbal en octubre de 1974, los delegados indígenas de todo el estado discutieron con seriedad el tema de la lucha por la tierra, acción que repercutió directamente en las comunidades indígenas. A partir de estas discusiones, las comunidades indígenas tomaron conciencia sobre cuestiones como los derechos laborales y los derechos de propiedad.

El Congreso fue el catalizador de un periodo de intensa politización de los campesinos y de la población indígena que llevó además a la creación de numerosas organizaciones campesinas independientes. Incluso, algunos activistas maoístas de la organización Unión del Pueblo fueron invitados por la Iglesia católica para ayudar en la organización de este congreso.²¹⁵ De esta manera podemos advertir el papel articulador que desempeñó la Iglesia católica en la conformación del EZLN. La labor de mediación entre posturas que en principio parecían difíciles de conciliar, fue una de las principales aportaciones de la Diócesis de San Cristóbal al movimiento zapatista.

²¹³ Consuelo Sánchez, *op. cit.*, p. 133.

²¹⁴ Niels Barmayer, *op. cit.*, p. 124.

²¹⁵ Mónica Serrano, *op. cit.*, p. 466.

Proliferación de organizaciones campesinas, radicalización y campaña de represión

Es posible rastrear un nexo directo entre la politización del campesinado, la proliferación de organizaciones campesinas y el surgimiento del EZLN. En este sentido, conviene mencionar a diversos activistas de izquierda que, como la Iglesia, cumplieron un papel importante en la organización de las comunidades indígenas y del campesinado.

A principios de los setenta, la región de Las Cañadas fue visitada por estudiantes y activistas de distintas partes del norte de la república que habían sobrevivido a la represión de 1968. Estos activistas intentaron impulsar la formación de un frente popular con líneas maoístas que incluyera a las "masas populares" de la periferia. Como narra Niels Barmayer, a finales de la década y principios de los ochenta, al menos tres grupos entraron en la región. De estos, fueron las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) las que sembraron la semilla que dio origen al EZLN que hoy conocemos. Podemos adelantar que, en principio, los fundadores del Ejército Zapatista se inspiraron en la ideología de las revoluciones cubana y nicaragüense, así como en diversos movimientos de liberación de América Latina y en las formas maoístas de organización popular. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que su sobrevivencia y el éxito de sus aspiraciones dependía en gran medida de su adaptación a las formas locales de organización y toma de decisiones.²¹⁶

Durante la década de los setenta, muchas comunidades de colonos se aglutinaron en torno a organizaciones para enfrentar los abusos e injusticias de los que eran víctima por parte de las autoridades gubernamentales. Además de ofrecer un canal de expresión para el descontento popular, dichas organizaciones buscaron articular los intereses comunes de las comunidades chiapanecas y promover sus demandas para la obtención de apoyo por parte del gobierno. Es importante señalar que estos grupos no buscaron en

²¹⁶ Niels Barmayer, op. cit., p. 124.

ningún momento desestabilizar al gobierno existente. La consigna era obtener por medio de la presión política fondos para el desarrollo regional, créditos y recursos para la producción agrícola y, lo principal, títulos ejidatarios. Con este propósito surgió la organización sombrilla Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU).²¹⁷

Por su parte, Política Popular (PP), organización maoísta que comenzó a adquirir fuerza a finales de los setenta, emprendió una campaña que buscó la reorganización de los cuadros y del incipiente liderazgo desarrollado bajo el paraguas del Congreso Indígena de 1974. La adaptación de las comunidades indígenas a la presencia de estos activistas fue un proceso que tomó algún tiempo e incluso trajo consigo expulsiones y confrontaciones. Finalmente cristalizó hacia 1979 mediante la creación de la organización Unión de Ejidos Quiptic.²¹⁸ La nueva alianza desempeñaría un papel fundamental en un periodo de intensa organización campesina y de participación política bajo el amparo de la Unión de Uniones.²¹⁹

A estas organizaciones se unirían otras dos de especial relevancia a principios de los ochenta: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). La OCEZ se constituyó en 1982 por comunidades tzotziles de Venustiano Carranza y de los Altos. Por su parte, la CIOAC, ligada al Partido Comunista Mexicano, tenía presencia en las regiones de la Selva, Fronteriza y del Norte. Ambas organizaciones campesinas fueron muy activas en la lucha por los derechos laborales y agrarios de los peones acasillados. Estas organizaciones

²¹⁷ Ibid, p. 125.

²¹⁸ Mónica Serrano, op. cit., p. 466.

²¹⁹ Ésta fue la primera organización campesina independiente del estado con altos índices de representación: ciento ochenta comunidades de once municipios. Véase Consuelo Sánchez, op. cit., p. 130.

optaron por la lucha agraria a través de la toma de tierras y fueron impulsadas en buena medida por la respuesta negativa de las autoridades estatales para atender los reclamos laborales de sus integrantes.²²⁰ Los métodos de las dos organizaciones fueron también similares y, con frecuencia, ambas recurrieron a la resistencia civil y a la confrontación directa con las autoridades estatales.²²¹

Para mediados de los setenta otras organizaciones, como Alianza Campesina 10 de Abril, se inclinarían de igual manera a favor de las movilizaciones de masas y las invasiones de tierras, cuestión que aceleró la radicalización de estos grupos. La respuesta recurrente del gobierno chiapaneco, controlar a la disidencia por la vía de la represión, no se hizo esperar. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta del gobierno estatal trajo aparejada una brutal campaña de represión. Absalón Castellanos, entonces gobernador del estado, pretendió acallar las demandas populares por medio de la represión contra los dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas independientes y contra la población que demandaba tierras.

Como comenta Serrano, las violaciones a los derechos humanos crecieron en proporción directa a las medidas represivas que el gobernador Castellanos desplegó para mantener el control político.²²² Aunque muchas de estas políticas pronto se convirtieron en blanco de la crítica de organizaciones de derechos humanos, la presión ejercida por dichas organizaciones no fue suficiente para detener la ola de asesinatos cometidos contra líderes campesinos a lo largo de estos años. Por el contrario, en la siguiente administración, encabezada por Patrocinio González, fueron incluso formuladas nuevas disposiciones legales que criminalizaron las movilizaciones masivas y la toma de

²²⁰ Ibid, p. 130-131.

²²¹ Carlos Tello Díaz, op. cit., p. 84.

²²² Mónica Serrano, op. cit., p. 471.

edificios públicos. En términos de Consuelo Sánchez, con el gobierno de Patrocinio González la represión contra la población inconforme se pretendió legalizar con reformas al Código Penal de Chiapas, mismas que fueron aprobadas por el Congreso local. Con estas reformas, acciones de manifestación y protesta fueron tipificadas como motín, sedición, asonada y daño al patrimonio estatal. En algunos casos, incluso, los cargos podían llevar a condenas hasta de cuatro años en prisión.²²³

Es evidente que la interacción de la protesta campesina y la represión indiscriminada terminaron por agudizar la radicalización del movimiento campesino e inclinar el fiel de la balanza en favor de la resistencia armada. De esta manera, a cada acción de autodefensa y organización que los pueblos emprendían para mejorar sus condiciones, correspondía una respuesta violenta por parte del Estado.

Como se puede intuir, los agravios acumulados en torno a una reforma agraria frustrada, la migración, las condiciones socioeconómicas negativas y el racismo; aunados a los procesos de radicalización de las organizaciones campesinas y, desde luego también, a la escalada de violencia impulsada por el gobierno estatal, configuraron condiciones adecuadas para el surgimiento de la insurgencia zapatista.

LA MODALIDAD DE LA INSURGENCIA ZAPATISTA

Origen

Diversas investigaciones han rastreado las raíces del EZLN a los movimientos guerrilleros de la década de los setenta. Precisamente, uno de estos grupos, las Fuerzas de Liberación Nacional (FNL), estableció un campo de entrenamiento en Chiapas (cerca de Ocosingo) que posteriormente fue arrasado por el ejército mexicano en 1974. Las Fuerzas

²²³ Consuelo Sánchez, op. cit., p.131.

de Liberación Nacional eran una organización político-militar de línea marxista-leninista con una clara propensión al estilo militar de las organizaciones guerrilleras y movimientos de liberación nacional de Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo con los preceptos que guiaron a dichos movimientos, se había llegado a la conclusión de que la lucha pacífica estaba agotada y que era necesario enfrentar, por medio de una guerra popular, al poder del Estado. En consecuencia, el objetivo último era derrotarlo e instaurar un gobierno tendiente al socialismo que en lo sucesivo impulsaría la dictadura del proletariado y el comunismo. Sin embargo, estas ideas se habían fraguado en el contexto de la lucha estudiantil y de los movimientos guerrilleros en las ciudades del país. Esta situación, como es de esperarse, no coincidía con la realidad de los pueblos chiapanecos. Las comunidades indígenas, sus usos y costumbres y la dinámica entre estas y los grupos que provenían del “exterior”, serían el primer obstáculo en la conformación y desarrollo del EZLN.

Como establece Consuelo Sánchez, el grupo original de las FLN, constituido por mestizos, miembros de la clase media,²²⁴ tenía una noción errónea sobre las comunidades indígenas. Para ellos, los indígenas no representaban un sector de la sociedad mexicana con características específicas, los veían como simples miembros del pueblo explotado a los que había que guiar a través de la vía armada.²²⁵

La estrategia que emprendió el grupo original buscó establecer relaciones con una pequeña élite indígena que en lo sucesivo sería el medio para tender lazos con la mayoría

²²⁴ La mayor parte de los miembros de las FLN estaban relacionados con la Universidad de Nuevo León, principal entidad en la que operaron. Algunos estudiantes, otros intelectuales, con el paso de los años fueron reclutando personajes con un perfil similar en distintas partes del país, entre ellos al que posteriormente se le conocería como Subcomandante Marcos. Para una visión más amplia del largo trayecto que recorrieron las Fuerzas de Liberación Nacional desde su creación, véase Carlos Tello Díaz, op. cit.

²²⁵ Consuelo Sánchez, op. cit., p. 134.

de los indígenas de la zona de los altos y de Las Cañadas. Tanto los mestizos de las FLN cuanto los líderes indígenas, coincidieron en que la vía armada era la opción adecuada y decidieron formar un ejército, no un grupo guerrillero. En efecto, la primera acción de esta alianza estratégica fue la instalación de un campamento en lo más profundo de la Selva Lacandona, donde fundaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 17 de noviembre de 1983. Como se tenía previsto, durante los primeros años los vínculos con las comunidades eran prácticamente nulos. Sin embargo, fue la élite indígena la que inició los primeros contactos con algunos jefes de las comunidades a quienes se les planteó la idea de la lucha armada.²²⁶ A este primer acercamiento se fueron sumando diversas acciones que emprendió la facción mestiza del movimiento. Campañas de vacunación y atención médica, impartición de talleres y apoyo en las jornadas de trabajo fueron los principales medios que se utilizaron para lograr la simpatía de las comunidades.²²⁷

Como se explicó anteriormente, uno de los factores que sin duda impulsó el surgimiento del EZLN fue la campaña de represión y violencia encabezada por el gobierno chiapaneco. Como era de esperarse las confrontaciones y los actos represivos a manos del gobierno en distintos puntos del estado favorecieron la labor del EZLN. Ante estos hechos, diversos líderes comunitarios comenzaron a mostrar interés en la lucha armada y permitieron que los miembros de sus comunidades se entrenaran, pero sólo como medio para la autodefensa. Así, el EZLN y las comunidades indígenas establecieron una alianza que los beneficiaba mutuamente. Por un lado, los militantes del Ejército Zapatista instruirían militarmente a las comunidades, a cambio, las comunidades

²²⁶ Ibid, p. 135.

²²⁷ Véase Carlos Tello Díaz, *op. cit.*

brindarían apoyo logístico al grupo armado.²²⁸ Tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales se vieron inmersos en este proceso por igual. A un año de la creación del EZLN, la mayoría de los indígenas adiestrados se habían integrado a las filas del movimiento.

El proceso de adaptación en el que se vieron inmersos los guerrilleros mestizos y las comunidades indígenas es digno de ser destacado. Los mestizos del grupo original terminaron por descubrir que la cuestión indígena era una problemática en sí misma y lograron identificar sus particularidades. Con este intercambio de ideas, experiencias y formas de concebir la realidad, se empieza a dar el proceso de transformación del EZLN, de un ejército de vanguardia revolucionaria a un ejército de las comunidades indígenas, un ejército que es parte de un movimiento indígena de resistencia.²²⁹

Para 1988, la guerrilla se encontraba integrada por cientos de combatientes, apoyados por algunas familias de las comunidades indígenas. Al año siguiente se dio un ingreso masivo al EZLN de combatientes provenientes de los pueblos y comunidades indígenas. En 1992, la dinámica zapatista llegaría a un punto de inflexión. En ese año, los jefes indígenas de las comunidades y regiones zapatistas plantearon la necesidad de iniciar la guerra. Se realizó una consulta a finales de año entre alrededor de quinientas comunidades de las etnias, tzotzil, tzeltal, chol y tojolabal, de las regiones de los Altos, Selva y el Norte. La mayoría se inclinó por iniciar la guerra. Con estas decisiones comenzó una nueva fase organizativa en lo político y militar.²³⁰

De esta manera, en enero de 1993, los representantes de las etnias tzotzil, chol, tzeltal, tojolabal de las distintas zonas, pueblos y regiones bajo influencia zapatista se integraron al movimiento como comandantes del EZLN. Con estos comandantes

²²⁸ Consuelo Sánchez, op. cit., p. 135.

²²⁹ Ibid, p. 135.

²³⁰ Ibid, p. 136.

indígenas se crea el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del EZLN (CCRI-CG), que se convertiría en el órgano de dirección colectiva suprema del Ejército Zapatista.²³¹ Este comité sería el encargado de comandar las acciones que llevaron al alzamiento del 1 de Enero de 1994.

Durante años esta labor se realizó en la clandestinidad bajo el manto que ofrecían las comunidades indígenas y el entorno selvático. Sin embargo, existen evidencias de que en diferentes niveles de gobierno, se sabía de la gestación de un grupo guerrillero en Chiapas. Primero, en enero de 1988, el ejército mexicano descubrió un campamento de milicianos del EZLN en las afueras del ejido San Francisco (situado en la cañada de Avellanal), el primero con el que Marcos había hecho contacto en 1986. Segundo, en una visita oficial del presidente Salinas a Guatemala en 1989, la cúpula del Estado Mayor del ejército guatemalteco solicitó una reunión a puerta cerrada con el mandatario mexicano. Los militares del país vecino entregaron a Salinas un informe completo de inteligencia sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, número de integrantes, estructura organizativa, nombre de sus líderes, ubicación de sus principales reductos y centros de entrenamiento. Tercero, en enero de 1991, elementos de la 31 Zona Militar descubrieron un segundo campamento de guerrilla en el ejido Quintana Roo y encontraron rifles de madera, uniformes y claves de radio. Dos años más tarde, el 22 de mayo de 1993, tropas del 83 Batallón de Infantería chocaron contra un grupo de aproximadamente 40 personas armadas en Corralchén.²³² No obstante la evidencia provista por estos incidentes, el gobierno fue prácticamente tomado por sorpresa en plena celebración del año nuevo de 1994.

²³¹ Ibid, p. 136.

²³² Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit., pp. 122-123.

Sin embargo, si cruzamos esta evidencia con la cantidad de recursos que la administración salinista destinó al estado de Chiapas por medio de los programas federales de asistencia social y apoyo al campo, podemos inferir que el gobierno de Salinas buscó contener el estallido del movimiento. Aceptar abiertamente la existencia de un grupo guerrillero podía poner en peligro la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se encontraba en marcha en esos momentos. Por consiguiente, la política emprendida por la administración federal de canalización de recursos financieros hacia la entidad puede ser entendida como una forma de contrainsurgencia social que privilegió el componente civil sobre la alternativa militar.²³³

Plataforma política e ideología

El origen ideológico del movimiento zapatista puede rastrearse a los preceptos maoístas y a las ideas propias de la izquierda revolucionaria latinoamericana, sin embargo, el pensamiento zapatista experimentó cambios con el devenir de los acontecimientos.

El primero de enero de 1994, el EZLN dio a conocer en un texto, denominado *Declaración de la Selva Lacandona*, las causas y los objetivos de su insurrección armada. En este documento, los zapatistas explicaban el carácter legítimo de la insurrección frente a la opresión y tiranía del gobierno mexicano. En pocas palabras, la guerra fue declarada. En primera instancia, el propósito de dicho comunicado exigía la destitución del Presidente de la República y llamaba a que los otros poderes de la nación “depusieran al dictador”. Convocaba a la sociedad en general a que se unieran a sus filas y hacía un llamado a los organismos internacionales para que vigilaran el conflicto. Con el paso de los días, el EZLN fue reduciendo el tono incendiario de las declaraciones.

²³³ Ibid, p. 125.

En diversas entrevistas y comunicados en los días que siguieron al levantamiento, la dirigencia zapatista se deslindó de algunos de los principios de la incendiaria declaración. La comandancia corrigió: a) el EZLN no quería el poder ni que se instalara un gobierno suyo; b) no se consideraban la vanguardia; c) la lucha armada fue la última opción que les dejaron las autoridades gubernamentales, pero no era el único medio válido para la lucha por el cambio en el país; y d) estaban abiertos a otras corrientes y formas de lucha con el fin de generar un movimiento nacional y revolucionario.²³⁴

Aunque el tono del discurso comenzó a moderarse, los zapatistas mantuvieron como eje central de su planteamiento político el reclamo por un gobierno de transición que pudiera llevar adecuadamente al país por la vía de la democracia. A partir de este momento, el movimiento zapatista intentó articular un lenguaje distinto al de las izquierdas tradicionales y trató de construir una nueva concepción de la revolución con objetivos, características y resultados distintos. De este modo, el EZLN se desligaba de la estrategia común a la mayoría de las guerrillas. En la base de dicha estrategia estaba hacerse del poder estatal para, desde esa posición privilegiada, impulsar el socialismo y reafirmar la soberanía nacional. Si bien en su origen el EZLN sostuvo posiciones afines a estos postulados, su retórica mostró cambios antes y después del 1 de enero de 1994. Una vez que las comunidades indígenas de la Selva Lacandona se apropiaron del proyecto del EZLN le otorgaron a la lucha armada un carácter singular y la revistieron con reclamos políticos y éticos de dimensión nacional y universal. Su singularidad y su trascendencia derivaron de su capacidad de articular los problemas locales y regionales con los

²³⁴ Consuelo Sánchez, op. cit., p. 137.

nacionales; las demandas étnicas con las demandas nacionales, y la democracia con la igualdad de derechos individuales y colectivos.²³⁵

El EZLN alzaba las banderas de la defensa de la diversidad étnica en la unidad nacional y la posibilidad de convivencia entre las diversas identidades étnicas (indígenas y mestizas) bajo los principios de respeto, reconocimiento e igualdad de derechos. Estos planteamientos tuvieron también resonancia internacional porque colocaron en primer plano cuestiones de gran actualidad, como son la relación entre lo universal y lo particular, y la posibilidad del diálogo y comunicación entre las diversas culturas en el mundo.²³⁶

Estructura organizacional

Hay poca información sobre la estructura del EZLN. El Subcomandante Marcos ha subrayado en diversos medios que él no es el líder del movimiento y que se encuentra subordinado a un Comité Clandestino Revolucionario Indígena que toma decisiones sólo después de haberlas sometido a votación entre los miembros de la organización.²³⁷ Además, han circulado informes que sostienen que la jerarquía del EZLN mantiene relaciones de cooperación con otros grupos armados como el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), una organización paraguas que ha cobijado diversos levantamientos armados a lo largo del tiempo. Sin embargo, nada de esto se ha podido comprobar de manera fehaciente. De acuerdo con estudios de Wager y Schulz, la estructura organizativa del EZLN incluiría un conjunto de comisiones clandestinas para cada uno de los principales grupos indígenas de la región. El Ejército Zapatista y su

²³⁵ Consuelo Sánchez, op. cit., p. 127.

²³⁶ Ibid, p. 128.

²³⁷ Stephen J. Wager and Donald E. Schulz, op. cit., p. 12.

Comité Clandestino Revolucionario Indígena se encontrarían subordinados a esos comités. Los autores señalan que la organización se completa con milicias locales y asambleas populares a nivel comunitario.²³⁸ Así, el EZLN, más que considerarse un ejército en el sentido estricto de la palabra, es una organización político-militar.

Según Raúl Benítez Manaut, para 1998 los simpatizantes y militantes del EZLN podrían haber superado los dos mil, y el área de influencia política podía haber alcanzado a más de 200 mil pobladores indígenas. El propio ejército mexicano estimó en cinco mil los combatientes del EZLN al inicio del conflicto.²³⁹ En efecto, la evidencia recuperada por Wager y Schulz en 1995, sugiere que el EZLN contaba con cerca de 1500 combatientes bien armados, apoyados por varios miles que estaban mal armados y entrenados.²⁴⁰ Es importante mencionar también que los recursos militares del grupo han sido bastante modestos. De acuerdo con el mismo Subcomandante Marcos, la guerrilla ha obtenido armas de diversas fuentes: el tráfico de armas desde ciudades al sur de los Estados Unidos, por parte de la policía y militares mexicanos envueltos en actividades antinarcóticas, de las guardias blancas (pistoleros a sueldo que contratan los ganaderos y propietarios), y de los mismos campesinos (rifles obsoletos, escopetas, machetes). Diversos medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, especularon sobre la posibilidad de que el EZLN obtuviera dinero y armas de otras fuentes, entre ellas: terroristas vascos afiliados a la ETA, el mercado de armas de Centroamérica y del cobro de secuestros en el estado. De nuevo, aunque esta información resulta sugerente en términos de las redes que han podido establecer con otros grupos y de la manera en la que se abastecen de armamento, esta no se ha podido verificar.

²³⁸ Ibid, p. 13.

²³⁹ Raúl Benítez Manaut, op. cit., p. 978.

²⁴⁰ Stephen J. Wager and Donald E. Schulz, op. cit., p. 10.

En este punto, conviene detenernos en el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. Como lo establece en su libro Carlos Tello, las armas constituían el punto más débil de la guerrilla. Las primeras fueron adquiridas con los fondos de las Fuerzas de Liberación Nacional en los años previos a la fundación del EZLN pero no eran suficientes para las prácticas guerrilleras. Años después, un miembro de las FLN, conocido por el nombre de *Germán*, salió de la región con la finalidad de coordinar la compra de armas en Estados Unidos, labor que continuó desempeñando incluso después de la formación del EZLN. A principios de los noventa, se sabía que los zapatistas se encontraban en posesión de alrededor de 2300 armas de fuego provenientes de la frontera norte. El proceso iniciaba con los subcomandantes zapatistas recolectando dinero de las comunidades simpatizantes con el movimiento. El dinero era enviado a *Germán* y este se encargaba de las compras en distintos comercios de California y Texas. Posteriormente, *Germán* viajaba a la Ciudad de México con la compra y de ahí otros militantes se encargaban del traslado a los campamentos zapatistas en Chiapas.²⁴¹

En términos del autor, las armas de fuego que se podían identificar entre la milicia zapatista eran el fusil SKS, la carabina M-1 y la ametralladora Sten para los cuadros mejor preparados del EZLN; armas de alto poder AK-47 y AR-15 para los comandantes y fusiles y mosquetones para el grueso de la guerrilla.²⁴²

La cuestión del financiamiento resultaba primordial. En efecto, las estructuras del EZLN se sostenían, en lo básico, por medio de aportaciones que daban al movimiento los campesinos de Las Cañadas y comunidades indígenas. Con ellas, los guerrilleros financiaban viajes y pagaban salarios. También, mantenían campamentos, imprentas,

²⁴¹ Carlos Tello Díaz, op. cit., p. 224.

²⁴² Ibid, p. 225.

armerías, talleres y casas de seguridad; compraban armas, uniformes, víveres, medicinas, radios, municiones y vehículos de transporte. Además, los campesinos no sólo alimentaban y apoyaban a los insurgentes con lo que obtenían de sus actividades productivas, sino también canalizaban recursos que obtenían por medio del Estado – créditos de Banrural, fondos de Solidaridad- hacia las arcas del EZLN.²⁴³

A la par de estos recursos, los insurgentes se favorecieron de aportaciones provenientes de la ciudad. Entre estas figuraban los fondos de Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), organización no gubernamental que dirigía Jorge Santiago en San Cristóbal de las Casas. DESMI se encargaba de financiar proyectos en poblados de la región donde se sabía que las autoridades, militantes de la guerrilla, acataban las órdenes del Subcomandante Marcos. Los recursos eran pocos, pero suficientes. De esta manera, los zapatistas no se vieron en la necesidad de recurrir a prácticas ilegales con los que hubieran puesto en riesgo la actividad que realizaban bajo el manto de la clandestinidad.²⁴⁴ En este sentido, es importante señalar que los sistemas de apoyo de la insurgencia, en los términos propuestos por Wickham Crowley,²⁴⁵ funcionaron efectivamente en la provisión de insumos para financiar las actividades del movimiento.

Estrategia político-militar y etapas del EZLN a partir del alzamiento

Para identificar la estrategia del EZLN a lo largo del periodo propuesto, nos valdremos de una herramienta que empleamos en el caso anterior: el desglose del accionar zapatista en etapas. El objetivo es identificar con claridad el despliegue e impacto desigual del

²⁴³ Ibid, p. 174.

²⁴⁴ Ibid, p. 174.

²⁴⁵ Timothy Wickham-Crowley, “Terror and guerrilla warfare in Latin America, 1956-1970”, p. 224.

Ejército Zapatista, así como el cambio en su estrategia de acuerdo a las circunstancias. En este sentido, Raúl Benítez Manaut propone seis etapas para entender el desarrollo del movimiento, que serán de utilidad en la investigación.²⁴⁶ Nuevamente, dividir el análisis en periodos de tiempo nos permitirá calibrar la amenaza que el EZLN representaba para el gobierno. De esta forma podemos también tratar de analizar la manera en la que la naturaleza de esta guerrilla influyó en la respuesta gubernamental.

La primera etapa se refiere al periodo de guerra y abarca del primero al 11 de enero de 1994. Este periodo se caracteriza por la ofensiva militar del EZLN y la respuesta activa por parte del ejército. En efecto, la rebelión oficial estalló temprano el 1 de enero de 1994, el día en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor. El Ejército Zapatista ocupó las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo, El Chanal y Altamirano. Los enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército mexicano bajo el comando del General Miguel Godínez, jefe de la VII Zona Militar, se prolongaron durante doce días antes de que el presidente Carlos Salinas de Gortari anunciara un cese al fuego unilateral.

El ejército libró combates en distintos puntos del estado en los que se podía apreciar su esfuerzo por liberar y retomar las cabeceras municipales. Para el 6 de enero, las fuerzas militares habían logrado desalojar a las fuerzas rebeldes de todas las posiciones que tenían ocupadas, lo que obligó a la mayoría de los zapatistas a replegarse y buscar refugio en la Selva Lacandona. Sin embargo, la guarnición de Rancho Nuevo, localidad perteneciente al municipio de San Cristóbal de las Casas, siguió siendo objeto de ataques intermitentes y fuego por parte de francotiradores zapatistas.²⁴⁷ Además de las

²⁴⁶ Véase Raúl Benítez Manaut, *op. cit.*

²⁴⁷ Stephen J. Wager and Donald E. Schulz, *op. cit.*, p. 15.

confrontaciones violentas entre rebeldes y militares, en esta etapa se perfiló también la imagen del Subcomandante Marcos. Personaje enigmático que ocultaba su rostro bajo un pasamontañas, Marcos se alzó como el portavoz del movimiento zapatista e inmediatamente ganó notoriedad en todo el país y en el ámbito internacional. A la postre, la figura del Subcomandante Marcos se convertiría en símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas y de diversos movimientos de izquierda en toda la nación.

Otro evento a destacar en esta etapa aconteció el 4 de enero, día en que la publicación de una foto tomada durante los enfrentamientos golpeó con fuerza a la opinión pública tanto nacional cuanto internacional. La foto se había tomado a los alrededores del mercado de Ocosingo y mostraba cinco cadáveres de combatientes zapatistas con las manos atadas a la espalda y con el “tiro de gracia” al estilo ejecución. La foto no sólo provocó la indignación de diversos grupos de la sociedad mexicana, sino que atrajo la atención de medios de comunicación y organizaciones internacionales. En consecuencia, el gobierno se vio rebasado por la presión nacional e internacional y buscó poner un alto a los combates lo más rápido posible. El saldo militar de esta fase fue de 152 muertos.²⁴⁸

La segunda etapa transcurrió entre el 12 de enero de 1994 y el 8 de febrero de 1995 e implicó el cese al fuego y el primer intento de diálogo. En este periodo, Carlos Salinas puso de manifiesto cierta disposición de su gobierno a entablar un diálogo con los rebeldes mediante el nombramiento de Manuel Camacho Solís como negociador principal. Manuel Camacho, presidiendo la Comisión para la Paz y la Reconciliación, estableció los primeros diálogos con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN (CCRI-EZLN) y el proceso se desarrolló bajo la mediación del obispo Samuel

²⁴⁸ Raúl Benítez Manaut, op. cit., p. 980.

Ruiz. Se sesionó entre enero y junio de 1994, fecha en que el EZLN rechazó la propuesta de paz del gobierno y emitió la "Segunda Declaración de la Selva Lacandona" en la que convocaba a la sociedad civil. A partir de este momento dio inicio un cese al fuego sin comunicación oficial entre el gobierno y el EZLN que duró hasta el 8 de febrero de 1995. Para retomar el diálogo, Samuel Ruiz estableció en noviembre de 1994 la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que representaría el órgano de intermediación por excelencia a lo largo del conflicto.

No obstante el periodo de silencio frente a las autoridades gubernamentales, el EZLN continuó con su despliegue político-militar. En cuanto a lo político, el Ejército Zapatista se adaptó a la situación reajustando su estrategia y buscando tender puentes con la sociedad civil. Para los zapatistas, lograr este vínculo representaba un claro avance estratégico ya que la sociedad podía convertirse en su principal interlocutor y resguardo en caso de que la situación se agravara. El primer intento de acercamiento consistió en la invitación que realizó el Ejército Zapatista a diversos grupos civiles a participar en la Convención Nacional Democrática (CND).²⁴⁹ La temática de estas reuniones giró en torno a temas relacionados con la desarticulación del sistema político autoritario y la construcción de un nuevo régimen democrático. A la CND correspondía la tarea de convertirse en una organización de lucha civil y pacífica dedicada a impulsar esta transición. Sin embargo, los objetivos de la CND no se alcanzaron. Algunas de las dificultades que llevaron a su fracaso incluyeron la falta de preparación de los grupos y representantes que se adhirieron al proyecto para conseguir las metas trazadas. Además, durante los diálogos comenzaron a surgir prácticas y vicios que históricamente han afectado y debilitado a la izquierda nacional: se intentaba hegemonizar y controlar la

²⁴⁹ La CND se llevó a cabo del 6 al 9 de agosto de 1994, en el Aguascalientes de la Lacandona.

palabra, se excluyeron puntos de vista y se trataron de imponer directrices para el trabajo venidero.²⁵⁰

Aunque los objetivos de la CND no se concretaron, el EZLN se hizo de la simpatía y apoyo de diversas ONG's, principalmente de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En estas organizaciones, el EZLN encontró un aliado estratégico ideal en medio de un conflicto que se mantenía en la indefinición. Las organizaciones no gubernamentales pueden considerarse como un actor no convencional, pero muy importante, que logró impedir que el ejército mexicano actuara de forma directa contra la insurgencia. La presencia de las ONG's en el caso de la insurgencia chiapaneca cumplió con una labor defensiva que permitió a los rebeldes seguir operando y proyectar sus demandas en el plano internacional. Muchas de estas organizaciones se encontraban vinculadas a partidos políticos y organizaciones religiosas europeas que brindaron un respaldo activo para el EZLN. Ante el activismo de estas organizaciones a favor de la causa zapatista, el gobierno mexicano poco o nada pudo hacer.²⁵¹

En cuanto al uso de la fuerza, a finales de 1994 el EZLN inició dos campañas militares: "Paz con justicia y dignidad para los pueblos indios" (del 9 al 19 de diciembre) y "Guardián y corazón del pueblo" (del 19 al 29 de diciembre). Durante dichas operaciones, los rebeldes ocuparon 32 municipios, nombraron nuevas autoridades civiles y anunciaron una reestructuración de esos territorios como parte de la creación de municipios rebeldes. Con esta ofensiva, el EZLN demostró que su presencia político-militar no se limitaba a las posiciones de montaña en la selva, sino que además abarcaba áreas importantes de Los Altos y el noreste chiapaneco. Luego de la segunda ofensiva

²⁵⁰ Consuelo Sánchez, op. cit., p. 137.

²⁵¹ Raúl Benítez Manaut, op. cit., p. 982.

militar del EZLN, el ejército mexicano rodeó la zona del conflicto y penetró al territorio zapatista con el fin de medir y conocer con exactitud las características del terreno selvático, como posible escenario de guerra. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos argumentaron que el desplazamiento del ejército hacía más probable una nueva confrontación con el EZLN.²⁵²

La tercera etapa corresponde a la segunda fase militar del conflicto, misma que ocurrió entre el 9 de febrero de 1995 y el 6 de marzo del mismo año. En esta etapa se emitió la orden de captura en contra del Subcomandante Marcos (identificado por el gobierno como Rafael Sebastián Guillen Vicente) y se desarrolló el proceso de discusión y aprobación por el Congreso de la Unión de la "Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas". La operación militar contra el EZLN se denominó "Operación Arcoíris" y tenía como objetivo principal capturar al subcomandante Marcos en un máximo de cinco días. Esta operación militar fracasó. Más adelante profundizaremos al respecto.

La cuarta etapa inicia en abril de 1995 y representa la segunda fase de diálogo entre el EZLN y el gobierno. En ella se establecieron dos instancias de mediación: la Conai y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). La primera fue encabezada por Samuel Ruiz y la segunda por una comisión de senadores y diputados del PRI, PRD, PAN y PT. Esta fase de diálogo-negociación culminaría con la aprobación en la mesa de negociaciones de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el 16 de febrero de 1996.

La quinta etapa corresponde al enfriamiento del diálogo y la podemos situar entre marzo de 1996 y diciembre de 1997. La decisión de las autoridades gubernamentales de

²⁵² Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit., pp. 143-144.

excluir los acuerdos de San Andrés Larráinzar en los debates al interior del Congreso de la Unión, fue el factor decisivo que detuvo el proceso de negociación entre las partes.

Por último, la sexta etapa corresponde al rompimiento de la comunicación. El detonante de dicho rompimiento fue el lamentable hecho ocurrido en la localidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Ese día un grupo paramilitar realizó una incursión en el poblado, los atacantes entraron a una iglesia en la que se encontraba un grupo de indígenas tzotziles miembros del colectivo “Las abejas” en medio de una celebración religiosa. El saldo del ataque fue la masacre de 45 indígenas entre los que se contaban niños y mujeres en estado de embarazo. A raíz de este suceso, la Conai se desmanteló y el silencio se convirtió en la característica principal del movimiento zapatista. Entre enero de 1998 y noviembre de 2000, esta fase llevó a un gran cuestionamiento nacional e internacional del gobierno por los hechos ocurridos en Chiapas que representaban violaciones serias a los derechos humanos.²⁵³

En resumen, podemos afirmar que la estrategia zapatista fue variando conforme las circunstancias se fueron presentando. Es claro que la estrategia militar de la primera fase correspondió a un intento por atraer las miradas tanto de la comunidad nacional cuanto de la comunidad internacional. También, fue de utilidad para establecer un posicionamiento frente al gobierno y, hasta cierto punto, exhibirlo frente a la opinión pública en un momento en el que pocos habrían pensado en la posibilidad de que un grupo armado de esas proporciones irrumpiera en la escena nacional. Por otra parte, a raíz del cese al fuego declarado por el presidente Salinas, el EZLN se replegó e inició una fase política que marcaría la tónica de su accionar en los años venideros. Sin embargo, la

²⁵³ Raúl Benítez Manaut, op. cit., p. 981.

confrontación, el asedio y los hechos violentos continuaron manifestándose no obstante la aparente vocación de diálogo que presentaba el gobierno federal.

EL RÉGIMEN MEXICANO EN TRANSICIÓN

Como lo vimos en el caso anterior, la actuación de un grupo armado y la respuesta del gobierno ante esta no ocurren de manera aislada. Ambos fenómenos tienen lugar en el marco de un contexto nacional con características propias que los condiciona e influye constantemente en su desarrollo. Si bien en líneas anteriores logramos identificar algunas condiciones a nivel regional que facilitaron el surgimiento del EZLN, es importante retomar el análisis de ciertas características del régimen que son de utilidad para identificar la manera en la que México cambió, en términos político-institucionales, a 20 años de la “ola guerrillera” de los setenta. Estos cambios nos permiten constatar que el contexto -tema central para los estudiosos de la contrainsurgencia- en verdad adquiere una relevancia notable en la respuesta de los gobiernos para contrarrestar amenazas armadas.

La manera en la que procedemos en este apartado corresponde a la presentación de cuatro subsistemas del régimen político que, al momento de la insurgencia zapatista, mostraron una cara distinta a la que tenían en tiempos de nuestro primer caso de estudio. De nueva cuenta haremos referencia a algunos cambios que han ocurrido en los subsistemas de distribución del poder, de partidos políticos y de la forma en la que se agregan los intereses, para intentar explicar también los cambios en materia de seguridad. Reitero que la labor en este punto del trabajo no es hacer un análisis profundo del régimen mexicano a principios de la década de los noventa. La idea es dar cuenta de que el país se encuentra inmerso en una dinámica de cambio político que presenta

condiciones distintas a las que logramos observar en la etapa férrea del autoritarismo mexicano.

En primer lugar encontramos al subsistema de distribución del poder, mismo que se ha redistribuido entre las ramas y los niveles de gobierno con el paso del tiempo. Este proceso ha incluido, principalmente, la reducción de algunas atribuciones constitucionales y, sobre todo, meta constitucionales del presidente. De igual manera, esta situación se ha aparejado con la consecuente recuperación de autonomía e independencia de los poderes legislativos y judiciales, y de los gobiernos estatales y municipales frente al ejecutivo federal. Desde esta perspectiva podría decirse que el sistema político ha avanzado en fortalecer el sistema de pesos y contrapesos en el que se funda.²⁵⁴

Los representantes del ejecutivo estatal ya no deben su puesto a la decisión presidencial, sino a la voluntad del electorado en elecciones en las que está asegurado un mínimo de competitividad y legalidad. Por su parte, el Congreso federal dejó de ser el órgano que aprobaba las iniciativas presidenciales sin ningún tipo de debate o apelación de por medio para transformarse en una arena de discusión en la que se toman decisiones de manera autónoma. Algunas de estas decisiones, incluso, opuestas a las preferencias del presidente en turno. La muestra más clara de este fenómeno la encontramos en la forma en la que progresivamente se fue configurando el Congreso de la República. Después de los años en los que el partido hegemónico controlaba prácticamente el total de los escaños, la oposición parlamentaria emprendió un proceso de crecimiento hasta tener cerca de la mitad de los diputados federales (48%) en 1988 y algo más de una cuarta parte de los senadores (26%) en 1994. Por último, la pluralidad sustituyó al monolitismo en el

²⁵⁴ Margarita Favela, op. cit., p. 547.

Congreso cuando la oposición logró ganar, en su conjunto, más de 50% de los asientos en la Cámara de Diputados, en 1997, y en el Senado, en 2000.²⁵⁵

Otro asunto relevante a la redistribución que ha experimentado el poder político en México es la serie de reformas al Poder Judicial. Estas modificaciones incluyeron cambios en la integración de la Suprema Corte, la creación del Consejo de la Judicatura Federal, las reformas al principio de la controversia constitucional y la creación de la acción de inconstitucionalidad. Estas disposiciones se han encargado de fortalecer la autonomía y atribuciones de esta rama de gobierno. En efecto, con la revitalización de la controversia constitucional y con la creación de la acción de inconstitucionalidad, se reforzó la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional y se crearon canales para que, con intermediación de los cuerpos legislativos, la población interponga recursos contra leyes y actos administrativos que considere contrarios a su bienestar.²⁵⁶

En términos prácticos, este proceso de desconcentración del poder político apunta, invariablemente, al hecho de que el Ejecutivo Federal encuentra mayor oposición al momento de emprender determinadas acciones. En el caso de la Liga observamos como la necesidad de eliminar a los grupos guerrilleros fue una idea que no encontró mayor resistencia y oposición en otros sectores del entramado institucional en México. Incluso, tanto el presidente Echeverría, cuanto el presidente López Portillo, asumieron el asunto como un tema de “agenda personal”. Para el caso chiapaneco, es claro que las instituciones en México adquieren un rol distinto. El ejemplo más claro es la presión que

²⁵⁵ Ibid, p. 548.

²⁵⁶ Ibid, p. 550.

diversos legisladores de oposición ejercieron para instaurar una comisión que ofreciera condiciones adecuadas de diálogo y negociación a la guerrilla chiapaneca.

En segundo lugar encontramos el subsistema electoral y de partidos, mismo que ha evolucionado a lo largo de una compleja transición de un sistema de elecciones no competitivas y de partido hegemónico a uno de mayor competencia y de mayor respeto al voto. Podemos rastrear los factores políticos que impulsaron esta transición en la tradición “reformista” que existe en México en materia electoral. De esta forma, podemos señalar que la reforma política de 1977 impulsada por José López Portillo y la reforma electoral de 1986 propuesta por Miguel de la Madrid fueron medidas que sin duda sentaron las bases para la apertura del sistema de partidos.

Por un lado, la reforma de 1977 tuvo como propósito principal ofrecer una opción legítima de participación política a las organizaciones que habían elegido la alternativa armada y, en consecuencia, integrarlos a la dinámica institucional. Para lograr dicho propósito se aprobó que desapareciera la figura de los diputados de partido, dando paso así a la introducción del sistema mixto de representación proporcional. También se incrementó el número de diputados a 400 -divididos en 300 uninominales y 100 plurinominales-, se redujeron los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro y se reconoció personalidad a las asociaciones políticas. Esta serie de medidas permitieron la incorporación de nuevos actores políticos y, por ende, la apertura de espacios de participación a organizaciones políticas que antes no tenían acceso.²⁵⁷ Por

²⁵⁷ El Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) solicitaron y obtuvieron su registro condicionado. También, cuatro asociaciones políticas nacionales de izquierda (Unificación y Progreso A.C., la Unidad Izquierda Comunista, el Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Acción Comunitaria A.C.) quedaron habilitadas para participar electoralmente en alianza con algún partido político. Datos obtenidos de la plataforma electrónica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm.

otro lado, la reforma de 1985 introdujo un nuevo Código Federal Electoral. Esta nueva reglamentación suprimió el registro condicionado, permitió las coaliciones y los frentes electorales y precisó el acceso a los medios de comunicación y recursos económicos. También incrementó el número de diputados plurinominales de 100 a 200, conservando en 300 el número de los diputados uninominales y dispuso la renovación del Senado cada tres años.²⁵⁸

Estas reformas beneficiaron considerablemente a los partidos de oposición. El Partido Acción Nacional (PAN) fue el que más se benefició de estas disposiciones y a partir de la década de los ochenta inició un proceso ascendente de conquista de espacios locales que devendría, en el año 2000, con la victoria de Vicente Fox en las elecciones presidenciales. Pese a los obstáculos que tuvo que sortear, el ascenso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvo un impacto significativo en la dinámica partidista en el país. En 1988, en un proceso permeado por la sospecha, consiguió la segunda posición en las elecciones presidenciales y desde ese momento se consolidaría como la tercera fuerza en la política nacional.²⁵⁹ Partiendo de esto, en el momento del levantamiento zapatista, el PRI ya no era la fuerza política que acaparaba la política en México como años atrás. El avance de la oposición y las reformas al sistema electoral permitieron encausar el descontento social mediante la vía institucional y brindar mayor grado de pluralidad a la política nacional.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ El PRD encuentra su origen en una escisión al interior del partido hegemónico. Esta disidencia dio lugar a la llamada “corriente democrática” que impulsaría la creación del “Frente Democrático Nacional”, encabezada por figuras emblemáticas de la política nacional como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El Frente Democrático representaba una corriente reformista que poco a poco fue relegada dentro del PRI; se oponían a la línea dura de la política económica impulsada por los tecnócratas, la falta de debate político que caracterizó su instauración, la inhabilidad del gobierno para mantener la legitimidad del régimen y las fallas dentro del partido. Véase Ruth Berins Collier, *The contradictory alliance: state-labor relations and regime change in Mexico*, California, University of California at Berkeley, 1992.

En tercer lugar analizamos al subsistema de agregación de intereses. Si bien no podemos afirmar que para principios de los noventa el corporativismo férreo, característico del régimen autoritario mexicano, había desaparecido, si podemos brindar evidencia de que se encontraba en proceso de cambio. Durante su mandato, Carlos Salinas de Gortari arremetió contra las viejas estructuras sindicales, aunque sin emprender una campaña directa a favor de su democratización. El presidente fortaleció los principios de la política económica neoliberal que había instaurado Miguel de la Madrid y, con esto, minó la base de poder del corporativismo. También, dio golpes certeros a estas estructuras como el encarcelamiento de los líderes sindicales de los petroleros y de los maestros.²⁶⁰ Además, al crear Solidaridad, poner fin a la reforma agraria, reformar el 27 constitucional y apoyar a Antorcha Campesina, el Salinismo consiguió golpear al corporativismo de la CNC. Los Comités de Solidaridad debilitaron los poderes coercitivos de las organizaciones corporativas priistas, pues no eran ellas, sino una estructura dependiente directamente de la presidencia, la que entregaba los beneficios. Por su parte, Ernesto Zedillo debilitó aún más al corporativismo al reducir la expectativa de prebendas para los líderes corporativizados acostumbrados a disfrutar de un curul o una gubernatura por ser miembros de algún sector del PRI.²⁶¹

Aunque en los hechos el gobierno se siguió beneficiando de la existencia del corporativismo y no ha emprendido algún tipo de política para apoyar al sindicalismo independiente, esta estructura ha perdido fuerza y centralidad como mecanismo para la

²⁶⁰ En enero de 1989 fue detenido y encarcelado Joaquín Hernández Galicia, La Quina. El líder petrolero fue acusado de acopio de armas; la condena que recibió fue de más de 30 años, acusado de homicidio y posesión de armas. En abril de 1989 tres meses después de llevar a La Quina a la cárcel, Salinas abonó para que Carlos Jonguitud, líder del SNTE, fuera desplazado por Elba Esther Gordillo. Véase Diario Excelsior, ed. 27 de febrero de 2013.

²⁶¹ Margarita Favela, op. cit., p. 552.

representación de los intereses sociales, para la negociación y para la resolución de conflictos. El declive del corporativismo ha sido resultado, además de acciones como las que mencionamos anteriormente, de un proceso constante de organización de la sociedad en grupos, asociaciones y redes al margen del corporativismo clásico.²⁶² Estos esfuerzos por organizar individuos en torno a causas en común han permitido a distintos sectores sociales avanzar en la conquista de reivindicaciones y demandas en diversos temas.

Los cambios en el entorno político alcanzaron también a las instituciones encargadas de la seguridad. En este aspecto, el sistema también ha visto cambios importantes a partir de un periodo en el que se agudizaron prácticas que violaban los derechos humanos. Como lo pudimos constatar en el caso de la Liga, estas prácticas incluían encarcelamientos injustificados, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y una absoluta impunidad de las autoridades políticas y policíacas. Aunque sería descabellado afirmar que la situación de la seguridad en México es mejor hoy que hace treinta años, si sería difícil negar los cambios institucionales que han acompañado a la transición política de las últimas décadas.²⁶³ Esto ha sido particularmente claro en lo que se refiere a la mayor visibilidad e importancia de los derechos humanos.

En 1981 se firmó la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 1986 se firmó y ratificó la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Recientemente, se reiteró la firma de tratados internacionales sobre protección a los derechos humanos, se creó en 1992 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se hicieron nuevas reformas legales al sistema penal, penitenciario y de

²⁶² Ibid, p. 552.

²⁶³ Ibid, p. 553.

seguridad pública. Estos cambios han estado asociados a una transformación significativa en las doctrinas que guían el aparato de seguridad mexicano. Por un lado, el uso indiscriminado de la violencia estatal encuentra ahora una oposición más fuerte y canales institucionales que la frenan. Por otro, los costos que diversas organizaciones deben enfrentar por actuar o protestar parecen haberse reducido. De esta forma, con el paso del tiempo se han logrado fortalecer partidos políticos, han proliferado organismos no gubernamentales de derechos humanos y otras expresiones de la sociedad civil y, además, se ha trabajado en desarrollar la independencia de los medios de comunicación.²⁶⁴

En conclusión, podemos afirmar que el entramado institucional que imperó al momento de la insurgencia zapatista fue distinto al que enfrentaron las insurgencias en los setenta. Los cambios en los distintos planos del régimen político que acabamos de observar sugieren que los costos de participación, en términos generales, se han reducido. En términos de la respuesta contrainsurgente frente a la amenaza de la guerrilla chiapaneca, existe un entramado institucional que genera debate en el interior del gobierno antes de tomar decisiones y que la contiene en caso de que se pretenda ejercer fuerza. Además de las instituciones gubernamentales encontramos a las organizaciones de la sociedad civil. Estas lograron, en el caso del EZLN modular la gravedad de la respuesta del gobierno e, incluso, asumir el rol de mediadores en los procesos de paz.

RELACIONES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS AL FINALIZAR LA GUERRA FRÍA

Hablar del contexto internacional a principios de la década de los noventa es hablar, invariablemente, del fin de la Guerra Fría. El colapso de la Unión Soviética marcó el fin de una época en la que el avance del comunismo y las amenazas internas relacionadas

²⁶⁴ Ibid, p. 553.

con el surgimiento de grupos subversivos eran los temas principales en la agenda de seguridad del continente americano. Cuestiones como el terrorismo, la proliferación de armas nucleares, la destrucción del medio ambiente, la escasez del agua, los movimientos masivos de refugiados, la sobrepoblación, las enfermedades infecciosas y los asuntos relativos a la pobreza en el Tercer Mundo se vuelven asuntos prioritarios para las grandes potencias del orbe.²⁶⁵ La solución de estos problemas se vuelve un asunto de seguridad para diversas naciones ya que son catalogados como potenciales amenazas a sus intereses.

Bajo este contexto, Estados Unidos emprendió la construcción de una nueva visión geopolítica que incluía la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como punto de partida. De esta manera, México y Canadá cerraron filas en torno a la propuesta estadounidense y se tendieron los lazos necesarios para la cooperación en diversos sectores, entre ellos, el de seguridad y defensa. En este sentido, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no tardaron en manifestar su preocupación por la situación de inseguridad e inestabilidad que imperaba en México. La violencia generada por el tráfico de drogas, los asesinatos políticos y el surgimiento de la guerrilla chiapaneca fueron circunstancias que condicionaron en buena medida la posición de México en esta alianza.²⁶⁶

Como establece Benítez Manaut, las deficiencias de México iban desde la corrupción de los cuerpos policiacos y de impartición de justicia hasta las diferentes

²⁶⁵ “Unarmed threats”, The New York Times, 29 de enero del 2001, visto en Raúl Benítez Manaut, op. cit., p. 966.

²⁶⁶ Entre estos asesinatos se cuentan los del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, en mayo de 1993; el de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la república por el PRI, en marzo de 1994; y el de José Francisco Ruíz Massieu, quien fuera Secretario General del CEN del PRI, en septiembre de 1994.

formas de organización de los sistemas de defensa y de inteligencia. Esta situación provocaba diferencias entre sus contrapartes sobre las posibilidades y capacidades reales para enfrentar diferentes problemas, contingencias y desafíos a la seguridad.

La presión que ejerció Estados Unidos sobre México en materia de seguridad obligó a las autoridades mexicanas a ceder en la firma de acuerdos de cooperación militar, de los cuales se había mantenido al margen durante el periodo de la Guerra Fría. La ayuda militar se reactivó básicamente por la necesidad de equipo y entrenamiento adecuado para enfrentar al narcotráfico. También, por la urgencia de modernizar las fuerzas armadas, tanto en términos doctrinarios cuanto de equipo y capacitación de sus efectivos para enfrentar a las guerrillas que aparecieron a principio de los noventa.²⁶⁷

En efecto, a raíz de la insurgencia zapatista, en 1994 Ernesto Zedillo otorgó un presupuesto extraordinario al ejército y la armada para enfrentar el levantamiento zapatista. Sin embargo, en los años posteriores dicho presupuesto se mantuvo constante sin mayores modificaciones. Es de llamar la atención que si bien el apoyo estadounidense estaba enfocado a la modernización de las fuerzas armadas, esto no se viera reflejado en términos presupuestales.²⁶⁸

Con motivo de estrechar los lazos de cooperación en materia de seguridad, en 1996 inició un programa de entrenamiento de los Estados Unidos. Dicho programa estaba destinado al ejército, la armada y los cuerpos policiacos mexicanos responsables de la guerra contra el narcotráfico y el combate a la guerrilla. Entre 1996 y 2000, el Programa

²⁶⁷ Ibid, p. 968.

²⁶⁸ En 1994, el presupuesto asignado a las fuerzas armadas fue de 8,868 millones de pesos. Para 1995 la cifra cae a 6,905 millones, llega a 7,439 millones en 1996 y se mantiene en 7,956 millones para 1997. En 1998 vuelve a alcanzar los 8,017 millones de pesos y en 1999 disminuye a 7,412 millones. Esto denota fluctuación en la partida presupuestal anual, pero sin modificaciones significativas. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-1998 y Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 1999, México, 1999.

Internacional de Control de Narcóticos entregó a México 30.2 millones de dólares; el Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar le otorgó casi cuatro millones de dólares y entrenó a cerca de mil militares; en 1997 y 1998 se proporcionó equipo militar por 38 millones de dólares; el Programa de Asistencia Sección 1004 contra las Drogas entregó 64 millones de dólares en 1997, 1998 y 1999; el Programa 1031 contra las Drogas aportó ocho millones de dólares en 1997; en 1996 y 1997 se dotó equipo usado, en buenas condiciones, por un monto de 2.5 millones de dólares. Estados Unidos vendió al gobierno mexicano 77 millones de dólares en equipamiento. En el equipo adquirido destaca un lote de 73 helicópteros UH-1H y tres fragatas tipo Knox para la armada. También, se brindó entrenamiento especial para que la nueva doctrina de guerra del ejército, armada y fuerza aérea, basada en las fuerzas especiales (Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales, GAFE), pudiera concretarse con eficiencia.²⁶⁹

En conclusión, podemos advertir una actitud distinta por parte de las autoridades mexicanas con respecto al apoyo ofrecido por los estadounidenses. El caso anterior demostró que el gobierno intentó durante las décadas anteriores mantener cierta distancia de los Estados Unidos en los asuntos que correspondían a la seguridad interna. Sin embargo, la firma del TLC y la inclusión de México en la economía global tuvieron como consecuencia que el gobierno se viera prácticamente en la obligación de ceder ante las presiones del vecino del norte. En términos de la fase militar de la estrategia de contrainsurgencia que se desplegó para contrarrestar al EZLN, el apoyo de los Estados Unidos fue de suma importancia para fortalecer a las fuerzas armadas mexicanas.

²⁶⁹ Adam Isacson y Joy Olson, *Just the Facts: A Civilian Guide to U.S. Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean*, Washington, Center for International Policy, 2001. Citado en Raúl Benítez Manaut, *op. cit.*, p. 970.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Antes de iniciar con el desarrollo de la estrategia de contrainsurgencia que desplegó el gobierno federal para combatir a la rebelión chiapaneca, conviene señalar el estado de las instituciones encargadas de su ejecución. En este sentido, el año de 1989 resultó crucial en términos de la generación y análisis de información a cargo del aparato de inteligencia. Al momento de crear el Gabinete de Seguridad –integrado en aquel momento por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y de la Contraloría- y el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) –sucesor de la extinta Dirección Federal de Seguridad-, Salinas culminó con el progresivo desmantelamiento de las estructuras policiacas que en décadas anteriores se habían encargado de erradicar al movimiento guerrillero.²⁷⁰ Con estas disposiciones, se consolidó un dominio directo de los asuntos de seguridad nacional por parte de la Oficina de Coordinación de la Presidencia –bajo el mando de José Córdoba Montoya- y del propio presidente de la República.

Con base en el análisis de Jorge Luis Sierra Guzmán podemos apuntar ciertas condiciones que dieron cuenta de la crisis en la que estaba sumida la inteligencia mexicana. Primero, los militares estaban formalmente integrados al esquema de seguridad nacional, pero en la práctica eran marginados en el proceso de toma de decisiones. Segundo, las organizaciones contrainsurgentes tradicionales habían sido prácticamente desmanteladas. Tercero, la inversión de capital en las comunidades chiapanecas bajo el auspicio de Pronasol era parte de una estrategia que implicaba la asignación de recursos a zonas de fuerte influencia opositora. Sin embargo, en la práctica,

²⁷⁰ Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit., p. 127.

los recursos de Pronasol no llegaron a la población más pobre ni lograron dar respuesta a los problemas históricos de la región.²⁷¹

Cuarto, los jefes militares tenían una concepción errónea de la rebelión chiapaneca. El EZLN fue concebido como una organización aislada, sin base social ni influencia política, débil en lo militar, dispersa y dividida. La inteligencia mexicana no detectó el alcance real de la influencia política del EZLN en las comunidades indígenas en los Altos y en la zona norte del estado de Chiapas. Esta falla afectó la forma en la que el gobierno mexicano intentó resolver el problema, pues la labor social de Salinas en 1993 abarcó sólo organizaciones campesinas y no incluyó a las comunidades indígenas como tales.

Así, podemos concluir que el desconocimiento del terreno y de la situación, además de la consecuente subestimación de la rebelión chiapaneca tuvo efectos claros en la respuesta del gobierno. La actuación de los militares durante los primeros días del conflicto terminó por exacerbar la crisis en la que se encontraba inmersa el aparato de inteligencia. En pocos días, el ejército sufrió una pérdida de prestigio importante ya que ante la opinión pública los militares mexicanos mataban indígenas y bombardeaban comunidades. En cierta manera, el ejército pagó los platos rotos por la ineficiencia de los gobiernos civiles.²⁷²

Contrainsurgencia en suelo chiapaneco

Pasemos al análisis de la estrategia de contrainsurgencia en su faceta militar. En 1994, el ejército mexicano respondió no sólo a una declaración de guerra, sino también a la

²⁷¹ Ibid, p. 132.

²⁷² Ibid, p. 115.

ofensiva militar zapatista. El levantamiento del EZLN obligó al ejército a movilizar a más de 12 mil tropas por tierra y aire para recuperar las cinco cabeceras municipales tomadas por el EZLN y defender Rancho Nuevo, localidad donde se encontraba el cuartel general de la 31 Zona Militar, que fue asediado en una operación de hostigamiento rebelde durante tres días.²⁷³

El despliegue de tropas del ejército mexicano y una serie de combates en diferentes zonas del conflicto provocaron que los municipios tomados fueran abandonados por el EZLN. El movimiento parecía emprender la retirada. Sin embargo, el municipio de Ocosingo continuaba en estado de sitio. Los efectivos militares encargados de liberar la zona emplearon toda la fuerza a su alcance para liquidar efectivos y destruir posiciones enemigas. Los guerrilleros que no lograron abandonar Ocosingo, fueron exterminados, incluso quienes habían sido detenidos con vida.²⁷⁴

Como propone Sierra Guzmán, el gobierno federal desplegó un conjunto de operaciones para aislar política, económica y militarmente al EZLN. El objetivo era la disuasión. Para ello, el gobierno manipuló los momentos de presencia y de repliegue en la mesa de conversaciones de paz, acrecentó la inyección permanente de recursos financieros privados y gubernamentales, y buscó maniobrar militarmente mediante avances y retrocesos de los efectivos militares apostados en Chiapas.²⁷⁵

Con base en la doctrina establecida en el Plan de Defensa Nacional 2 (DN-2), la estrategia del ejército implicó la modificación territorial de sus bases en Chiapas y la saturación militar de las zonas críticas del territorio chiapaneco. Desglosemos esta idea en sus componentes. Primero, el Plan DN-2, que como se vio en el caso de la Liga

²⁷³ Ibid, p. 113.

²⁷⁴ Ibid, p. 114.

²⁷⁵ Ibid, p. 135.

Comunista 23 de Septiembre, busca legitimar la acción de las fuerzas armadas ante la presencia de amenazas internas que atenten contra la seguridad y soberanía nacionales, se activó en cuanto se supo del levantamiento. El plan se centraba en dos cuestiones fundamentales: la inteligencia militar, para obtener la información necesaria sobre los rebeldes y la “labor social”, empleadas para mejorar la imagen del Ejército, acercarlo a la población, lograr su simpatía y obtener datos de inteligencia político-militar.²⁷⁶

Una segunda dimensión implicó la modificación de la estructura territorial del ejército. Esta alteración consistió en la creación de dos zonas militares, la 38 en Tenosique (Tabasco) y la 39 en Ocosingo (Chiapas), así como dos bases aéreas militares en Copalar y Altamirano. Para 1999, la VII Región Militar quedó integrada por cinco zonas militares la 30 en Villahermosa (Tabasco), la 31 en Rancho Nuevo (localidad de San Cristóbal de las Casas), la 36 en Tapachula, y las de reciente creación en Tenosique y Ocosingo. De esta forma, el valor estratégico de estas modificaciones territoriales permitió al ejército mexicano cerrar los tres accesos que llevaban a la Selva Lacandona. La creación de la 39 Zona Militar de Ocosingo, permitió contar con un mando territorial dedicado exclusivamente a la atención, identificación y acotamiento del área del conflicto. Además, mediante esta zona militar se controló de manera permanente el acceso a la selva, zona estratégica por su alto potencial petrolero, hidroeléctrico y forestal. Los otros dos accesos por vía terrestre, Altamirano y Las Margaritas, ya estaban bloqueados de igual forma.²⁷⁷

Tercero, la saturación de tropas militares implicó el despliegue de una fuerza disuasiva de 40 mil efectivos en la zona del conflicto. Esta se encontraba reforzada por

²⁷⁶ Ibid, p. 138.

²⁷⁷ Ibid, pp. 139-140.

blindados livianos, helicópteros de ataque y tropas especializadas en el combate en selva. El ejército instaló 100 campamentos en el sureste del país, 14 cuarteles para 11 batallones de infantería y de operaciones especiales, 3 cuarteles para regimientos de caballería motorizados y de artillería, así como 27 alojamientos en diversas unidades militares.²⁷⁸

Además, a este ajuste del dispositivo estratégico, en el periodo de 1994 a 1998 se dio paso a la creación de 70 Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE) y 36 Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (GANFES). En el caso de Chiapas, durante este periodo identificamos la creación del 2do. GAFE en El Sabino y a la Fuerza de Intervención Rápida en Copalar, ambos adscritos a la VII Región Militar. Además, el 1 de abril de 1997 se crearon los GAFE de las zonas militares 31, 36, 39 y 38 en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo y Tenosique (Tabasco).²⁷⁹

Operativo para aprehender a la comandancia zapatista

En febrero de 1995, el ejército volvió a incursionar en la selva para apoyar a la Procuraduría Federal de la República (PGR) en el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el subcomandante Marcos y los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI-CG). Cientos de efectivos del batallón de paracaidistas llegaron a Guadalupe Tepeyac en decenas de helicópteros artillados, sin enfrentar resistencia zapatista. El operativo cercó los 22 mil kilómetros cuadrados del territorio zapatista y se movió en círculos concéntricos para peinar la zona en busca de rebeldes.²⁸⁰

²⁷⁸ Ibid, p. 138.

²⁷⁹ Secretaría de la Defensa Nacional, Informe de labores 1996-1997, México, 1997.

²⁸⁰ Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit., p. 151.

En efecto, esta incursión representó un movimiento clásico en los manuales de contrainsurgencia. Las tropas sacaron el ganado de la zona, destruyeron todo abastecimiento posible para los guerrilleros, contaminaron depósitos de agua y obligaron a los zapatistas a replegarse en la selva. Miles de pobladores se desplazaron a la selva junto con los zapatistas por temor a la acción de los soldados. La presencia de las familias al lado de los rebeldes indicaba que, a diferencia de los guerrilleros de los años setenta que peleaban solos y aislados en la sierra, los zapatistas luchaban con sus familias.²⁸¹ Aunque esta operación implicó un fuerte golpe en contra de la insurgencia, el ejército no consiguió la captura de los dirigentes.

Feudalización del conflicto en Chiapas

En 1995, mientras las partes en el conflicto se reunían en San Andrés Larráinzar para dialogar, inició un proceso mediante el cual la contención de la rebelión zapatista pasó del gobierno federal y el ejército mexicano a las élites locales. Este proceso, al cual Raúl Benítez Manaut denomina “feudalización del conflicto”, generó la proliferación de grupos paramilitares. Inevitablemente, estos grupos reactivaron la dinámica de violencia intraestatal entre sectores de la sociedad chiapaneca.²⁸²

En este sentido, Sierra Guzmán sugiere que el surgimiento de grupos paramilitares coincidió con la renovación del mando de la VII Región Militar. El general Mario Renán Castillo, considerado como el autor de la doctrina contrainsurgente contemporánea, reemplazó al general Miguel Ángel Godínez en febrero de 1995. De acuerdo con los manuales de guerra irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que escribió el

²⁸¹ Ibid, p. 153.

²⁸² Raúl Benítez Manaut, *Chiapas: el Estado y las Fuerzas Armadas ante la insurgencia*, ponencia presentada en la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, 11 de septiembre de 1998.

propio general Renán, el personal civil militarizado es fundamental para destruir las fuerzas integradas por el enemigo y traidores a la patria con operaciones militares.²⁸³

En una investigación realizada por el grupo parlamentario del PRD en 1999, se establece que, de acuerdo con la doctrina del ejército mexicano, el comandante militar del área puede usar al personal civil militarizado para apoyar en retaguardias, servir de informante y servir de guía de tropas, camuflado o uniformado como militar. También, el comandante podrá emplear a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas enemigas.²⁸⁴ Así, la presencia paramilitar encontró justificación y sirvió para reducir la presión puesta sobre el ejército.

El grupo paramilitar más importante en esta primera etapa de paramilitarización fue Paz y Justicia. Este grupo se constituyó formalmente el 5 de agosto de 1995 como un frente de ejidatarios, campesinos y autoridades de diversos municipios chiapanecos, de carácter priísta, para contrarrestar la actividad radical del PRD y de las células zapatistas. Paz y Justicia junto con Los Chinchulines, otro de los grupos de filiación priísta en el estado, modificaron el eje del conflicto.²⁸⁵ Los enfrentamientos ya no eran entre el ejército y el EZLN, sino entre los zapatistas y paramilitares.²⁸⁶ Además, la manera en que operaban estos grupos trajo importantes dividendos a la causa contrainsurgente. Paz y Justicia emprendió campañas en las que se arrasaron caseríos y se realizaban “mesas de ajusticiamiento” en las comunidades que simpatizaban con el EZLN. Por su parte, Los

²⁸³ Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit., p. 171.

²⁸⁴ Grupo parlamentario del PRD, *Los paramilitares en México*, Cuarto informe sobre las Fuerzas Armadas, Cámara de Diputados, LVII Legislatura del congreso de la Unión, México, 1999.

²⁸⁵ Otros grupos paramilitares identificados en la zona fueron Máscara Roja, Fuerzas Armadas del Pueblo, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista y Tomás Munzer. A estos se sumaban otros cuatro que actuaban en forma anónima y otros grupos de civiles armados (Degolladores, Alianza San Bartolomé de los Llanos y Primera Fuerza). Los paramilitares extendieron su presencia en 25 de los 56 municipios de Chiapas donde se reconocía influencia del EZLN.

²⁸⁶ Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit., p. 173.

Chinchulines se encargaron de monopolizar concesiones del transporte público, cobrar multas y realizar detenciones.²⁸⁷

Conviene analizar desde el punto de vista estratégico la labor paramilitar en Chiapas. Los paramilitares no enfrentaron directamente al EZLN, por el contrario, sus ataques se dirigían a la población civil. En sus primeros tres años de actividad, los paramilitares provocaron la muerte de 1500 personas y el desplazamiento de cerca de 10 mil de sus comunidades de origen.²⁸⁸ Esta estrategia minó las bases de apoyo zapatista. Es claro que para una guerrilla rural, basada en la participación de las comunidades como sistemas de soporte, la violencia paramilitar representaba un ataque directo a sus bases de apoyo con el fin de aislar a la dirección político-militar. Además, los paramilitares se encargaron de llenar los espacios vacíos que dejó el cerco formado por la modificación a la estructura territorial del ejército.

Por último, el viraje que dio el conflicto a finales de 1997, se debe en parte a la paramilitarización que experimentó el estado. Como se mencionó, el 22 de diciembre del año en cuestión, un comando paramilitar (aún no se encuentra información sobre la filiación del mismo) realizó una incursión en la localidad de Acteal y llevó a cabo una masacre en la que murieron 45 personas de la etnia tzotzil. Este acontecimiento inauguró una época de retraimiento del EZLN que llevó a la prolongación indefinida del conflicto.

²⁸⁷ Estos datos se obtuvieron de una denuncia presentada ante el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en septiembre de 1995. Véase Sierra Guzmán, 2003, op. cit.

²⁸⁸ Ibid, p. 177.

IV

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

De acuerdo con lo establecido en las líneas introductorias de este trabajo, hemos intentado desglosar el fenómeno de la insurgencia y la contrainsurgencia en distintas dimensiones que influyen en su desarrollo. Hasta el momento logramos observar la naturaleza y cualidades de dos grupos que, aunque comparten la característica de ser “armados”, adquieren una configuración distinta dependiente de las circunstancias en las que se forman. También, identificamos que estos fenómenos no ocurren en un ambiente aislado, sino que son producto de un contexto que ofrece condiciones nacionales o regionales que condicionan su desenvolvimiento. Además, los efectos del contexto no se limitan al espacio en el interior de las fronteras de una nación, sino que existen ocasiones en las que el desarrollo de estos conflictos se ve afectado también por el entorno internacional. Sin embargo, el análisis que propongo requiere de una reflexión de los casos que observamos a la luz de los lineamientos teóricos que ofrecimos en el primer capítulo del texto. Esta reflexión se nutre de la perspectiva comparada para ofrecer una serie de factores que son de gran importancia en el estudio de la insurgencia y la contrainsurgencia.

El eje de análisis que corresponde a *la modalidad* del grupo armado encuentra su origen en la idea de que primero hay que conocer la amenaza antes de enfrentarla. De esta forma, el estudio de la composición de la Liga Comunista y del EZLN se convierte en el punto de partida. En efecto, ambas organizaciones son considerados grupos armados o insurgencias. En términos de Bard O’Neill, podemos decir que las insurgencias se

refieren a una lucha entre grupos no dominantes y autoridades gubernamentales en la que el grupo no dominante utiliza conscientemente recursos (expertos en organización propaganda y protesta) y métodos violentos para destruir, reformular o sostener las bases de legitimidad de uno o más aspectos de la política.²⁸⁹ Sin embargo, los hallazgos de esta investigación sugieren que en la práctica estas insurgencias adquieren diferentes modalidades o configuraciones.

En el caso de la Liga tenemos a una organización guerrillera que se fraguó al calor del movimiento estudiantil a finales de los años sesenta y que se encontraba guiada por los principios de la guerra de guerrillas y el comunismo en boga. Su área de operación, aunque amplia por que abarcaba diferentes ciudades en el país, se limitaba a las urbes, lo que le da el carácter de guerrilla urbana. Aunque la Liga tuvo el acierto de desarrollar métodos de difusión y educación política como la publicación del diario Madera, no se pudo librar de ser identificada, básicamente, por la violencia de sus acciones. De hecho, quizás el carácter violento de su accionar terminó definiendo a la organización y limitó su impacto. La violencia de sus acciones incluso repercutió en la manera en que la organización se financiaba. Conviene recordar que la Liga abrazó acciones como el asesinato y secuestros de miembros prominentes del ejército, policías, líderes sindicales, o unidades de los cuerpos de represión, la recuperación o expropiación de dinero, armas, municiones, papel, máquinas de escribir, mimeógrafos e instrumental quirúrgico. Además, La Liga supo expandir la fórmula de hostigamiento, promovió la eliminación de fuerzas económicas enemigas e impulsó la realización de secuestros a prominentes

²⁸⁹ Frank Kitson, op. cit., p. 3.

políticos y miembros de la élite económica e industrial con un doble objetivo: ampliar los fondos económicos y negociar con el Estado la liberación de presos políticos.²⁹⁰

En este sentido, como lo propone Mary Kaldor en sus estudios sobre las llamadas “nuevas guerras”,²⁹¹ la organización se valió de métodos criminales para financiar sus actividades. Esta situación tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, facilitó que las autoridades gubernamentales asumieran un discurso de condena en su contra, es decir, “criminalizaron” a la organización. En segundo lugar, propició el descontento de diversos sectores de la sociedad por los blancos elegidos para llevar a cabo sus asaltos.

En detrimento de los objetivos propuestos por la Liga, la tónica del discurso oficial complicó enormemente su defensa. El hecho de que diversas autoridades declararan que la organización se encontraba formada por “criminales”, “desadaptados” y “radicales”, aunado a la cuestión de que los golpes de la Liga iban encausados, en su mayoría, en contra de miembros distinguidos de la sociedad, privó al grupo de un sistema de apoyo adecuado para mantener viva la insurgencia. Como propone Wickham-Crowley, con base en las relaciones que se establecen entre combatientes y civiles, los sistemas de apoyo pueden brindar a las insurgencias el acceso a armas, fábricas, redes de transportación y líneas de suministro que los conecten con recursos diversos. En efecto, la importancia de la triada compuesta por combatientes, civiles y sistemas de apoyo en situaciones de guerra de guerrillas ha sido ampliamente reconocida. Mientras los principios de la guerra moderna convencional establecen una clara distinción entre estos

²⁹⁰ Rodolfo Gamiño Muñoz, op. cit., p. 65.

²⁹¹ Mary Kaldor, op. cit.

elementos, en situaciones de guerra de guerrillas la distinción es intencionalmente difuminada por los guerrilleros.²⁹²

Aunque diversos autores se centran en los beneficios que ofrece contar con el apoyo de sectores de la población, es relevante mencionar que estos también se pueden obtener de otras organizaciones insurgentes. Llama la atención el hecho de que la Liga operó en un contexto en el que proliferaron otras expresiones armadas en México. Sin embargo, la organización no consiguió tender lazos de cooperación con sus contrapartes. Aunque hubo acercamientos con las guerrillas rurales de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, la Liga no consiguió obtener los beneficios potenciales que un frente amplio guerrillero o una red de organizaciones armadas pudo haber generado.

En contraste, observamos el largo recorrido que ha transitado el EZLN. Desde la década de los ochenta se inició en los Altos chiapanecos un proceso de asimilación de intereses entre un grupo de guerrilleros ligados a las Fuerzas de Liberación Nacional y las comunidades indígenas. Los combatientes de las FLN, que operaban en la clandestinidad desde finales de los setenta, encontraron en Chiapas condiciones favorables para continuar su lucha. Además, se mostraron abiertos a la influencia de las consignas por las que las comunidades indígenas y los comuneros chiapanecos venían luchando desde hace tiempo. Estas condiciones propiciaron que guerrilleros e indígenas, codo a codo, emprendieran una labor de organización y construcción de objetivos conjuntos que devino en el levantamiento zapatista de 1994.

En este sentido, la modalidad que adquiere el EZLN es la de una guerrilla rural. Como guerrilla rural, el EZLN se planteó la necesidad de combinar una estrategia político-militar que, a la vez que le permitiera darse a conocer a gran escala, le facilitara

²⁹² Timothy Wickham-Crowley, 1990, op. cit., p. 224.

fijar una posición en clara oposición a las estructuras del Estado. A diferencia de lo que ocurrió con la Liga, uno de los principales activos del EZLN fue la organización que logró montar acompañado de las comunidades indígenas. Como lo observamos en el capítulo correspondiente, el EZLN se encuentra formado por un círculo de combatientes bien armados y entrenados, un segundo círculo de combatientes con menor entrenamiento y débil armamento y, por último, un amplio círculo de simpatizantes en buena parte del territorio chiapaneco. En este caso, la premisa de los sistemas de apoyo como parte fundamental del desarrollo de una insurgencia se cumple adecuadamente. El EZLN tuvo la posibilidad de nutrirse de diversos insumos provenientes de las comunidades que iban desde alimentos y suministros, hasta protección e información. Esta situación es digna de ser destacada ya que pareciera que la idea de los sistemas de apoyo es que estos funcionan de manera unidireccional, es decir, algún sector de la sociedad por determinada razón decide apoyar el accionar de la insurgencia. Sin embargo, en el caso del EZLN pareciera que la relación es recíproca. Las comunidades proveen de insumos a la insurgencia y, por su parte, el EZLN ofrece, entre otras cosas, una voz a las demandas de los grupos que lo apoyan. Además, los alcances de este sistema de apoyo rebasaron los límites del estado de Chiapas. Las consignas del EZLN adquirieron un importante eco a nivel nacional e internacional debido a la primera ofensiva militar en su contra.

Diversos sectores de la sociedad mostraron simpatía con el movimiento a raíz de que se dieron a conocer en los medios de comunicación una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidas durante los primeros días del enfrentamiento. Esta situación ofrece dos dimensiones analíticas que conviene señalar. Primero, como lo sostiene Kalyvas, típicamente se asume que el apoyo popular es exógeno al conflicto. Es

decir, el apoyo estará predeterminado por diferencias étnicas o de clase. Esta condición se cumple si nos referimos a las comunidades indígenas en Chiapas. Sin embargo, el apoyo popular también es endógeno a la lucha. Por lo tanto, las preferencias e identidades tenderán a redefinirse en el curso de la misma en respuesta a la dinámica del conflicto y de la violencia.²⁹³ Esta situación corresponde con el apoyo que lograron a nivel nacional e internacional. Las reivindicaciones indigenistas, democráticas y de derechos humanos, aunadas a la violencia de la respuesta inicial por parte del gobierno, reorientaron la percepción de diversos actores sociales para brindar su apoyo a la insurgencia.

En segundo lugar, como lo propone Frank Kitson, las campañas insurgentes no sólo buscan disuadir a diferentes sectores de la sociedad, en el país donde tienen lugar, para conseguir su apoyo. También, en ocasiones, buscan atraer la atención de la comunidad internacional para fortalecer su accionar. Como lo expresamos en líneas anteriores, tal fue el caso de la campaña del General Grivas, misma que logró movilizar mecanismos diplomáticos para mediar en el conflicto en Chipre.²⁹⁴ De igual manera, el EZLN buscó de inmediato tender lazos con distintas organizaciones de izquierda y pro derechos humanos internacionales. Esta relación benefició a la insurgencia y representó un factor clave para reducir la intensidad de la respuesta militar del gobierno mexicano. Así, no sólo es la opinión pública la que avala al movimiento, sino también, la comunidad internacional es capaz de otorgar legitimidad a la labor de la insurgencia.

En lo que corresponde a los métodos de financiamiento, la guerrilla chiapaneca no incurrió en actividades abiertamente criminales. Si bien los hallazgos que presento en esta investigación apuntan al hecho de que se beneficiaron del tráfico ilegal de armas

²⁹³ Stathis Kalyvas, “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, p. 10.

²⁹⁴ Frank Kitson, *op. cit.*, p. 5.

proveniente de Estados Unidos y de desvíos de recursos financieros provenientes de la asistencia social para los sectores desprotegidos en Chiapas, el EZLN no incurrió en prácticas que, ante la mirada de la población, pudieran ser sujetas a interpretarse como métodos criminales.

El segundo eje de análisis contemplado en el estudio nos muestra la importancia del *contexto nacional* en el que se desarrollaron ambos conflictos. Como lo destaca Adam Roberts al analizar las distintas doctrinas sobre contrainsurgencia, es fundamental reconocer que cada insurgencia es distinta y, por lo tanto, se debe tener conciencia sobre las características propias del ambiente donde determinada estrategia se desplegará.²⁹⁵ En este sentido, la intención de ofrecer una descripción de componentes específicos del régimen mexicano en el plano político-institucional nos permite evaluar el impacto de estos en la estrategia contrainsurgente del gobierno. Sin embargo, conviene destacar que la influencia del contexto nacional puede desdoblarse en dos dimensiones analíticas. La primera dimensión corresponde al hecho de que las condiciones que ofrece el régimen pueden obstaculizar o incentivar la radicalización de organizaciones políticas. La segunda hace referencia a que las mismas condiciones pueden facilitar que la respuesta del gobierno se exacerbe o se modere en términos de la violencia que despliegue. Veamos cómo opera esta cuestión en ambos casos.

Para el caso de la Liga, la cualidad autoritaria del régimen facilitó la estrategia emprendida por el gobierno para perseguir y eliminar a las insurgencias mexicanas. Por un lado, la falta de espacios de participación política fuera de las estructuras articuladas bajo el PRI, la nula vocación democrática al momento de dirimir conflictos y tomar decisiones, la ausencia de opciones políticas que representaran la diversidad de intereses

²⁹⁵ Adam Roberts, op, cit., pp. 34-35.

y la falta de legalidad en los procesos de transmisión del poder representaron una “ventana de oportunidad” que diversas organizaciones aprovecharon para asumir la lucha armada y expresar su descontento. Por otro lado, la concentración del poder en la figura del presidente de la república y la articulación y uso discrecional del aparato de seguridad bajo su mando fueron factores clave para facilitar la respuesta contrainsurgente coercitiva del gobierno. Es decir, una campaña abierta para capturar y eliminar a las insurgencias.

Por su parte, el EZLN enfrentó circunstancias completamente distintas. El contexto nacional ofreció condiciones propias de un régimen empujado hacia una transición a la democracia. De esta manera, la desconcentración del poder y la mayor pluralidad de la vida política ofrecieron un espacio para que la guerrilla chiapaneca expresara su voz y para que su mensaje adquiriera resonancia en diversos medios de comunicación masiva. Como lo menciono en el apartado correspondiente, los cambios en los distintos planos del régimen político reflejaron que los costos de participación, en términos generales, se redujeron. En términos de la respuesta contrainsurgente frente a la amenaza de la guerrilla chiapaneca, las nuevas condiciones del entramado institucional generaron un debate en el interior del gobierno al momento de enfrentar a la insurgencia.

Este asunto ofrece dos ejemplos que merecen ser retomados. Por un lado, el hecho de que la oposición partidista en la Cámara de Diputados pugnara por la creación de una comisión para dialogar con la insurgencia propició las condiciones que permitieron, en diferentes momentos, bajar la intensidad del conflicto. Por otro lado, como lo menciona Sierra Guzmán, entre las altas cúpulas de las fuerzas armadas corría la preocupación en torno al impacto que la represión de indígenas en Chiapas podía tener en su imagen ante la opinión pública. Si bien esta expresión de descontento en las filas

armadas no tuvo un impacto significativo, si expresa el disenso que la respuesta del ejecutivo tuvo que enfrentar en el flanco institucional para controlar la insurgencia.

Por otra parte, además de las instituciones gubernamentales encontramos a las organizaciones de la sociedad civil. Estas lograron modular la gravedad de la respuesta del gobierno mediante la creación de un cerco que “protegía” el área de influencia zapatista e, incluso, asumir el rol de mediadores en los procesos de paz. Por último, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas reformas al sistema penal, penitenciario y de seguridad pública se tradujeron en obstáculos que impidieron que las autoridades emplearan de manera indiscriminada la violencia estatal.

Un tercer eje de análisis desarrollado en este trabajo fue la influencia del *ámbito internacional*. En este aspecto, David Betz es claro en señalar que este tipo de conflictos internos deben ser estudiados en el contexto de procesos políticos más amplios como las transiciones políticas, los movimientos sociales, las crisis económicas y los conflictos internacionales. Por lo tanto, para ambos casos logramos observar cómo grandes fenómenos internacionales influyeron en su desarrollo.

Para efectos del primer caso, la Guerra Fría fue un proceso que impactó de manera global a las naciones y, en concreto, a los países de América Latina. La amenaza que representó el avance del comunismo y el surgimiento de grupos subversivos que trastocaban los principios de orden y estabilidad en los que se habían fundado diversos regímenes fue la causa principal por la que Estados Unidos incrementó su injerencia en la política interna de los países del continente. Como lo hemos visto, México no fue la excepción. En materia de seguridad, las autoridades mexicanas tuvieron que adaptarse y seguir determinados principios que la potencia vecina estableció para garantizar la

estabilidad en el interior de las naciones y de las mismas relaciones de índole económica y política entre Estados Unidos y sus contrapartes en Latinoamérica. En este sentido, la influencia de los Estados Unidos merece mención aparte. El apoyo que una nación brinda a otra no sólo se ve reflejado en equipo, entrenamiento o recursos financieros, sino que puede ir más allá al grado de dictar los lineamientos con los que una nación opera asuntos estratégicos. Este fue el caso de México en la década de los setenta. Si bien las autoridades mexicanas escogieron cuidadosamente sus opciones al recibir apoyo por parte de Washington, lo cierto es que tuvieron que alinearse en materia de seguridad a la defensa del hemisferio que los vecinos del norte emprendieron. Dentro de esta iniciativa, la erradicación de amenazas internas ocupaba un lugar prioritario.

En términos de la década de los noventa, los dos temas que condicionaron la política de seguridad en México y, por ende, la estrategia contrainsurgente contra el EZLN fueron el fin de la Guerra Fría y la firma del TLC. Primero, el colapso de la Unión Soviética marcó el fin del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el término de esta lucha desapareció, también, la prioridad de contener el avance del comunismo y las amenazas internas relacionadas con el surgimiento de grupos subversivos. Como lo reseña Raúl Benítez Manaut, cuestiones como el terrorismo, la proliferación de armas nucleares, la destrucción del medio ambiente, la escasez del agua, los movimientos masivos de refugiados, la sobrepoblación, las enfermedades infecciosas y los asuntos relativos a la pobreza en el Tercer Mundo se volvieron asuntos prioritarios para las grandes potencias del orbe.²⁹⁶ Segundo, bajo este contexto Estados Unidos emprendió la construcción de una nueva percepción geopolítica que incluía la firma del

²⁹⁶ “Unarmed threats”, The New York Times, 29 de enero del 2001, en Raúl Benítez Manaut, op. cit., p. 966.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como punto de partida. De esta manera, México se vio en la necesidad de cerrar filas en torno a la propuesta estadounidense y se tendieron los lazos necesarios para la cooperación en diversos sectores, entre ellos, el de seguridad y defensa. Bajo esta lógica, y ante la presión de los vecinos del norte, México tuvo que emprender medidas adecuadas para contener tanto la amenaza que representaba la guerrilla chiapaneca cuanto la violencia y el clima de inseguridad ocasionado por el tráfico de drogas. En este sentido, podemos reflexionar en torno a la idea de que la respuesta inicial del gobierno de Salinas frente al levantamiento zapatista, es decir, desplegar un operativo militar que mantuvo en estado de sitio a las bases zapatistas durante 12 días, pudo significar un intento eliminar rápidamente una amenaza que ponía en riesgo la estabilidad del país y, por ende, los acuerdos a los que México se sujetó con el Tratado de Libre Comercio.

Por otra parte, dentro de las instituciones encargadas de la seguridad en México se dieron adecuaciones a su marco legal que correspondieron con la firma de acuerdos internacionales. Como lo observamos anteriormente, en 1981 las autoridades mexicanas firmaron la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en 1986, hicieron lo propio con la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De esta manera, el análisis nos conduce a reflexionar propiamente sobre *la respuesta contrainsurgente* que el gobierno mexicano emprendió en ambos casos. Como podemos identificar en el apartado teórico de este trabajo, la contrainsurgencia puede ser entendida como una serie de acciones militares, paramilitares, políticas, económicas,

psicológicas y civiles que emprenden los gobiernos para derrotar insurgencias.²⁹⁷ Es decir, la respuesta gubernamental se puede ir moviendo, dependiendo el estado del conflicto, en un plano que va de las opciones pacíficas de resolución como la labor social y la negociación, a las opciones que implican el uso de la fuerza. Como propone Barry Cooper, la finalidad de una estrategia de contrainsurgencia debe ser la de separar a los insurgentes de la población civil. En caso de que se tengan que emplear métodos militares, estos deben emplearse con cautela y solamente para contrarrestar las fuerzas insurgentes, no para sobrepasarlas.²⁹⁸ Veamos cómo ocurrió en los casos que analizamos.

En el caso de la Liga, el gobierno emprendió desde que conoció su existencia una campaña para encontrarlos y eliminarlos. Es difícil encontrar en el análisis argumentos para afirmar que la respuesta fue variando en los términos mencionados anteriormente ya que la evidencia muestra que la Liga fue perseguida como si fuera un grupo criminal, incluso, podríamos decir, terrorista. La organización guerrillera no logró conseguir lazos con sectores de la población o con otras guerrillas que permitiera generar bases sólidas para frenar la respuesta gubernamental. En este caso, lo que llama la atención y considero una dimensión crucial en el estudio del conflicto interno es el uso indiscriminado de la violencia y los métodos terroristas por parte del Estado. Retomando a Wickham-Crowley, podemos afirmar que las tácticas terroristas se refieren a aquellos actos prohibidos por el derecho internacional humanitario e incluyen: a) palizas, asesinatos, robos, bombardeos u otros tipos de asalto a la población civil, incluidos asuntos como el desplazamiento forzado; b) golpear, torturar o matar combatientes que se han rendido; c) el uso de armas

²⁹⁷ Frank Kitson, op. cit., p. 25.

²⁹⁸ Barry Cooper, op. cit., p. 30.

que no discriminan entre combatientes y civiles.²⁹⁹ En efecto, la Dirección Federal de Seguridad, se valió de esta serie de métodos para obtener información y desmembrar, no sólo a la Liga, sino a la diversidad de grupos guerrilleros que proliferaron en la época. Más que asesinar a los combatientes de la guerrilla, las estrategias de terror que el gobierno combinó para hacer frente a las insurgencias estuvieron enfocadas a infringir temor a los mismos miembros de la organización y a potenciales simpatizantes. Para este caso, la Brigada Blanca, grupo paramilitar supeditado a la autoridad de la DFS, representa la encarnación de las estrategias de terror de las que se valieron las autoridades mexicanas.

En este sentido, en función de su origen, conviene recordar que existen dos tipos de terror. Por un lado, se observa el terror que producen los gobiernos y, por otro, el terror que produce el estado de inseguridad y pánico asociado a algunas guerrillas. En efecto, los grandes golpes que emprendió la Liga (secuestros a importantes personajes de la política nacional, asaltos bancarios, tomas de tierras y expropiaciones) fueron acciones que en, en cierta medida, generaron temor en diversos sectores de la sociedad. Ello se debió a que los ataques no iban sólo dirigidos a policías, militares o miembros de los cuerpos de seguridad, sino que iban también enfocados a la población civil. Aun así, desde el punto de vista estratégico, algunos autores han intentado explicar el terror insurgente con base en dos argumentos. En primer lugar, algunos expertos consideran que los insurgentes deben utilizar el terror con el fin de sobrevivir a los ataques iniciales del régimen. El segundo argumento sostiene que el uso del terror debe ser muy selectivo y dirigido contra funcionarios gubernamentales, informantes, desertores y elementos

²⁹⁹ Timothy Wickham-Crowley, *op. cit.*, p. 202.

criminales locales, incluyendo criminales sociales como los dueños de la tierra.³⁰⁰ Para la Liga, no obstante, el uso de estrategias de terror sólo contribuyó al repudio de amplios sectores de la población y contribuyó su cacería.

Para cerrar el análisis de la respuesta del gobierno al momento de enfrentar a la Liga, retomemos la tipología de Connable y Libicki acerca de los posibles escenarios en que puede derivar. Desde el punto de vista estratégico-militar, la evidencia disponible sugiere que en el corto plazo el gobierno triunfó en el combate que libró contra la Liga. En este sentido, las autoridades mexicanas lograron destruir los cuadros y la estructura política de la insurgencia. A fuerza de medidas de represión y con un alto costo en términos de derechos humanos, el gobierno logró acorralar y eliminar la amenaza que representaba la Liga Comunista. Sin embargo, en este punto de la reflexión conviene retomar una cuestión fundamental. Como lo observamos en el apartado concerniente al periodo de cambio institucional en México, el sistema electoral fue modificado con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977. En efecto, esta reforma significó la salida institucional para los combatientes que quisieran dejar las armas para incorporarse a la vida política del régimen. Esta situación sugiere que, aunque la respuesta coercitiva por parte del gobierno fue contundente y fuera de proporción en contra de la Liga y otras organizaciones armadas, en determinado momento las autoridades pusieron en marcha una salida política que continuaría con el proceso de desactivación de cuadros guerrilleros.

Por otra parte, en lo que corresponde a la respuesta contrainsurgente frente a la insurgencia zapatista, las cosas son diferentes. La evolución de este conflicto se acerca a

³⁰⁰ Ibid, p. 215.

la trayectoria que Huw Bennett distingue entre periodos de continuidad y cambio.³⁰¹ Es decir, momentos en los que la violencia llega a un máximo para después dar paso a salidas negociadas o mecanismos políticos para contrarrestar la insurgencia. En términos del EZLN, estos matices se pueden distinguir con facilidad. Claramente en los primeros 12 días del conflicto la faceta militarista de la respuesta del gobierno dominó el escenario. Sin embargo, como lo apreciamos en líneas anteriores, diversos factores se conjugaron y obligaron al gobierno a replegarse. De esta manera se dieron las condiciones para la negociación. A partir de ese momento, la manera en la que el gobierno desplegó su fuerza militar fue calibrada. La opción de un golpe final contra la insurgencia zapatista fue descartada como consecuencia de un entorno político claramente internacionalizado.

De esta manera, podemos concluir que la estrategia del gobierno giró hacia una fase política en la que, ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional, las administraciones priistas mostraron cierta disposición para dar salida a las demandas zapatistas. Sin embargo, como sabemos, el asunto no se resolvió. Si bien, las autoridades se resistieron a asestar un golpe contundente contra la guerrilla, no cesaron en su hostigamiento y acorralamiento. Por un lado, la saturación del estado de Chiapas de tropas e instalaciones militares tuvo el efecto de replegar a los cuadros zapatistas a lo más profundo de la zona. También se cerraron líneas de suministro y se intentó disuadir a la población de que no apoyara a la insurgencia. En algunos casos esta estrategia funcionó y en otros no. En ocasiones ello se debió a que el lazo que une a muchos combatientes zapatistas tiene que ver con fuertes raíces étnicas y familiares difíciles de abandonar.

Por otro parte, en lo que respecta a la cara violenta del conflicto, nuestro objeto de estudio vuelve a estar sujeto a un fenómeno recurrente en la experiencia contrainsurgente

³⁰¹ Huw Bennett, op. cit., p. 469.

en nuestro país; aquel que Benítez Manaut identifica como la “feudalización del conflicto”, es decir, el proceso mediante el cual las autoridades y el ejército ceden la operación de la estrategia a las élites locales.³⁰² En este sentido, vuelven a cobrar fuerza las organizaciones de corte paramilitar como forma de contener a las insurgencias armadas.

Los paramilitares en México representan una constante histórica. Como lo observamos en el caso de la Liga e, incluso en el del EZLN, los grupos paramilitares, actuando al margen de la ley, han logrado contener y desincentivar en ocasiones la acción de diversas insurgencias, aunque a un costo muy elevado en términos de derechos humanos. La masacre de 45 personas en Actelal ejecutada por uno de estos grupos es sólo la punta de lanza de un conjunto de agravios que siguen ocurriendo en suelo chiapaneco. De esta forma, aunque pareciera que la estrategia del gobierno ha priorizado el componente político para contener al EZLN, lo cierto es que el constante acoso por parte del ejército y la operación de grupos paramilitares en la zona establecen condiciones en las que el miedo predomina para contener la insurgencia.

Retomando a Connable y Libicki para reflexionar sobre el resultado de esta campaña de contrainsurgencia, podemos afirmar sin duda que este se ha prolongado en la indefinición. La principal muestra de este argumento es, claramente, que el EZLN continua en la actualidad operando en tierras chiapanecas. En efecto, pareciera que la fase militar de este movimiento concluyó hace tiempo para dar paso a acciones en el ámbito político que tengan impacto en los espacios locales. Sin embargo, el grupo nunca se ha sometido a un proceso de desarme que garantice al gobierno que la guerrilla se ha desintegrado. Es de llamar la atención que el EZLN continúe realizando actividades que

³⁰² Jorge Luis Sierra Guzmán, op. cit.

tienen que ver con la organización de la sociedad y el desarrollo de las autonomías indígenas; también que gobierne municipios autónomos y que realice grandes marchas para demostrar que siguen ahí. La reflexión en torno a este tema apunta a que el gobierno les ha concedido una suerte de reconocimiento institucional que les permite seguir operando siempre y cuando no se salgan de los límites establecidos por los arreglos institucionales.

De esta manera finaliza esta investigación. Como su nombre lo indica, *Contrainsurgencia a la mexicana* apunta al principio de que cada experiencia es diferente de acuerdo a las condiciones específicas del lugar en que se desarrollan las insurgencias. La experiencia mexicana y los casos que expuse en líneas anteriores nos dan herramientas para sugerir que la respuesta contrainsurgente en México adquiere diferentes dimensiones de acuerdo al momento que viva el conflicto. La evidencia recuperada en este trabajo me permite sostener que aunque pareciera que en ocasiones la respuesta gubernamental es desmedida y meramente represiva, también existen momentos en que las autoridades activan mecanismos políticos de solución que refuerzan o apuntalan la presencia del Estado. Tomando en cuenta la represión que se vivió durante la década de los setenta y los agravios que han sufrido las comunidades chiapanecas por la presencia zapatista en sus tierras, es difícil tomar distancia y alejarnos de la cara violenta del conflicto. La respuesta represiva existió y es innegable que esta tiende a exacerbarse en la experiencia mexicana. Sin embargo, la principal intención de este trabajo es dar cuenta de los matices que conlleva dicha respuesta, así como las condiciones que llevan a incentivar o frenar determinadas acciones.

Finalmente, para concluir este trabajo, me gustaría reflexionar sobre el asunto de la tradición armada en México, idea que subyace a esta investigación. La emergencia de realizar estudios sobre los grupos armados en México adquiere una especial relevancia porque, como vemos hoy en día, la gente se sigue armando. Dejando a un lado la época revolucionaria, el siglo pasado fue testigo de diversas expresiones de descontento social que devinieron en la conformación de organizaciones armadas. La justificación y las modalidades cambian, como este estudio lo pudo probar. Lo que en alguna época fueron las ideas comunistas y la cusa revolucionaria, en otra época fueron las reivindicaciones étnicas, ahora se ha transformado en una necesidad por asumir el control en espacios locales donde el Estado lo ha perdido. Hoy en día, la proliferación de grupos de autodefensa y guardias comunitarias, que aparentemente se guían por un deseo legítimo de recuperar condiciones mínimas de seguridad en sus localidades, pone nuevamente en el centro de la discusión la necesidad de replantear la estrategia del Estado frente a estos grupos. ¿Bajo qué lógica operan?, ¿cómo se conforman?, ¿qué demandan?, y ¿cómo dar salida a las distintas demandas que defienden? son cuestiones que se tienen que analizar para dar una respuesta adecuada. Es mi intención que este trabajo, aún y cuando propone el análisis de insurgencias que han sido desactivadas o contenidas, sea de utilidad para la reflexión sobre estos temas y las diferentes dimensiones que influyen en su análisis.

BIBLIOGRAFÍA

Aguayo, Sergio. *La charola*, México DF, Grijalbo, 2001.

Asprey, Robert. *War in the Shadows: The Guerrilla in History*, New York, William Morrow, 1994.

Barmayer, Niels. "The guerrilla movement as a project: An assessment of community involvement in the EZLN", en *Latin American Perspectives*, Vol. 30, No. 1, Indigenous Transformations Movements in Contemporary Latin America, Jan. 2003, pp. 122-138.

Bellingeri, Marco. *Del agrarismo armado a la guerra de los pobres*, México DF, Casa Juan Pablos, 2003.

Benítez Manaut, Raúl. "La teoría militar y la guerra civil en El Salvador", UCA Editores, San Salvador, 1989.

----- "Negociaciones de paz en el tercer mundo: un análisis comparativo", en *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, No. 28, 1995, pp. 67-89.

----- Chiapas: el Estado y las Fuerzas Armadas ante la insurgencia, ponencia presentada en la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, 11 de septiembre de 1998.

----- "Seguridad nacional y transición política, 1994-2000", en *Foro Internacional*, Vol. 41, No. 4, Oct-Dic 2001, p. 963-991.

Bennett, Huw. "Minimum force at British counterinsurgency" en *Small wars and insurgencies*, 21:3, 2010, 459-475.

Berdal Mats. "How New Are New Wars? Global Economic Change and the Study of Civil War", en *Global Governance*, Vol. 9, No. 4, 2003, pp. 477-502.

- Betz, David. "Counterinsurgency: Victorian style", en *Survival: Global Politics and Strategy*, 54:4, 2012, 161-182.
- Bulloch, Gavin. "Military Doctrine and Counterinsurgency: A British Perspective." en *Parameters*, XXVI, 2, 1996, 4-16.
- Callwell, Charles E. *Small Wars: their principles and practice*, New York, Cosimo Classics, 2010.
- Casar, María Amparo. "Las bases político institucionales del poder presidencial en México" en *Revista Política y Gobierno*, 1996, Vol. III, No. 1, p. 81-82. pp. 61-92.
- Castañeda, Jorge. *La utopía desarmada*, México DF, Grupo Editorial Planeta, 1993.
- Castellanos, Laura. *México armado*, México DF, Ediciones Era, 2007.
- Collier, David y Collier, Ruth. "Inducements versus constraints: disaggregating corporatism" en *American Political Science Review*, 1979, vol. 73, pp. 967-986.
- Condés Lara, Enrique. *Represión y rebelión en México (1959-1985) Vol. 1*, México DF, Porrúa, 2007, p. 112.
- Dixon, Paul. "Hearts and minds? British counterinsurgency from Malaya to Iraq" en *Journal of Strategic Studies*, 32:3, 2009, 353-381.
- Favela, Margarita. "Cambios en el sistema político y en la protesta social en México, 1946-2000: la interacción entre instituciones y la acción social", en *Estudios Sociológicos*, 2005, Vol. 23, No. 68, pp. 535-559.
- Galula, David. *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, London: Praeger, 1964
- Gamiño Muñoz, Rodolfo. *Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México*, México DF, Instituto Mora, 2011.

García Naranjo, Francisco Alejandro. “La lucha guerrillera y los tiempos de esperanza en Chile“, en *Tzintzun Revista de Estudios Históricos*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, formato electrónico

http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn16/guerrilas_en_chile.pdf, p.103.

Glockner, Fritz. *Memoria Roja*, México DF, Ediciones B, 2007, pp. 103-108.

Gregg, Heather S. “Setting a place at the table: ending insurgencies through the political process” en *Small wars and insurgencies*, 22:4, 2011, 644-668.

Grupo parlamentario del PRD, *Los paramilitares en México*, Cuarto informe sobre las Fuerzas Armadas, Cámara de Diputados, LVII Legislatura del congreso de la Unión, México, 1999.

Henderson, Errol A. y J. David Singer, "'New Wars' and Rumors of 'New Wars'", en *International Interactions*, Vol. 28, 2 (2002), pp.65-90.

Hirales Morón, Gustavo. *La Liga Comunista 23 de Septiembre: orígenes y naufragio*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1977.

Kaldor, Mary. “Elaborating the ‘New War’ Thesis,” en Isabelle Duyvesteyn and Jan Angstrom (eds.) *Rethinking the Nature of War*, New York, 2005, pp.210-224.

Kalyvas, Stathis. “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, en *Análisis Político*, Universidad Nacional de Colombia, No. 42, 2001, pp. 3-25.

Kalyvas, Stathis. “Nuevas y Viejas guerras civiles: ¿una distinción válida?”, en: Freddy Cante y Luisa Ortiz (comp) *Acción política no violenta, una opción para Colombia*, Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario, 2005, pp. 51-77.

Kitson, Frank. *Low-intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping*, London, Faber and Faber, 1971.

- Kurtenbach, Sabine. "State-Building, War and Violence: Evidence from Latin America", en *German Institute of Global and Area Studies Working Papers*, No. 181, 2001, pp. 3-32.
- Kruijt, Dirk. "Low intensity democracies: Latin America in the Post-Dictorial Era", en *Bulletin of Latin American Research*, vol. 20, 2001, pp. 409-430.
- McCuen, John J. *The Art of Counter-Revolutionary War*, St. Petersburg, Florida, Hailer Publishing, 2005.
- Mao, Zedong. *On Guerilla Warfare*, London, Cassell, 1965.
- Merom, Gil. *How Democracies Lose Small Wars*, New York, Cambridge University Press, 2003.
- Montemayor, Carlos. *La guerrilla recurrente*, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1999.
- Morley, Jefferson. "LITEMPO: Los ojos de la CIA en Tlatelolco", en *The National Security Archive*, The George Washington University, 2006.
- Oikión, Verónica y García, Marta Eugenia (ed), *Movimientos armados en México, Siglo XX*, Vol.1, Zamora, Mich. El Colegio de Michoacán, CIESAS, 2008.
- Oikión, Verónica y Urrego, Miguel Ángel editores. *Violencia y Sociedad. Un hito en la historia de las izquierdas en América Latina*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-El Colegio de Michoacán, Morelia, 2012.
- Palacios, Marco. "Colombia: ni estado de guerra, ni estado de paz; estado en proceso de paz", en *Foro Internacional*, Vol. 40, 2000, p. 15-40.
- Petraeus, David y James Mattis. *Counterinsurgency Field Manual (FM 3-24)*, Washington, Department of the Army, 2006.

Piñeyro, José Luis. “Las fuerzas armadas y la contraguerrilla rural en México: pasado y presente”, en *Nueva Antropología*, vol. XX, num. 65, mayo-agosto, 2005, pp. 75-92.

Rey Tristán, Eduardo. “Propuestas revolucionarias en la izquierda uruguaya de los años 60”, en *Revista de Historia de América*, No. 132, 2003, pp. 75-100.

Rid Thomas y Thomas Keany. *Understanding Counterinsurgency Warfare: Origins, operations and challenges*, New York, Routledge, 2010.

Roberts, Adam. “Doctrine and reality in Afghanistan” en *Survival: Global Politics and strategy*, 51:1, 2009, 29-60.

Robinet, Romain. “A revolutionary group fighting against a revolutionary State: the September 23rd Communist League against the PRI-State”, en Fernando Herrera Calderón y Adela Cedillo (eds.) *Challenging Authoritarianism in Mexico: Revolutionary struggles and the Dirty War 1964-1982*, Nueva York, Routledge, 2012.

Sambanis, Nicholas. “What is war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition”, en *The Journal of Conflict Resolution*, vol. 48, no. 6, 2004.

Sánchez, Consuelo. “Breve historia del EZLN”, en *Boletín de Antropología Americana*, No. 32, Julio de 1998, pp. 127-140.

Secretaría de la Defensa Nacional, Informe de labores 1996-1997, México, 1997.

Serrano, Mónica. “Violencia civil en Chiapas: los orígenes y las causas de la rebelión”, en *Foro Internacional*, Vol. 38, No. 4, Oct-Dic 1998, pp. 452-474.

Sierra Guzmán, Jorge Luis. *El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México*, México DF, Plaza y Valdés, 2003.

-----“Armed forces and counterinsurgency: Origins of the Dirty War”, en Fernando Herrera Calderón y Adela Cedillo (eds.) *Challenging*

Authoritarianism in Mexico: Revolutionary struggles and the Dirty War 1964-1982, Nueva York, Routledge, 2012.

Tello Díaz, Carlos. *La rebelión de Las cañadas: origen y ascenso del EZLN*, Aguilar, León y Cal Editores, México, 1995.

Thompson, Robert. *Defeating Communist Insurgency*, St. Petersburg, Florida, Hailer, 2005.

Toledo González, Mónica y Gamiño Muñoz, Rodolfo. "Origen de la Liga Comunista 23 de Septiembre" en *Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad*, México DF, vol. XVIII, no. 52, 2001, pp. 9-36.

Villasana Benítez, Susana. Una propuesta para ampliar el estudio de los zoques en la región del Istmo, en "Memoria del Primer Seminario de investigación científica y tecnológica sobre el Istmo de los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, 2000.

Wager, Stephen J. and Schulz, Donald E. Civil-military relations in Mexico: The Zapatista revolt and its implications", en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 37, No.1, Spring-1995, pp. 1-42.

Wickham-Crowley, Timothy. "Terror and guerrilla warfare in Latin America, 1956-1970", en *Comparative Studies in Society and History*, vol. 32, 1990, pp. 201-237.

----- *Guerrillas and revolution in Latin America*, New Jersey, Princeton University Press, 1993.